



UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS:

**Tipificación de la Prueba Electrónica como mecanismo
autónomo en los delitos de *Child Grooming*. Chiclayo 2018**

Autor:

Bach. Bautista Tinsec Brian Johannes Fernando

Asesor:

Abog. Vargas Rodríguez Cesar

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación: 30 de setiembre del 2022

LAMBAYEQUE, 2022

Tesis denominada: “Tipificación de la Prueba Electrónica como mecanismo autónomo en los delitos de *Child Grooming*. Chiclayo 2018”.

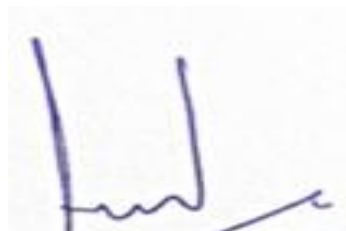


**Bach. Bautista Tinsec Brian Johannes
Fernando
Autor**



**Abog. Vargas Rodríguez Cesar
Asesor**

APROBADO POR:



**Dr. Mondoñedo Valle Amador
Presidente de Jurado**



MARY ISABEL COLINA
Secretario del Jurado

**Mag. Colina Moreno Mary Isabel
Secretaria**



**Abog. Gamonal Guevara José Eloy
Vocal**

Dedicatoria

A mis padres, a mis hermanos, familiares y amigos que han estado siempre a mi lado en este camino y a las personas que han creído en mí y me han inspirado a seguir adelante.

Agradecimiento

A Dios, a mis padres por brindarme la libertad de elegir y tomar mis propias decisiones siempre, sobre todo por guiarme en el camino de la vida, apoyarme con mi desarrollo personal, profesional, son ellos quienes con su ejemplo y sus enseñanzas me han inspirado a seguir. A mis hermanos, a mis amigos más cercanos y a todos aquellos quienes siempre han creído en mí.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN
A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 55-2022-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Brian Johannes Fernando Bautista Tinsec.**

Siendo las 11:00 a.m. del día viernes 30 de setiembre del 2022 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: **“TIPIFICACIÓN DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA COMO MECANISMO AUTÓNOMO EN LOS DELITOS DE CHILD GROOMING. CHICLAYO 2018”**, designados por Decreto N° 138-2019-UI-FDCP-UNPRG de fecha 28 de noviembre del 2019, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE.
SECRETARIO : Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO.
VOCAL : Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA

La tesis fue asesorada por Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, nombrada por Decreto N°138-2019-UI-FDCP-UNPRG de fecha 28 de noviembre del 2019.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°208-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 26 de agosto del 2022.

La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Brian Johannes Fernando Bautista Tinsec** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO con la nota de 15.66 (Quince y 00/66) en la escala vigesimal, mención de REGULAR.**

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 12:01 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link:

Lambayeque, viernes 30 de setiembre del 2022

Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
Presidente del Jurado

Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado

Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA
Vocal del Jurado.

Certificación: *El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 55-2022-UI-FDCP correspondiente a Brian Johannes Fernando Bautista Tinsec, evento que se ha realizado de manera virtual el día viernes 30 de setiembre del 2022 y aparece registrada en el archivo correspondiente.*

Lambayeque, 08 de mayo del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

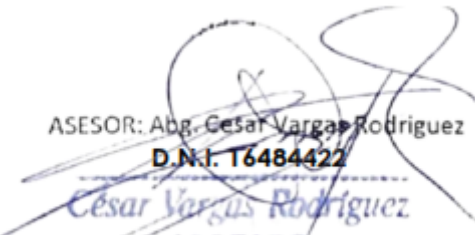
Dr. Rafael Hernández Canelo
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Brian Johannes Fernando Bautista Tinsec, Titulada TIPIFICACIÓN DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA COMO MECANISMO AUTÓNOMO EN LOS DELITOS DE CHILD GROOMING. CHICLAYO 2018, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 18% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 21 de setiembre del 2023



ASESOR: Abg. Cesar Vargas Rodriguez
D.N.I. 16484422
Cesar Vargas Rodriguez
ABOGADO
Reg. N° 1623 - ICAJ

ASESOR



Bach. Brian Johannes Fernando Bautista Tinsec

DNI: 72977106

Autor

TIPIFICACIÓN DE LA PRUEBA ELECTRONICA COMO MECANISMO AUTÓNOMO EN LOS DELITOS DE CHILD GROOMING. CHICLAYO 2018

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE
INTERNET

1%

PUBLICACIONES

10%

TRABAJS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

boa.unimib.it

Fuente de Internet

4%

2

Submitted to Universidad de Chile

Trabajo del estudiante

2%

3

Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Trabajo del estudiante

2%

4

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

1%

5

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

www.travimus.com

Fuente de Internet

1%

7

Submitted to Universidad Carlos III de Madrid

Trabajo del estudiante

1%

8

e-spacio.uned.es

ASESOR: Abg. Cesar Vargas Rodriguez
D.N.I. 16484422
César Vargas Rodríguez
ABOGADO
Reg. N° 1623 - ICAJ




Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Brian Johannes Fernando Bautista ...
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS
Título de la entrega: TIPIFICACIÓN DE LA PRUEBA ELE..
Nombre del archivo: TESIS_FINAL_COMPLETA_-_BRIA...
Tamaño del archivo: 1.14M
Total páginas: 143
Total de palabras: 28,870
Total de caracteres: 157,446
Fecha de entrega: 11-sep-2020 10:05p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1385083890



UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

TIPIFICACIÓN DE LA PRUEBA
ELECTRÓNICA COMO MECANISMO
AUTÓNOMO EN LOS DELITOS DE CHILD
GROOMING. CHICLAYO 2018

ASESOR:

ABOG. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

PRESENTADO POR:

Bach. BRIAN JOHANNES FERNANDO BAUTISTA
TINSEC

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO

LAMBAYEQUE, 2020

Derechos de autor 2020 Turnitin. Todos los derechos reservados.

ASESOR: Abg. César Vargas Rodríguez
D.N.I. 16484422
César Vargas Rodríguez
ABOGADO
Reg. N° 1623 - ICAJ

Resumen

La presente investigación busca establecer que, si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años y es medio engañada, la pena no podrá ser menor de tres o más años e inhabilitación en términos de los artículos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Así mismo la actual investigación se desarrolla con la finalidad de poder incorporar la prueba electrónica dentro del concepto amplio de la prueba documental, en donde la autonomía procesal recurre a un procedimiento probatorio, que funciona para generar confianza en torno a una declaración relacionada con el desempeño. Sin embargo, con esta investigación se requiere agilizar el proceso probatorio y poder incrementar como un medio la prueba documental, protegiendo a los derechos fundamentales y las garantías de los dispositivos técnicos sin llegar a que se ejerza una manipulación y fragmentación de los datos. Se encuentra tipificado por el art. 5 de la Ley de Delitos Informáticos Ley N. °30096, con los nombres de producción de niños, niñas y jóvenes para el sexo por tecnología. El delito ha sufrido diversos cambios desde sus inicios, como es el caso del art. 1 de la Ley 30171 de 10 de marzo de 2014, o la última, vigente, proclamada el 4 de agosto de 2018, mediante la Ley 30838, que reforma el Código Penal y el Código de Ejecución para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad y la culpa sexual.

Palabras claves: prueba electrónica, delitos sexuales, child grooming

Abstract

The present investigation seeks that, if the victim is between fourteen and less than eighteen years old and is half deceived, the penalty may not be less than three or more years and disqualification in terms of articles 1, 2, 4 and 9 of article 36 of the Penal Code. Likewise, the current investigation is developed with the purpose of being able to incorporate electronic evidence within the broad concept of documentary evidence, where procedural autonomy resorts to an evidentiary procedure, which works to generate confidence around a statement related to performance. However, this investigation requires speeding up the evidentiary process and increasing documentary evidence as a means, protecting fundamental rights and the guarantees of technical devices without actually manipulating and fragmenting the data. It is typified by art. 5 of the Law on Computer Crimes Law No. 30096, with the production names of boys, girls and young people for sex by technology. The crime has undergone various changes since its inception, as is the case of art. 1 of Law 30171 of March 10, 2014, or the last, in force, proclaimed on August 4, 2018, through Law 30838, which reforms the Penal Code and the Enforcement Code to strengthen the prevention and punishment of crimes against freedom and sexual guilt.

Keywords: *electronic evidence, sex crimes, child grooming*

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÒGICOS	2
I. ASPECTOS METODOLOGICOS	3
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.2. Formulación del problema.....	7
1.3. Justificación del estudio	8
1.4. OBJETIVOS:.....	9
1.4.1. GENERAL:.....	9
1.4.2. ESPECÍFICOS:.....	9
1.5. Hipótesis	9
1.6. Variables	9
1.6.1. Variable independiente.....	9
1.6.2. Variable dependiente.....	10
1.7. Población y muestra	10
1.8. Recolección de datos.....	10
1.8.2. Técnicas	12
1.8.3. Instrumentos	12
1.8.4. Criterios éticos	13

1.8.5.	Criterios de rigor científico	13
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL.....		15
2.1.	Antecedentes de la investigación.....	16
	Internacional.....	16
	Nacional	17
	Local.....	18
SUB CAPITULO I: LA PRUEBA ELECTRONICA.....		21
2.2.	La prueba electrónica	22
2.2.1.	Eficacia probatoria	22
2.2.2.	Valoración probatoria.....	23
2.2.3.	Test de admisibilidad de las pruebas.....	24
2.2.4.	Obtención y aportación probatoria	24
2.2.5.	Existencia, validez y eficacia	25
2.2.6.	Prueba testimonial	26
2.2.7.	Prueba pericial.....	28
2.2.8.	Prueba documental.....	30
2.2.9.	Informe pericial	34
2.2.10.	Adquisición procesal.....	34
2.2.11.	Reconocimiento e impugnación.....	35
2.2.12.	Sistemas de mensajería instantánea virtuales.....	35

2.2.13.	Redes sociales y otros elementos web.....	37
2.2.14.	Reflexiones informáticas.....	38
2.2.15.	Correo electrónico	39
2.2.16.	Prueba electrónica.....	40
2.2.17.	Requisitos de la prueba electrónica (veracidad + autenticidad).....	44
2.2.18.	Legislación: Insuficiencia de la regulación actual y la tipificación	45
2.2.19.	La incertidumbre tras la “cuestión de prejudicialidad” (Asunto C-207/16)	46
2.2.20.	Casos de documentos que contengan declaraciones informáticas ..	47
SUB CAPITULO II: EL DELITO DE CHILD GROOMING		49
2.3.	El delito de child grooming	50
2.3.1.	Bien jurídico protegido	50
2.3.2.	Pornografía infantil.....	52
2.3.3.	Afectación del bien jurídico y la generación de riesgos	54
2.3.4.	Consentimiento del menor	56
2.3.5.	Libertad e indemnidad sexual	57
2.3.6.	Desconociendo los límites: la necesidad de actuar con medida.....	58
2.3.7.	Los límites en el manejo de su intimidad	60
2.3.8.	Delito informático en una sociedad de riesgo	62
2.3.9.	Modalidad típica.....	63
2.3.10.	Sujeto activo y pasivo	65

2.3.11.	Objeto material del delito	66
2.3.12.	Tipicidad subjetiva	68
2.3.13.	Grados de desarrollo del delito	69
2.3.14.	Consecuencias jurídicas	71
2.3.15.	Principios	72
2.3.15.1.	Principio del interés superior del niño.....	72
2.3.16.	Límites de la libertad de expresión en esfera privada de los menores dentro del ámbito sexual	76
CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS.....		80
3.1.	Análisis y discusión de los resultados o de los instrumentos utilizados.	81
CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS.....		96
CONCLUSIONES.....		102
RECOMENDACIONES		104
BIBLIOGRAFIA		106
ANEXOS		114
ENCUESTA.....		115

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Prueba electrónica.	81
Figura 2. Mecanismo autónomo.	82
Figura 3. Child grooming.	83
Figura 4. Acoso sexual.	84
Figura 5. Delitos de acoso sexual.	85
Figura 6. Procedimiento probatorio.	85
Figura 7. Prueba electrónica.	86
Figura 8. Afirmación relevante para el proceso.	88
Figura 9. Proceso probatorio.	89
Figura 10. Derechos fundamentales.	90
Figura 11. Valor probatorio.	91
Figura 12. Confiabilidad en el proceso.	92
Figura 13. Políticas de preservación digital.	93
Figura 14. Validez de los documentos.	94
Figura 15. Child grooming.	95

INTRODUCCIÓN

La investigación genera que se tipifique la prueba electrónica como un mecanismo autónomo cuando se ocasionan delitos como el de child grooming, frente a esto en la investigación se analizó los medios de pruebas para que se pueda actuar en la búsqueda de la verdad y qué resulta en una revisión judicial.

Normalmente, las diferentes actuaciones probatorias que pueden llevarse a cabo se han resumido en un reducido elenco de medios de prueba, seguido en general por las legislaciones, que distinguen entre los interrogatorios de partes y de testigos, la prueba pericial y la prueba documental, soliéndose añadir, en el proceso penal, el careo.

Así mismo se genera se puede observar que algunos colegas abogados, jueces y fiscales no conocen apropiadamente o desconocen el procedimiento que se debe seguir para la práctica o desahogo de todas las variantes de la prueba electrónica. Por ello, para nosotros está justificado la necesidad del reconocimiento legislativo en el nuevo CPP; más aún si en la actuación de la prueba documental se persigue la autenticidad del contenido de los datos que fluyen en el documento o instrumental, así como su interpretación judicial.

Finalmente, sostenemos que debe denominarse prueba electrónica y no prueba digital porque el término prueba electrónica es más amplio y contiene en su estructura conceptual a la multiplicidad de variantes fácticas que se advierten y verifican en los delitos informáticos, en los cuales obligatoriamente las reglas procedimentales deben ser claras; de lo contrario, la delincuencia cobarde y clandestina de naturaleza informática seguirá haciendo de las suyas. Esta investigación está dividida en capítulos los cuales llegaron a determinar aspectos fundamentales del tema de investigación para que posteriormente se concluya con respecto a la tipificación de la prueba electrónica como un mecanismo autónomo cuando se ocasionan delitos como el de child grooming,

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÒGICOS

I. ASPECTOS METODOLOGICOS

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

1.1. Planteamiento del problema

En pleno siglo XXI es insuficiente la actual regulación procedimental que tiene la prueba electrónica, y no es idóneo que aún se le considere a la prueba electrónica dentro del concepto amplio de la prueba documental o la prueba documental tradicional estricta, ya que existe necesidad razonada que la prueba electrónica debe ser una nueva clase de prueba y debe tener un procedimiento probatorio con plena autonomía procesal, a efecto de evitar seguir recurriendo al procedimiento más análogo para su tratamiento legal en los ordenamientos procesales.

Los métodos basados en pruebas son todos los pasos procesales que se pueden tomar al investigar un punto que arroja un resultado que debe ser considerado por el poder judicial. Normalmente, las diferentes actuaciones probatorias que pueden llevarse a cabo se han resumido en un reducido elenco de medios de prueba, seguido en general por las legislaciones, que distinguen entre los interrogatorios de partes y de testigos, la prueba pericial y la prueba documental, solándose añadir, en el proceso penal, el careo.

Con respecto Abel (2011), Me he asegurado de que cualquier persona que se adhiera firmemente al concepto más amplio de un documento que incluye firmas en papel y manuscritas y viceversa (audio visual, computarizado o digital). (p.22).

Sin embargo, el listado no es cerrado y pueden incorporarse otros medios, como sucede con la prueba de reconstrucción de hechos. Por ello, en el futuro, es factible que surjan otros medios de averiguación de la verdad que no sean reconducibles a los medios de prueba tradicionales y que, por tanto, tal vez propicien la concreción de un nuevo medio de prueba. (Nieva, 2017, p. 338).

Se logra establecer doctrinalmente a la prueba electrónica como aquella información la cual se obtiene a partir de un dispositivo electrónico o un medio digital, en donde llega a formar parte del entorno de un proceso de convicción relevante. Una fotografía, así como un video o una página web es aquellos documentos en donde se requiere ejemplares tecnológicos y magnéticos para poder adquirir la información de manera digital, llegando a utilizarse posteriormente como una prueba electrónica o como documentos electrónicos los cuales sirvan para diferentes reproducción o medios que puedan impugnar. (Abel, 2011, p.23).

Por otro lado, en el Perú a estas comunicaciones se les da un tratamiento legal conforme al de una prueba documental, ya que se las califica como documento multimedia, otros la denominan documento electrónico. Al ser un medio de prueba atípico en los ordenamientos procedimentales, es hora que la ciencia procesal en su categoría probatoria se actualice o reforme ante lo evidente en la praxis procesal. Nieva (2017) distingue las siguientes categorías de pruebas electrónicas, en primer lugar, tenemos los sonidos que se ejecutan a través de documentos, representados por los cintas o discos magnetofónicas; luego los documentos de imagen, que comprenden las diapositivas; posteriormente los documentos de texto y alfanumérico, representados por las zonas magnéticas y el dinero plástico así como también aquellos documentos ubicados dentro de la multimedia, los cuales incluyen los videos, los discos, tanto duros como compactos, es por ellos que el autor Gómez del Castillo y Gómez los clasifica de la siguiente manera: como instrumentos de ayudan a la captación y la reproducción del sonido como es en el caso de la fono grabaciones así también como es el en caso de la foto como las foto grabaciones dichos instrumentos ayudaran a captar y a reproducir control y medición de los medios electrónicos registrados. (p.379)

De esta manera, preferimos tener un medio y un procedimiento claro, suficiente y determinado antes que seguir apegados a la doctrina analógica para los medios de prueba atípicos, lo cual no debe ser confuso ni ambiguo ante la necesidad probatoria de hechos electrónicos. De prosperar la propuesta de una adecuada tipificación por el legislador como nueva clase de

prueba, deberá especificarse también de manera precisa, clara y concreta todo el procedimiento probatorio que deben realizar y observar los pesquisas e investigadores de la policía y los fiscales desde la fase de búsqueda, recolección, obtención, postulación, admisibilidad, actuación probatoria, incorporación y valoración judicial por el juez de investigación preparatoria (control de garantías) hasta los jueces de conocimiento o decisión.

Según el Artículo 157.- Medios de prueba (nuevo CPP), nos llega a establecer que los objetos que se implementan como medio de prueba requieren que sean acreditados bajo cualquier modalidad que se encuentre permitido de acuerdo a la ley. Sin embargo, existen medidas en donde las diversas personas a través de estos medios vulneran sus derechos y garantiza como es el caso de aquellos sujetos que están siendo procesado en forma en aplicar como una prueba analógica de acuerdo a al problema sobre el cual se encuentre sentenciado.

En caso no estuvieran de acuerdo con la posición expuesta, entonces se justifica que en el Perú y en otros países latinoamericanos se reformule el concepto amplio de prueba documental, o nos apartemos de aquella doctrina extranjera la analógica y se legisle apropiadamente el procedimiento probatorio del medio de prueba electrónico; más aún si es urgente fijar reglas claras para proteger los derechos principales que tiene el hombre y garantías de las personas investigadas frente a la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, seguimiento y localización en el proceso penal, puesto que no existe un debido control sobre la manipulación y fragmentación de datos.

Así mismo actualmente, soy testigo de que algunos colegas abogados, jueces y fiscales no conocen apropiadamente o desconocen el procedimiento que se debe seguir para la práctica o desahogo de todas las variantes de la prueba electrónica. Por ello, para nosotros está justificado la necesidad del reconocimiento legislativo en el nuevo CPP; más aún si en la actuación de la prueba documental se persigue la autenticidad del contenido de los datos que

fluyen en el documento o instrumental, así como su interpretación judicial. (Abel, 2011, p.81).

Finalmente, sostenemos que debe denominarse prueba electrónica y no prueba digital porque el término prueba electrónica es más amplio y contiene en su estructura conceptual a la multiplicidad de variantes fácticas que se advierten y verifican en los delitos informáticos, en los cuales obligatoriamente las reglas procedimentales deben ser claras; de lo contrario, la delincuencia cobarde y clandestina de naturaleza informática seguirá haciendo de las suyas, más si en muchas de sus acciones delictivas utilizan bases y datos encriptados o mediante el uso de técnicas y herramientas complejas y modernas (malware) para ejecutar las modalidades de fraude informático, mensajes con contenido obsceno y ofensivo, hostigamiento o acoso, terrorismo virtual, pornografía infantil y propiedad intelectual en las que no son suficientes las reglas de la prueba documental tradicional.

Ahora referente al delito en estudio se puede establecer que los actos establecidos como Child grooming o de la forma conocida como ciber acosos con intenciones sexuales, Panizo (2011), señala que:

“Aquellas acciones preconcebidas que lleva a cabo un adulto a través de internet para ganarse la confianza de un menor de edad y obtener su propia satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas que consigue del menor, pudiendo llegar incluso a concertar un encuentro físico y abusar sexualmente de él”. (p. 24)

Siguiendo las recomendaciones de la Convención Europea para la Protección del Niño contra la Agresión Sexual y la Agresión Sexual del 25 de mayo de 2007, varios países han considerado el abuso sexual infantil como una violación de la ley. El art. 23 del mencionado convenio señala lo siguiente:

Cada parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante

las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18 con el propósito de obtener cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1.a) del artículo 18 o al apartado 1.a) del artículo 20, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro. (Díaz, 2012, p. 5-43)

La herramienta internacional antes mencionada da libertad a todas las partes del estado para elegir la edad en la que no se tolerarán los actos sexuales con una persona de bajo estatus. También señala que la cuestión práctica de las relaciones sexuales planificadas (*child grooming*) debe tener como objetivo tener relaciones sexuales con la víctima o exponer la pornografía infantil.

A través de las ultimas leyes ha generado la modificatoria del art. 5 de la Ley N° 30096, el cual configura de la siguiente manera:

Artículo 5.- Propositiones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos

El que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal.

Si la persona considerada victima tiene entre 14 a menos de 18 años de edad y ha sido engañado, la pena estará conformidad por no menor de 3 años y ni mayor de 6, de acuerdo a lo establecido 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal.

1.2. Formulación del problema

¿Por qué la tipificación de la prueba electrónica como mecanismo autónomo servirá para tener una mejor adecuación del tipo penal en los delitos de *child grooming*?

1.3. Justificación del estudio

La investigación se desarrolló con la finalidad de poder incorporar la prueba electrónica dentro del concepto amplio de la prueba documental, en donde la autonomía procesal recurre a un procedimiento probatorio, el cual sirve para formar la convicción en torno a una afirmación relevante para el proceso.

Sin embargo, con esta investigación se requiere agilizar el proceso probatorio y poder incrementar como un medio la prueba documental, protegiendo a los derechos fundamentales y las garantías de los dispositivos técnicos sin llegar a que se ejerza una manipulación y fragmentación de los datos.

Así mismo es necesario debido a que con el avance de la tecnología han surgido diversas oportunidades, para el bienestar de una persona hasta de una sociedad entera, ya que mediante esta evolución de la tecnología se han realizados inmensidades de actividades para el desarrollo de un estado, pero es primordial señalar que mediante lo bueno va surgiendo lo negativo hace lo mismo, y es por ende realizar una correcta investigación sobre uno de los delitos que hoy en día han surgido como el *child grooming*.

Escrito por el art. 5 de la Ley sobre delitos informáticos Ley núm. 30096, con el nomen iuris de proponer niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios técnicos. Se han producido varios cambios desde la introducción de este delito, como en el caso del art. 1 de la Ley no. 30171 el 10 de marzo de 2014, o la última, que se encuentra vigente, fue publicada por Ley núm. 30838 de 4 de agosto de 2018, que reforma el Código Penal para prevenir los delitos contra la libertad sexual y reparación y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la pena.

1.4. OBJETIVOS:

1.4.1. GENERAL:

Determinar si la tipificación de la prueba electrónica como mecanismo autónomo servirá para tener una mejor adecuación del tipo penal en los delitos de *child grooming*.

1.4.2. ESPECÍFICOS:

- a. Identificar los mecanismos para poder tipificar la prueba electrónica como mecanismo autónomo de la prueba documental.
- b. Describir el delito de *child grooming* en función a la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e internacional.
- c. Analizar los datos y jurisprudencia de acuerdo a las encuestas aplicadas y sentencias analizadas.
- d. Proponer la tipificación de la prueba electrónica como mecanismo autónomo de la prueba documental.

1.5. Hipótesis

Si se tipifica la prueba electrónica como mecanismo autónomo entonces esta servirá para tener una mejor adecuación del tipo penal en los delitos de *child grooming*

1.6. Variables

1.6.1. Variable independiente

Tipificación de la prueba electrónica

1.6.2. Variable dependiente

Los delitos de *child grooming*.

1.7. Población y muestra

Población

Es considerada el conjunto de personas que conformará parte de la investigación, la cual estará constituida por especialistas como son los jueces penales, Abogados especializados en el derecho penal y los fiscales.

2.1.1. Muestra

De acuerdo a lo establecido por Hernández (2016), señala que a través de un valor no probabilístico se establecerá una muestra de 50 personas que conformaran parte de la encuesta.

Tabla N. 1.- Comunidad jurídica

	Nº	%
Jueces Penales del Distrito Judicial de Chiclayo	8	16%
Fiscales del Ministerio Público de Chiclayo	12	24%
Abogados especialistas en Derecho Penal	30	60%
Total de informantes	50	100%

Fuente: Propia de la Investigación

1.8. Recolección de datos

1.8.1. Métodos.

a. Método analítico- sintético.

En el estudio, los usos principales se utilizaron para identificar, clasificar, analizar y procesar los datos recopilados, es decir, después de la clasificación, se separaron y determinaron identificando los temas, lo más importante. Con la motivación de no perder la teoría, se puede validar a partir de este simple hecho que en ese momento la sabiduría de la investigación realizada por los expertos de la investigación, los resultados, los resultados, la evidencia y resumen de las actividades de investigación involucradas.

b. Método deductivo - inductivo.

Este enfoque es útil a lo largo del estudio porque, después de leer y analizar los estudios, se realizan las normativas legales, nacionales y las comparaciones para identificar y analizar los hallazgos de los problemas de investigación.

c. Método Histórico.

La metodología utilizada servirá de base para realizar la investigación sobre el tema propuesto, así como para definir las reglas aplicables al ensayo y al tema del proyecto.

Métodos Jurídicos.

a. Método doctrinario.

El método se utilizó para seleccionar información sobre una base pedagógica y para distinguir diferentes posiciones y perspectivas sobre proyectos de investigación, de autores nacionales y extranjeros, de ahí el énfasis en estas actividades de investigación.

b. Método hermenéutico.

Gracias a la implementación del método de tratamiento, la clasificación de la evidencia electrónica se puede establecer como un método separado para los delitos de protección infantil, que se lleva a cabo estrictamente bajo criterios analíticos.

c. Método exegético.

Este estudio se realizó de forma restrictiva por los artículos normativos mencionados

1.8.2. Técnicas

Técnicas

A medida que desarrollemos nuestro tema, usaremos técnicas de recolección de información que nos permitan conocer las etapas de la definición de nuestro producto, para que finalmente podamos hacer sugerencias basadas en los resultados.

Encuesta

Se enviarán preguntas a jueces y fiscales de la ciudad de Chiclayo para conocer su opinión sobre el veredicto.

1.8.3. Instrumentos

Instrumentos

El actual instrumento nos ayudará a poder recopilar toda la información de la investigación a través de técnicas.

Cuestionario

La herramienta se utilizará con fines de investigación para recabar información sobre las opiniones de jueces y fiscales de la ciudad de Chiclayo, que se seleccionarán cronológicamente.

1.8.4. Criterios éticos

Con base en los criterios citados por Belmont (1979) en su informe "Principios y estándares éticos para el desarrollo de investigaciones que involucren personas", utilizaremos lo siguiente:

Autonomía: Es la capacidad de las personas para considerar deliberadamente sus motivos personales y actuar sobre las decisiones que toman.

Beneficencia: "Hacer el bien" se refiere a la obligación moral de actuar por el bien de los demás. Reducir el riesgo y promover la salud o el bienestar. Este es un principio de secreto y su desobediencia no ha sido sancionada.

Justicia: Distribución equitativa de cargas y beneficios. El significado de saber si una acción es correcta o incorrecta, desde un punto de vista judicial, es comprobar si la acción es correcta o no.

1.8.5. Criterios de rigor científico

Para Hernández y cols. (2003) Esto se aplica a la validación como herramienta para medir la varianza que desea medir, la precisión de la información, la precisión de la recopilación y la importancia de las variables. (p.242)

Fiabilidad o consistencia. - La confiabilidad se refiere a la posibilidad de repetir estudios, es decir, un investigador usa los mismos métodos o estrategias para recolectar datos que otros y obtiene el mismo resultado.

Validez. - La garantía es la interpretación correcta de los resultados y se convierte en un apoyo importante para la investigación de calidad.

Credibilidad o valor de la verdad. -La medida de confiabilidad o la calidad de la verdad, también conocida como autenticidad, es un requisito importante porque permite evidenciar hechos y vivencias personales, porque son percibidos por los sujetos.

Transferibilidad o aplicabilidad. - La transferencia o el procesamiento tiene la capacidad de transferir resultados de búsqueda en otros contextos.

Consistencia o dependencia. - La estimación se conoce como reproducción e indica la estabilidad de los datos.

Confirmabilidad o reflexividad. -La verificación permite conocer el rol del investigador durante el campo y conocer el alcance y los límites del control de los posibles juicios o críticas sobre el evento o los estudios involucrados.

Relevancia. -La relación permite evaluar la efectividad de las metas planteadas en el proyecto e indica si finalmente se ha adquirido un mejor conocimiento del evento o si ha habido un efecto positivo en el significado, aprendiendo, por ejemplo, cambio en el Evento o actividad. estudiantes participantes.

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes de la investigación

Internacional

Para el autor Vargas (2017), en su investigación: “Vulnerabilidades en la incorporación y admisibilidad de la prueba electrónica en el proceso penal costarricense”, para obtener el título profesional de Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, afirmamos que podemos afirmar que la prueba electrónica es una herramienta jurídica que puede cambiar con facilidad, tanto sea de cuerpo y de fondo, es decir, puede ser alterada su autenticidad e integridad, lo cual con respecto a estos avances tecnológicos se puede detallar que es necesario un análisis profundo y generar mecanismos de seguridad, para que de esta manera las personas inescrupulosas no puedan alterar las pruebas fundamentales para un caso.

Sin embargo Olmos (2009), en su investigación: “*Valor probatorio de los documentos electrónicos*”, para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad de México, afirma sobre los avances tecnológicos hoy en día es una realidad ya que los jueces y legisladores están siendo sobrepasado por esta herramienta jurídica, lo cual podemos identificar que en la actualidad estas pruebas son meramente fundamentales en la mayoría de los casos, pero tanto es el avance tecnológico que con respecto al derecho se actualiza en pequeñas escalas, por esta razón los jueces se deben prepara de manera exhaustiva con respecto a la valoración de documentos electrónicos de hoy en día.

De acuerdo a lo que manifiesta Reyes (2013), en su investigación titulada: “*La valoración del documento electrónico en Colombia*”, para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad de Colombia, establece que la valoración de la prueba es una del parte principal de un proceso donde se verificarán si las pruebas presentadas por las partes son accesibles para el caso, lo cual, si en la actualidad los jueces o las personas que ejercen el derecho no está actualizados con los avances tecnológicos o no tiene un

conocimiento claro y preciso, estos medios probatorios quedaran obsoletos en el proceso, por lo tanto, es necesario un análisis correcto seguido de capacitaciones, para que puedan detectar y familiarizarse con lo novedoso de hoy en día.

El autor Mut (2014), en su investigación titulada: *“Los documentos electrónicos en el ámbito del proceso”*, para obtener el título profesional de Doctor en Derecho de la Universidad de las Islas Baleares, hace relevancia con respecto a la prueba electrónica puede considerarse o mencionarse de dos formas la primera la ya mencionada y por ende la siguiente es conocido como el documento electrónico, lo cual podemos analizar que no se encuentra una legislación clara y precisa que ayude a este mecanismo jurídico aplicarse de manera correcta y no existan vacíos legales a favor de las personas delictuosas, por lo tanto, es considerado que los reglamentos que regulan esta herramienta jurídica se contradicen y se encuentra ineficaz para cualquier proceso.

Se hace mención que Gomez (2011), en su investigación titulada: *Los documentos electrónicos y su valor probatorio: en procesos de carácter judicial*, para obtener el título Profesional de Maestría en Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, afirma que los documentos digitales o electrónicos a nivel internacional son consideradas pruebas fundamentales en un proceso judicial, lo cual ha tomado una relevancia importante en los casos judiciales que estén relacionado a la globalización electrónica, es decir ahora en la actualidad toda actividad que se realizar contempla la realización del uso electrónico, lo cual podemos utilizar esta actualización a beneficio de usar las pruebas electrónicas a favor de una solución de conflicto eficaz.

Nacional

De acuerdo a lo que determina Pérez (2014), en su investigación titulada: *La prueba electrónica: Consideraciones*, para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad de Lima, establece que el problema que hoy en

día encontramos es explicar o de qué manera se pueda aplicar este mecanismo jurídico sin que exista una impugnación de por medio, ya que esta herramienta jurídica tiene como objetivo probar de manera precisa por las distintas formas que son consideradas pruebas modernas como audiovisuales, instrumentos informáticos, por lo tanto, es fundamental que se acceda en el proceso penal o civil.

Según lo que manifiesta Duarte (2012), en su investigación titulada: *“Valoración probatoria de los documentos audiovisuales”*, para obtener el título profesional de Maestría en Derecho con Mención en Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, determina que en algunos sectores del estado peruano se puede concluir que aun presentan una resistencia de aceptación del valor de la prueba, ya que no se encuentra actualizados o el estado no ha implementado medidas eficaces a favor de los jueces que es necesario que con el transcurrir de los días o los avances tecnológicos sus conocimientos deben actualizarse, ya que a nivel internacional este mecanismo jurídico es una de las claves principales para determinar y solucionar la mayoría de casos.

Por otro lado el autor Paredes (2013), en su investigación titulada: *“De los delitos cometidos con el uso de sistemas informáticos en el distrito judicial de Lima, en el período 2009-2010”*, para obtener el título profesional de Magister en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, hace referencia que la criminalidad hoy en día está abarcando una escala sorprendente al igual como avanza las cosas positivas también se desarrolla lo negativo, ya que se puede afirmar que los delitos informáticos están en cada etapa de un proceso por lo tanto se es necesario que existan mecanismo para contrarrestar esta inseguridad que acarrea un alto índice de delincuencia.

Local

Como bien lo determina a nivel local Izquierdo (2017), en su investigación titulada: *“Mecanismos de seguridad para contrarrestar ataques informáticos en servidores web y base de datos”*, para obtener el título profesional de

Abogado de la Universidad Cesar Vallejos, nos indica que mediante lo analizado por el autor nos indica que hoy en día la realidad de los avances tecnológicos ha abarcado sustancialmente a nivel nacional e internacional, lo cual recomienda que debe existir un análisis correcto sobre las pruebas realizadas y presentadas, ya que se puede concluir que tanto es el avance que existen dos partes que lo utilizan para su favor el primero los aplicadores del derecho y por lo contrario la parte de los infractores.

Los autores Bazan y Balcazar (2011), en su investigación: “*La prueba pericial en el Proceso Penal Peruano*”, para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad Señor de Sipán, se toma en cuenta que en toda prueba presentada en un proceso tiene un rol primordial ya que de esta forma se determinará supuestos con el único objetivo de buscar la solución, encontrar un culpable o inocente, lo cual este proceso cumplirá una determinada tarea con respecto al fallo, por lo tanto, es necesario el ofrecimiento de la actuación y valoración del proceso penal.

Amoros y Amoros (2015), en su investigación titulada, “Incidencias sobre el delito de grooming en adolescentes: caso región Lambayeque”, tesis para optar el título profesional de abogado de la Universidad Señor de Sipán, según el autor antes mencionado quien considera que los adolescentes del departamento de Lambayeque resultan ser afectados en sus derechos tras el incumplimiento de la ley N 30096 en su artículo 5, en el cual establece que estos adolescentes tras el desconocimiento de lo que es un planeamiento teórico relacionado, a delitos informáticos sobre la identidad y la libertad sexual, pues resulta una clara vulnerabilidad a sus derechos inherentes que estos gozan, así mismo al existir un incumplimiento en el cuerpo normativo nacional e internacional sobre los delitos informáticos sobre identidad y libertad sexual se estaría generando un vacío para los juristas.

Morales (2016), en su investigación titulada, “La inseguridad al utilizar los servicios de redes sociales y la problemática judicial para regular los delitos informáticos en el Perú-2015”, tesis para optar el título profesional de abogado

de la Universidad Señor de Sipán, para el autor antes mencionado, quien hace referencia a un sin fin de normas creadas para poder salvaguardar una diversidad de bienes jurídicos y su ineficaz aplicación en casos determinados sobre el sistema informático, pues resulta ser que se genera un vacío en estas normativas, las cuales entran en un dilema entre los juristas quienes deben aplicar una de estas normativas, teniendo en consideración que no afecte a la persona, sin embargo en el cuerpo normativo nacional encontramos un claro ejemplo como es el delito de hurto regulado en el código penal.

Campos y Ramírez (2013), en su investigación titulada, “Necesidad de proponer se legisle en relación al grooming o ciber acoso sexual infantil como delito independiente y su proposición de incorporarlo en el código penal peruano”, tesis para optar el título profesional de abogado de la Universidad Señor de Sipán, la realidad en que vivimos como lo menciona el autor, cada día es más dañina ya sea por los múltiples factores que existan, es por ello que el Estado necesariamente debe tener una participación netamente activa para contrarrestar las causas que dañan el desarrollo del ser humano.

SUB CAPITULO I: LA PRUEBA ELECTRONICA

2.2. La prueba electrónica

2.2.1. Eficacia probatoria

En principio, el testigo de referencia no está prohibido en nuestra legislación procesal penal, por el contrario, está sostenido en el art. 166.2 del nuevo CPP, el cual lo regula de la siguiente manera, tanto si el conocimiento del testigo es indirecto como si es un testigo referente, debe obtenerse a través del tiempo, el lugar, las personas y a través de él. Al recibir la declaración de las personas señaladas por el testigo remitente como fuente de conocimiento, también estará presente el ejecutivo. Si el testigo se niega a identificar a la persona, su testimonio no puede utilizarse.

La regulación del art. 158.2 del nuevo CPP señala que al testigo de referencia no se le niega eficacia probatoria, quedando establecido que, en el caso de los testigos estos tienen que tener referencia para poder aclarar de una forma repentina y para poder cooperar en situaciones similares, como por ejemplo con las pruebas que sustenten el testimonio y así poder imponer acciones estrictas al imputado en relación con la sentencia impuesta.

Su eficacia probatoria se garantiza si y solo si el contenido de su declaración está corroborado con la concurrencia y declaración del testigo fuente siempre que este no sea quien se está alegando agraviado del suceso, como veremos más adelante o por otros medios de prueba, sean estos testimoniales, periciales, documentales, materiales, etc.

En la misma línea, Arenas y Valdés (2008) sostiene que en referencia a los testigos se tiene que el problema central llega a contribuir a la credibilidad de la declaración referencias, pues lo que los testigos buscan es poder transmitir a través de los ojos y los oídos mensajes los cuales insisten en derivar como aspecto probatorio la supeditada al complemento de género en relación a la

pruebas o a las condiciones las cuales tiene que ser posibles de intervención de manera directa hacia lo testigos.

El mismo criterio comparte Benavente (2012), quien, al analizar el valor probatorio del testimonio de referencia, "Sin embargo, es claro que hay una clara referencia a si la sentencia para justificar la sentencia no será aceptada como un cumplido por el tribunal si es única o solitaria, sin circunstancias directas o indirectas o prueba condicional o confirmatoria de sus declaraciones". Contener riesgos graves, ya que su carácter indirecto puede indicar una pérdida significativa de credibilidad. (p. 261)

2.2.2. Valoración probatoria

En relación a lo expresado por la prueba documental se extiende que existe el pensamiento justificado en donde los juristas familiarizan los diversos discursos escritos, así como los problemas que se presentan sin ayuda a un documento falso, a pesar de ello los documentos buscan que se acrediten la realidad y también que sea conocido para el juzgamiento del juez. Sin embargo, ocurre muchas veces que el documento solamente es leído mas no comprendido realmente. Y, por otra parte, llegan diversas redacciones que comprenden que no solo se busca la intención del autor del documento sino más que todo llegar a la veracidad de lo presentado por el autor, lo cual es de esencia poder percibir si se plantea una correcta interpretación

La valoración se basa principalmente en que la prueba no solo debe ser leída sino debe de aplicar la interpretación en función a los criterios en los que representa el juez como es en el caso de añadir un aporte al juicio valorativo.

La semiótica permite tener de manera coherente un análisis escrito dentro de un aspecto global, teniendo en cuenta el análisis de las frases o las jurisprudencias en el texto que se esta por averiguar como un fuero interno, esto se da en el caos del autor, De igual forma se aplica la aportación para poder contextualizar el documento y así se puede realizar lo que se a

determinar en función a lo ajeno del juez y así se interprete en sentido de los que expresa el documento. Por estas razones, es necesario conocer la identidad del autor, su cultura, su competencia. (documento antijurídico o lenguaje usual). Evitar la interpretación literal o gramatical del documento, sino el contexto (para sí, para otro, para empleado, etc.) (San Martín, 2015, p. 46).

2.2.3. Test de admisibilidad de las pruebas

i) Licitud: Sea obtenido e incorporado conforme a los requerimientos legales.

ii) Inalterabilidad: Esta referida a la pureza de la prueba.

iii) Confiabilidad:

- a. Forma cómo se generó.
- b. Forma en que se conservó.
- c. Identificación de quién lo generó.

iv) Rastreabilidad: acudir a la fuente original de creación o almacenamiento.

- a. Originalidad
- b. Autenticidad
- c. Exactitud
- d. Integridad
- e. Veracidad

2.2.4. Obtención y aportación probatoria

El almacenamiento o seguridad incorpora políticas de máxima seguridad para mantener la confidencialidad, accesibilidad y autenticidad de la información. Documento original vs. copia (fedatario público).

La STSE del 6 de mayo del 2003 (ofrecimiento y valoración de pruebas electrónicas) admite captación de imágenes de sospechoso en vía pública o espacio abierto (no intromisión intimidad).

Asimismo, la STSE del 30 de noviembre de 1992 señala que la admisibilidad de cintas magnetofónicas como medios de prueba está sujeta a las normas de prueba de reconocimiento judicial.

Finalmente, la STSE del 4 de noviembre del 2011 señala que los documentos emitidos por cualquier medio técnico, electrónico, informáticos o telemáticos, si el soporte es diverso igual tiene que gozar de la validez y de la eficacia de los documentos presentando su originalidad, así como también la garantía de autenticidad e integridad.

2.2.5. Existencia, validez y eficacia

i) Requisitos de existencia

- a. Aptitud representativa: hecho, concepto e idea.
- b. Realizado por un acto humano.
- c. Significación propia y entidad necesaria en todos los documentos para afirmar su existencia en el orden jurídico.

ii) Requisitos de validez

- a. Que se prepare voluntariamente.
- b. Realizar las formalidades y el proceso legal de manera lícita con las formalidades de la forma, tiempo y lugar exigidos por la ley.
- c. En el caso de copias que cumplan con los requisitos para su emisión legal.

iii) Requisitos de eficacia

- a. Contenido atractivo.
- b. No hay otros medios válidos para confirmar en su contra.

- c. Ingresa al proceso sin violar la reserva o confidencialidad de la ley impuesta por el emisor o su titular.
- d. Completo, sin modificación, obstrucción o eliminación.
- e. Si se trata de documento emitido en el extranjero, estos deben cumplir requisitos de elaboración y autenticidad.

2.2.6. Prueba testimonial

La pertinencia de este tema se funda en las diversas críticas existentes a las pruebas testimoniales y periciales respecto a su validez y eficacia.

En cuanto a la prueba testimonial se ha percibido un desgaste sobre la veracidad de las declaraciones, ya que los ánimos en las declaraciones, la ausencia de valores sociales y menosprecio personal a las consecuencias del juramento; hacen del testimonio una prueba dúctil y maleable.

El análisis de la prueba testimonial debe ser fundada a nivel judicial en la veracidad del testimonio del declarante, es decir, dar un paso de la visión tradicional de valoración de la persona declarante y ahora enfocada a su testimonio.

A lo largo del tiempo, y en la actualidad, hay referencias sobre la importancia de un adecuado interrogatorio y contrainterrogatorio, un afinamiento de las destrezas del litigio, y hasta un reforzamiento del lenguaje corporal (kinésica), presentando una importancia de quién es la persona que declara.

A las sentencias hay que darles un carácter racional, corroborable y científico; por ello, para la valoración de la prueba debe estarse a los estándares de cada una de ellas. Tratándose de la valoración del testimonio, debe utilizarse las reglas de la psicología del testimonio. Está determinado que las personas olvidan con facilidad, que a mayor transcurso del tiempo, mayor es la posibilidad de olvido y resulta bastante probable la implantación de información inexacta, producto de la interacción social. Conforme pasa el tiempo la información se pierde o disminuye y el nivel de recuerdo decrece,

esto consolida lo que en doctrina se llama los falsos recuerdos o falsas memorias.

Es por lo anterior que, al momento de emitir un fallo, el juez debe ponderar la prueba testimonial a la luz del tiempo transcurrido. Así se han establecido una serie de parámetros o filtros para ponderar la prueba testimonial propiamente para confirmar la credibilidad de una declaración, que son las siguientes:

- a) Conexión de la narración
- b) Contextualización de la afirmación de los autores
- c) Preexistencia de las confirmaciones lindantes
- d) Visión de las declaraciones.

Se tiene que tomar en cuenta que una declaración resulta no muy coherencia cuando se describe sin precisión dentro del contexto para el declarante es decir sin tomar en cuenta cómo sucedieron los hechos, es por ellos que se puede acreditar que se estuvo allí. Además, se tiene en cuenta que los medios de prueba llegan a determinar lo que dice el declarante llegando a no deslizar la información alguna, pues en el aspecto psicológico el oyente busca la veracidad de la declaración, sin duda la mayoría va a merecer credibilidad. Empero, como bien lo sostiene la doctrina, la simple coherencia y precisión de un relato no apareja su veracidad, de igual modo la omisión o vaguedad de la declaración no implica su falsedad.

La experiencia forense nos ha mostrado que cuando una de las partes pretende mentir, ofrece prueba testimonial falsa que vendrá a respaldar su dicho. En ese contexto hay una preparación previa entre estas a efecto de no incurrir en contradicciones y mantener una línea declarativa. En esos casos, resulta recomendable para la contraparte que explore en el contrainterrogatorio un abordaje de los temas periféricos de la declaración, no en su núcleo; ya que, tradicionalmente, las declaraciones aprendidas se concentran en temas nucleares, siendo en los aspectos periféricos donde la componenda fracasa.

2.2.7. Prueba pericial

Como medio de prueba que es, pretende dotar al juez de elementos de convicción para acudir a la verdad real de los hechos. Si bien esta prueba es emitida por peritos o personas con conocimientos especiales en una materia, no se está exento de pruebas que incumplen con los requisitos de validez y fiabilidad.

Tratándose de pruebas científicas, el tema se vuelve aún más complejo, ya que los estándares de confiabilidad deben ser superiores ante lo especializado de la materia y las repercusiones de los resultados.

Por ello, en tratándose de prueba científica se requiere:

- a. Validez científica y/o metodológica de la prueba.
- b. Calidad de la prueba: corrección técnico procedimental en el proceso de obtención probatoria y análisis científico (protocolos).
- c. Realización por personas.

Los casos que se verán fijan estándares objetivos para las pruebas científicas a efecto de lograr la verdad procesal. De esta forma, para ponderar la prueba pericial, el control judicial debe realizarse en doble vía, por un lado, ponderar al perito, y por otro, al dictamen. En cuanto al perito, debe considerarse la hoja de vida o currículum, es decir, su trayectoria. Respecto al dictamen, el mismo debe ser coherente y accesible, es decir, bien redactado.

En materia pericial, la sentencia Daubert dio la luz para ponderar dictámenes, recomienda expulsar del proceso dictámenes mal hechos. Por esto, el juez debe realizar un control de los criterios de calidad del dictamen. Así, por ejemplo, el perito debe justificar las conclusiones conforme a la ciencia, debe aportar publicaciones científicas que acrediten sus líneas argumentativas. Debe presentar los métodos conforme a la ciencia y verificabilidad de las reglas (ejemplo: instrumentos utilizados). Además, el juez debe valorar las

publicaciones del perito, el grado de acierto de la hipótesis utilizada y el grado de confirmación.

En los casos Daubert contra Merrell Dow Pharm y Frye se sostienen que a efecto controlar y determinar la corrección científica y técnica del medio empleado y conocimiento científico se requiere que la controlabilidad y fiabilidad de la teoría científica: Esto quiere decir que existe una corroborabilidad empírica de la teoría o técnica utilizada.

Revisión y control de técnica: La técnica ha sido publicada en revistas sometidas a revisión permanente comunidad científica, lo que determina su validez.

Margen de error: Conocimiento de probabilidad efectiva o potencial de error.

Estándares: Existencia y mantenimiento de estándares y controles (protocolos) de la actividad científica.

Consenso científico: Aceptación de la ciencia y de la técnica de la comunidad científica.

De este modo, cuando surgen problemas en cuanto a la atendibilidad y confiabilidad, el juez debe ejercer un control preponderante:

Necesidad de conocimiento extrajudicial del juez.

Función Gatekeeper (prueba científica); es decir, tener la capacidad de selección y admisión de prueba científica válida; y controlar los criterios y estándares de admisión y exclusión procesal. De ahí que el resultado es ciencia buena o ciencia basura (junk science), lo que desemboca en la invalidez científica.

- a. Como vemos, entra en crisis el mito de la prueba científica como verdad cierta e indiscutible. Por ello, el juez debe controlar las condiciones del peritaje desde los siguientes ámbitos:

- b. Cualificación profesional del perito: Determina que la persona debe de analizar la información y lo que realiza el perito, así como la valoración de la experiencia conjuntamente con el dictamen.
- c. Calidad expositiva de su dictamen: El perito debe hacer ser considerable frente al esfuerzo que realiza por la exposición que realiza un jurista, esto quiere decir que especialmente se tiene que tener en cuenta el órgano jurisdiccional
- d. Dentro de los indicios de manera objetiva la aplicabilidad de la labor realizada: En función a los indicios de la calidad del dictamen, la persona perita tiene que justificar lo que presenta a través de credibilidad, el perito tiene que dar a entender a la comunidad científica a través de un conjunto, a través de esto se acredita las diversas publicaciones para que den corrección a su dictamen, en función a eso el conjunto es poder controlar el juez e interrogar a las peritos teniendo en cuenta la mínima idea de las ciencias implicadas frente a los dictados frecuentes.

2.2.8. Prueba documental

En el caso de la prueba documental, la base científica se encuentra ligada a la semiótica textual. En ella se valora la contextualización y la modalidad del documento. Es decir, para qué fue hecho, y la determinación del tipo de lenguaje que se utiliza (diferencia entre un mail y un contrato).

Procederemos a enumerar sus principales atributos a efecto de consolidar un posible concepto:

- i) Se trata de presentar un medio de prueba en base a un carácter material.
- ii) Dentro de la prueba tanto en el aspecto real u objetividad tienen que haber soportes en donde se reflejas las ideas de datos o hecho que basen en a narraciones, con la finalidad de poder ejecutar la eficacia probatoria, llegando a introducir el juicio oral como un principio de oralidad a través de la lectura de la audición o del visionado.

iii) Aporta en que el proceso guarda una relación con la materia debatida, en donde las cosas emergen y también los objetivos llegan a soportar los materiales que se encuentran aptos para poder llegar a conservar o poder dar a comprender la expresión de las voluntades.

iv) Trata de obtener certeza sobre afirmaciones partes. Busca generar convicción judicial.

v) Es una cosa mueble que ha sido creada o manipulada por el hombre con el fin de transmitir algo.

vi) Deja constancia de la existencia de un hecho en el tiempo (diferente al testimonio sujeto a cambio).

vii) Cosa que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Creado por el ser humano.

viii) El documento tiene la virtud de ser fuente de prueba, objeto de prueba y medio de prueba.

ix) El documento preexiste al proceso y es independiente y ajeno a él.

x) Son modos en los cuales el ser humano deja constancia de su acción o de su voluntad, de la acción o de la voluntad de otro, por signos entendibles en el futuro (Maier).

xi) Siguiendo al profesor Asencio Mellado, documento es toda representación que se lleva a cabo por cualquier medio de la realidad y ese proceso es preexistente e independiente, por lo que necesariamente contribuye a ello con fines claros. (Asencio 2016, p. 13).

Ahora bien, ¿qué tipo de soportes documentales existen? Sin que se trate de una lista taxativa, sino más bien enumerativa en virtud de los avances tecnológicos tendríamos: escritos, folletos, reproducciones, fax, disquetes, cutículas, imágenes, placas, representaciones gráficas, bosquejos, impresiones magnetofónicas, medios que contienen registro de sucesos, estatuas, mensajes de WhatsApp, imágenes de WhatsApp y otros similares.

Se incluye los documentos en soporte informático: discos magnéticos, discos ópticos, memorias, etc.

Sobre las funciones de la prueba documental podemos enumerar las siguientes: i) la perpetuación: perpetúa actos, hechos y declaraciones de voluntad; ii) garantía: da fuerza probatoria, acreditando hechos y autoría; y, iii) constitutiva: requisito de solemnidad en algunos casos.

En cuanto a una posible clasificación podríamos establecerlas de la siguiente manera:

Según su procedencia:

i) Públicos:

- a. Son los otorgados por funcionario público en ejercicio de sus funciones.
- b) los fedatarios y de las demás personas que intervengan. Sin embargo, plena prueba no es dejar de valorar conforme a las reglas de la sana crítica racional.
- a. No afirman la verdad interior de lo que les ha sido revelado.
- b. En el caso de las quejas, pueden tener potencial cuando se trata de datos pretendidos y verificados por los agentes involucrados en su elaboración; sin embargo, la misma requiere ser objeto de ratificación y control interpartes, en juicio, al encontrarnos ante un sistema acusatorio.
- c. Esta prueba puede ser objeto de tacha en caso que el funcionario no lo haya otorgado o se deduzca su falsedad.
- d. Verbigracia: certificaciones, sentencias, sellos de oficinas, actas de matrimonio, documentos creados por autoridades.

ii) Privados:

- a. El documento no es otorgado por funcionario público.
- b. Debe realizarse una evaluación en relación con todos los demás medios de prueba.

- c. La honestidad es una cosa, porque se participan- tes, y otra distinta la interpretación efectuada del contenido de los documentos.
- d. En el caso de tacha del documento, porque la persona dice desconocer el mismo, debe efectuarse un cotejo contra un documento indubitable o ser objeto de pericia especial.
- e. Verbigracia: diplomas, certificaciones o documentaciones de universidades no estatales, constancias de trabajo.

Según su contenido:

- i) Declarativos: manifestación de voluntad crea obligación. Por ejemplo, pagarés, confesiones, etc.
- ii) Representativos: plasma un hecho, no contiene una expresión de voluntad. Fotografías no editadas, grabaciones, etc.

Según certeza de autoría:

- i) Auténticos: certeza de la persona que lo elaboró (presunción título ejecutivo, contratos, etc.).
- ii) No auténticos: no hay certeza de autoría.

Según originalidad

- i) Original
- ii) Copia: fiel reproducción, tiene el valor probatorio del original cuando está autorizada o autenticadas por un notario, director de oficina pública, secretario judicial, etc.
- iii) Falso

En cuanto a los elementos esencia- les del documento se encuentran los siguientes: i) corporalidad: en tanto muestra o enseña algo (es la cosa misma: papel y otros soportes); ii) docencia: el mecanismo utilizado puede ser escrito

y no escrito; e, iii) incorporación del mensaje al soporte de manera artificial por obra del ser humano.

Tratándose de documentos suscritos en un idioma distinto al oficial para su correcta incorporación se requiere que sea traducido oficialmente. Cuando se trate de documentos audiográficos o videográficos, incluidos electrónicos, en ellos se hace necesaria su audición, visionado y transcripción de un documento.

2.2.9. Informe pericial

La inclusión del informe es un método útil de verificación, ya que proporciona las herramientas y mecanismos para verificar de la manera más eficiente. Se diferencia de otras presentaciones basadas en pruebas y de la revisión judicial. Una respuesta a la contribución de conocimiento a un proyecto derivado de los registros o registros (o libros de texto) de una organización corporativa o independiente a los documentos históricos que se almacenan. Presentada por funcionarios u oradores autorizados. Esta es la forma en que las personas jurídicas transmiten información. Puede ser engañoso u oculto. En estos casos, la presentación, revisión judicial o inspección del expediente administrativo es la misma.

2.2.10. Adquisición procesal

La regla es que toda aquella persona que tenga un documento y ofreciendo como prueba, es aquella que este sujeto a presentar o también a dar a conocer los conocimientos de la validez de los documentos.

No pueden ser incorporados al proceso los documentos que contengan declaraciones anónimas, de caso contrario en que se constituyen para poder incurrir en el cuerpo delictivo y además venga a promover el imputado.

Tampoco pueden ser incorporados, cuando exista prohibición legal: secretos estatales, o aquellos que vulneran la intimidad documental o el secreto profesional; requisito de eficacia del documento.

2.2.11. Reconocimiento e impugnación

Es importante que el autor comprenda el texto. En formato de audio, los documentos y las cintas de video deben ser presentados por alguien que conozca su idioma o por personas que puedan ver la imagen. Aquellos que se hayan registrado también serán invitados, si es posible.

De hecho, los requisitos prácticos se pueden cumplir con la recomendación de expertos. En estos casos, el documento sirve como método de verificación. Demostrar que todos son iguales que el autor, o si se pueden encontrar allí, o la información es la misma. En la literatura pública existe un principio verdadero, si la falsedad de la marca es falsa o se tergiversa la información. En más artículos se requerirá su identidad.

Las partes pueden impugnar los documentos alegando falta de validez y eficacia probatoria.

2.2.12. Sistemas de mensajería instantánea virtuales

Características especiales de este tipo de interacción entre usuarios a través de la aplicación para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes que le permiten compartir mensajes de texto, notas de audio y video, contactos o enviar al mismo lugar; Introduce algunos cambios por correo electrónico y SMS, ya que la información transmitida no es retenida por un servidor externo, por lo que se utilizan protocolos de seguridad para asegurar el cifrado de la información. (Rodríguez, 2015, p. 174) (Arrabal, 2017, p. 461), y que resulta disponible en multiplataforma: IOS, Android, Windows Phone.

El hecho de que el contenido no quede almacenado en el servidor del administrador llega a paralizar en que la autoridad solicite que la empresa busca presentar el servicio a través de los mensajes enviados o también los mensajes recibidos, teniendo en cuenta que acudir a los dispositivos electrónicos van a usar a la conversación (García, 2018, p. 172).

Como ocurre con otros medios analizados, cuanto mayor es la posibilidad de fraude en el momento o de identidad o robo de identidad (Rodríguez, 2015, p. 852), muchos estudios se han centrado en la relevancia de involucrarse en el proyecto y analizar a un experto en la información investigada. para la comunicación verdadera o no verbal. relativo a la necesidad de que los internos busquen información legal en relación con bienes similares y la necesidad de la disolución de las disposiciones necesarias, preferiblemente entre el solicitante y el destinatario.

A lo largo de varias resoluciones se estableció que dentro de la carga probatoria de la persona que se encarga de valorar la prueba tiene que pretender también valer a la aprobación para poder obtener el verdadero origen de la comunicación en función a la búsqueda de la identidad de los interlocutores y de la integridad de su contenido. Con todo, el rigor de este lanzamiento del medio probatorio el cual fue matizando notablemente, de manera que si bien resulta taxativa respecto de los llamados “pantallazos” o simples aquellas impresiones que actúan para dar a conocer la información a través de un rastro; en cuanto al resto aportación mediante medios electrónico originales o copias, llegan a acompañar la originalidad del examen singularizado o cauteloso.

Medios electrónicos originales o copia p, o con el original, apelaciones para examen especial y de advertencia.

Si quisiéramos elaborar una sucesión esquemática de los pasos a seguir en la valoración transcurriría así:

- a. La aportación del original otorga mayor facilidad probatoria a cualquier copia o “pantallazo”, al igual que la falta de impugnación puede ser valorados como aceptación tácita de su autenticidad y validez;
- b. Cuando se impugne la autenticidad, corresponde a quien lo ha aportado reforzar aquella, lo que generalmente se llevará a cabo mediante la prueba pericial. Pericia, que, por su parte, Sin embargo, al ser una herramienta conveniente para la prueba por sus características técnicas, no forma un

medio indeterminado, ya que puede depender de las circunstancias dietéticas y del buen desempeño del propio experto o incluso de habilidades especializadas. (Rodríguez, 2003, pp. 391- 396).

Sin embargo, ningún desafío simple endurecerá el valor de lo que es posible, pase lo que pase, ni el resultado será significativo. La evaluación, se sabe, también toma en cuenta reglas importantes que se basan en la evidencia, como las acciones, que son reglas inaceptables, basadas en la capacidad de liberar a los presos (Armenta, 2011, pp. 141-143); Así, la revisión junto con otro tipo de pruebas puede dar lugar a una alegación de falsedad alegada por otros medios, así como al hecho de que la información fue corroborada por los informantes o el testimonio del testigo denunciante. que el acceso a la fuente original esté habilitado; o surgió una disputa entre la información proporcionada por el demandado.

2.2.13. Redes sociales y otros elementos web

Del inabarcable mundo de las redes sociales (Dayara, 2015, p. 742), me centraré en el hecho de que cada usuario construya un perfil público o semipúblico de un sistema demarcado o cerrado y una lista de otros usuarios que comparten relaciones para permitir que las personas se desplacen por la lista de relaciones con otros en el sistema. (Agustinoy, 2016, p. 52).

De las múltiples consecuencias legales que implica este trabajo, la información obtenida de las redes sociales y la evidencia de los delitos involucrados son de clara importancia. En el primer sentido, la búsqueda de hechos requerirá recursos y herramientas clásicos y nuevos destinados a investigar las huellas dactilares, la autoría y / o la ubicación de un proveedor de servicios. Por este motivo, la información obtenida en las redes sociales tiene como objetivo analizar los marcadores digitales así como investigar la ilicitud cometida online y offline.

En ausencia de un principio que regule la provisión de fuentes de prueba de estas características, será posible que el Ministerio de Hacienda o las partes

proporcionen información contenida en las redes sociales desde su propio perfil y desde el exterior, cualquiera que sea el contenido. Se puede acceder legalmente, por lo que la información ingresada voluntariamente en la red para ser compartida con otros usuarios no goza de la protección de la confidencialidad de la comunicación; Sin embargo, la información transmitida entre un grupo limitado o conocido de promotores, la amplitud de actividades en los casos en que haya información en el campo requerirá un examen más preciso.

En cuanto a la valoración de las pruebas, conviene recordar lo dicho hasta ahora en el doble plan: 1) las diversas informaciones ingresadas en el perfil abierto se publican libremente, por lo que no es probable que afecten el derecho a la privacidad; Y 2) en caso de vulneración de algún derecho fundamental, como un sitio web de acceso restringido a un grupo cerrado de personas, la valoración de las pruebas aportadas (documento, inspección visual, peritaje, testimonio o preguntas de la parte o imputado) debe superarse mediante doble verificación: o previsto en las artes Los recursos se obtienen mediante un estricto seguimiento de los requisitos. 588 bis LECrim (generalmente) y disposiciones del art. 588 ter LECrim, en particular; Así como estar involucrado en el proceso y, en su caso, reproducción en juicio oral con las debidas garantías de audiencia y protesta (Sáez, 2015, p. 73). De lo contrario, la ilegalidad de la prueba, si no provocó su exclusión por no ser apropiada, no debilitaría la presunción de inocencia; El mismo efecto que se producirá, aunque no sea fuente de prueba obtenida ilegalmente, en el caso de cualquier medio probatorio que no cumpla con los requisitos de protección y derecho a utilizar todos los medios de conjetura adecuados. (Sáez, 2015, p. 93).

2.2.14. Reflexiones informáticas

Las medidas técnicas utilizadas al momento de obtener la fuente de prueba pueden ser muy agresivas, suponer un alto riesgo y vulnerar muchos derechos fundamentales; En este ámbito, surge una cuestión importante sobre la base de la resolución adoptada por el TJUE pendiente de la decisión primaria de la resolución. Al mismo tiempo, debido a su complejidad e inestabilidad, el ajuste de la prueba debe adaptarse a sus distintas etapas: toma, participación en el proceso y evaluación; Aspectos relevantes del anterior y en los que se requieren nuevos esfuerzos legales para abordar las deficiencias identificadas en este y otros análisis.

Sin embargo, y sin restar importancia al tema central de este trabajo, no se puede ocultar la complejidad de la evidencia digital. Por tanto, las garantías de ambos extremos socavan válidamente la noción de inocencia. Seis estocadas: condenado con pruebas suficientes del imputado; Basado en evidencia legal; Motivación para la libertad condicional; Basado en evidencia suficiente; O en base a motivaciones lógicas, irregulares o últimas, aunque no constituyan un aislamiento impermeable, deben ser respetadas para recibir la sanción como material principal del derecho autónomo de juicio con todas las garantías. (art. 24.2 CE).

2.2.15. Correo electrónico

El contenido de un mensaje consta de sus anexos (texto, imagen, video) y datos de tráfico (fecha, hora, duración, origen y destino), una adecuada definición de lo contenido en el art. 2. H) Directiva 58/2002 / CE, 12 de julio. El correo electrónico puede ser verificado por cualquiera de los dispositivos electrónicos de envío o recepción o por cualquiera de los servidores involucrados, si bien la facilidad de acceso, según la empresa operadora tenga su sede o no en España y la eficacia probatoria de cada uno varía. Con todo, resultará más sencillo probar el contenido del mensaje mediante el acceso en función a los medios electrónicos los cuales son utilizados para poder comunicar a los receptores electrónicos.

Considerando si afectará al derecho fundamental a la comunicación y / o la confidencialidad de la comunicación, en función de si el acceso al correo electrónico se realizó antes de que comenzara el proceso de comunicación, y si los datos del título se basan en él. El mensaje es que la intervención debe estar en consonancia con el sesgo de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales y contribuir al proceso a través de los medios probatorios adecuados.

Es decir, en formato papel, como documento electrónico; a través de copia del disco duro o del servidor se llega estable que el correo electrónico es aquel medio que a través de códigos se calcula de manera pública ante el fedatario (Pereira, 2016, p. 248); acompañándose del correspondiente informe, en donde las conclusiones se pueden presentar a través de una prueba pericial (Martínez, 2013, p. 173); o recurriendo a algún “Prestador de Servicio de Confianza” conforme a lo dispuesto en el Reglamento (Matinez, 2013, p. 153) salvaguardar la cadena de custodia (arts. 777.2,1, II y III LECrim), y reproducirse correctamente en el juicio (art. 797.2,1, II y III LECrim).

El desafío de la veracidad o la integridad por cualquiera de las partes conducirá a la necesidad de probar los hechos por otros medios de prueba, lo que, dada la complejidad técnica, suele ser una habilidad (Rodríguez, 2015, p. 52), aunque no solo ella (Bueno, 2016, p. 144).

Medios informáticos

- a. Fuente de prueba: dentro tienen información o datos.
- b. Objeto de prueba: instrumento que sirve para introducción de la fuente.
- c. Medio de prueba: conducen al pro- ceso.

2.2.16. Prueba electrónica

Compartimos la opinión de Nieva Fenol, quien señala que no es cerrada la configuración legal de los medios de prueba en los códigos procesales, ya que, al estar supeditado a la necesidad de justificar la realidad, es seguro que

próximamente se sustentará una nueva clase de prueba como la electrónica, teniendo como fundamento las siguientes circunstancias: i) la existencia de problemas de interpretación, aplicación, ignorancia o confusión ante el defecto legal de la norma procesal; ii) el avance y desarrollo vertiginoso de la forma en que se conoce, produce y se toma conocimiento de los hechos; iii) las necesidades de prueba ante los nuevos y modernos *modus operandi* delictivos que se van incorporando día a día en la comisión de los delitos comunes, delitos complejos, así como en los aparatos de poder y crimen organizado; iv) por la dinámica de la prueba, y v) las diferencias entre documento electrónico y documento escrito.

En ese sentido, somos partidarios de tipificar en la ley procesal una nueva clase de medio de prueba diferente a los de la prueba personal, prueba documental y prueba técnica o material. A esta nueva clase de medio se le debe denominar prueba electrónica, dado que tiene autonomía y es independiente de la prueba documental tradicional, siendo lamentable que el legislador peruano aún no lo haya percibido respecto a lo que sucede en la realidad intangible y práctica probatoria.

El abogado español Abel Lluch, pero sin ignorarlo, dijo que la electrónica es un dispositivo y que los *fenoles* nievan no están documentados como objetos accidentales, favoreciendo el nombre de prueba electrónica o documento electrónico no solo por su carrera expresiva, sino también porque implica una realidad.

Sucede que en los diversos soportes o dispositivos electrónicos se almacenan metadatos a ser utilizados potencialmente como futura prueba de hechos delictivos. Así, se debe seguir obligatoriamente el procedimiento de la cadena de custodia para retirar, recolectar, copiar u observar la evidencia digital a efecto de evitar que el acto de indagación sea calificado como manipulación u obtención de copia espejo de los datos y, por ende, incurrir en prueba ilícita o prueba obtenida ilegalmente.

No olvidemos que lo que realmente constituye objeto de prueba son los metadatos registrados en la evidencia digital.

Empero, si el investigador los copia directamente en una memoria sin observar el procedimiento técnico, ya vició su legitimidad probatoria a la fuente de prueba digital, la que será cuestionada sin ninguna duda por los sujetos procesales. Por ello, se debe respetar todos los parámetros y estándares probatorios necesarios para preservar, custodiar y proteger la integridad plena del contenido total de los metadatos registrados, ya sean de carácter visual o auditivo, en los que comprenda a sonidos e imágenes.

Evidencia significa todas las acciones procesales que pueden ocurrir durante la investigación de un hecho y dar resultados que estarán sujetos a evaluación judicial.

En ese acápite, si no hay el respeto al procedimiento técnico de cadena de custodia ni al ejercicio de la contradicción, no se les podrá utilizar en la investigación ni en el proceso penal porque lo prohíbe tanto el art.VIII del TP como el art. 159 del nuevo CPP. En sentido contrario, si no se infraccionan derechos y garantías del imputado, el perito informático y el policía pesquisa pueden inspeccionar, recabar, cotejar, comparar y analizar los datos visibles e invisibles que aparecen en la evidencia digital y en cuyo informe pericial además deben precisarse las condiciones técnicas y de conservación, así como datos de la fuente u origen del soporte electrónico, el método e instrumentos tecnológicos, las apreciaciones técnicas profesionales utilizadas a fin de ser controladas judicialmente para calificarlas en su oportunidad como prueba digital.

Dentro de esta clase de prueba que proponemos para su configuración legislativa deben estar incluidas todas las diversas modalidades de las comunicaciones escritas y orales por redes sociales y correos electrónicos, o en cualquier otro medio.

Con respecto Nieva (2017), refiriéndose al documento multimedia y al documento tradicional, sostiene que actualmente no pueden establecerse

diferencias de valoración probatoria entre el documento multimedia y el documento tradicional. Ambos aportan una información que debe ser valorada libremente por el juez, ambos pueden estar firmados, en ambos pueden constar escritos e imágenes, y en algunos documentos, como felicitaciones de cumpleaños en papel, pueden hallarse hasta sonidos.

Lo último evidentemente no es frecuente, pero da fe de una manera gráfica de hasta qué punto se han aproximado unos documentos y otros, de forma que el documento multimedia no es más que una actualización técnica del documento tradicional. En consecuencia, la única práctica posible de la prueba con respecto a estos documentos consiste en leerlos o, en sentido más amplio, visionarlos, directamente por el juez o con la ayuda, normalmente, de un ordenador, dado que tal ingenio actualmente es capaz de reproducir prácticamente cualquier material multimedia, siendo innecesario disponer de otros aparatos para su lectura.

Al respecto, si bien compartimos su razonamiento, solo nos queda precisar que el modelo acusatorio peruano y de otros países latinoamericanos ya no observan al modelo acusatorio mixto, sino el acusatorio garantista en donde priman el respeto y observancia a todas las garantías mínimas de los justiciables y existe separación de funciones entre el fiscal y el juez penal lo que aún existe en España por la vigencia de su Ley de Enjuiciamiento Criminal; actualmente en el Perú durante la plenaria no se le rinde culto al documento escrito, sino a la oralidad que es el vehículo trasmisor del debate oral y el contradictorio; la lectura de documentos o piezas procesales han sido desplazadas, ya que solo se oralizan en aquellos escenarios procesales que no concurren los testigos en observancia del art. 383 del CPP del 2004. (p.379)

Son fuentes de prueba (medios electrónicos o soportes informáticos) que las cuales estos sujetos a los sucesos que contienen imágenes.

Las pruebas electrónicas permiten probar los hechos mediante la producción de voz, sonido e imagen; Así como herramientas destinadas a almacenar y

generar palabras, datos, diagramas y operaciones matemáticas con fines aritméticos u otros. Es un instrumento producido por medios automatizados escrito en lenguaje binario (bits).

Cabe diferenciar dos modalidades: a) la información que se encuentra dentro de los dispositivos de almacenamiento (incluyendo sistemas informáticos y cualquier aparato informático o en el caso de la tecnología digital así como los medios que se encuentran como un almacenamiento masivo); y b) los que son transmitidos por cualquier red de comunicación abierta (internet, telefonía fija o móvil) o restringida, o se puede establecer que de acuerdo a esta red se presenta que la comunicación no solo deben actuar lo que llegan a determinar las personas sino también proponer ante la imposibilidad de analizarlas de manera individual, centraré mi atención en las principales formas de fuentes de prueba digital por corresponder a aquellas que han suscitado mayor debate doctrinal y jurisprudencial.

2.2.17. Requisitos de la prueba electrónica (veracidad + autenticidad)

- a. Calidad del sistema.
- b. Veracidad de información, el contenido del mensaje remitido por el autor debe ser exacto al recibido por el receptor (integridad), y la conservación del documento en forma original.
- c. La conservación del mensaje y la posibilidad de recuperación.
- d. Legibilidad.
- e. Posibilidad de identificación de los sujetos participantes y operaciones realizadas.
- f. Atribución a una persona determinada en calidad de autor (autenticidad).
- g. Fiabilidad del sistema utilizado (autenticación).

2.2.18. Legislación: Insuficiencia de la regulación actual y la tipificación

Dado que, en la realidad social y evidenciados en muchos casos penales, si una de las partes procesales o los investigadores o el policía pesquisa por desconocimiento descarga un correo electrónico, imágenes u otro dato electrónico del sistema o el respectivo soporte electrónico y luego los imprime, inclusive los presenta al respectivo procedimiento, resulta que el origen y la obtención de la prueba será cuestionado ante la ausencia de fecha, hora y forma de obtención, en razón de que no se recolectó u obtuvo a través del informe de un perito informático.

Podría ser denominada prueba electrónica o prueba tecnológica, mas no prueba personal, prueba documental y prueba técnica o material.

La autenticidad de un documento constituye un favor u observación de su aparente efectividad. El desafío de un documento escrito puede abordar tres aspectos. En primer lugar, honestidad, es decir, un claro acuerdo del autor con el autor real. En segundo lugar, la precisión, es decir, la compatibilidad de una copia, testimonio o certificado con el original. Y tercero, la seguridad, es decir, la coordinación de declaraciones o pruebas contenidas con la realidad en los documentos.

A diferencia de lo que se persigue probatoriamente en la prueba documental escrita en la prueba video gráfica o audio gráfica, ante su reproducción total o por pauteo se pueden efectuar dentro del procedimiento el reconocimiento judicial de imágenes, sonidos, voces y objetos (conforme lo regla el art. 190 del nuevo CPP) por aquella persona que aparece registrada en los metadatos de la evidencia digital. Sin embargo, en la praxis los fiscales optan por su transcripción en la creencia que con ello es suficiente para ganar el caso sin percatarse que la riqueza de la prueba electrónica está en la reproducción visual o de las voces o sonidos que registre el audio o video en las que se

puede practicar la prueba del reconocimiento judicial. Justamente es por la ausencia del arte de probar que pierden de vista la perspectiva probatoria.

Es más, los documentos digitales en su origen tienen un código hash o algoritmos que les asigna el propio sistema multivariado de datos; se requiere de un nuevo procedimiento autónomo para proteger su autenticidad, integridad, originalidad y no duplicidad, y en el que se precise taxativamente la emisión del informe pericial.

La evidencia digital la encontramos en los registros almacenados en un equipo informático (correos, documentos ofimáticos, imágenes, etc.), en los registros generados y almacenados por un equipo informático (logs de eventos, logs de errores, logs de transacciones, etc.), los archivos generados por el navegador de internet, los procedimientos cuando se ejecuta un procedimiento por lote o en una base de datos, y toda esta actividad para el proceso de recolección, indagación y probanza judicial es y será netamente electrónico.

Por estas razones es insuficiente el procedimiento de la prueba documental tradicional reglado en el Perú por los arts. 184 y 185 del nuevo CPP, los cuales prescriben de acuerdo a lo establecido en el Artículo 184.-Incorporación, en donde determina que quien llegue a incorporar el proceso para todo documento tiene que poder llegar a servir como un medio de prueba es decir que se tiene que presentar de manera obligatoria y poder exhibir para permitir su conocimiento salvo aquellos que se encuentran prohibido de manera legales sin una necesidad de plantar medios de pruebas, pues se toma en conocimiento que el fiscal es la persona encargada de poder ejecutar la investigación y llegar a solicitar de manera directa al tenedor del documento así como su presentación de la solicitud del juez dentro de la orden de incautación.

2.2.19. La incertidumbre tras la “cuestión de prejudicialidad” (Asunto C-207/16)

En este contexto y mediante la Orden AP de Tarragona de 14 de abril de 2016, se planteó ante el Tribunal Supremo la cuestión principal de la decisión “solicitando una decisión sobre las artes”. 579 y 588 BIS LECrim que reconoce los supuestos que reconocen la interferencia estatal en las comunicaciones telemáticas de los sospechosos que pueden ser contrarios a los principios y derechos de la Unión (artículos 7 y 8 CDFUE y 8 CEDH). En un breve resumen, se enfatiza que el daño intensivo a los derechos fundamentales afectados es intervenido por una fórmula que establece el umbral patológico de tal manera que no cumplen con los requisitos de estandarización exigidos por la Unión Europea. La ley, especialmente en términos de establecer el estándar de severidad que justifica la intervención en cuestión.

En otras palabras, el criterio de “suficiente gravedad” se identifica únicamente por la sentencia que pueda imponerse al delito investigado, cuestionando sin precisar el nivel de daño a la propiedad jurídica individual o colectiva en determinadas conductas; Y de igual manera, si se modifica, se pregunta cuál debería ser el nivel mínimo de sanción imponible, y pregunta si corresponde a la disposición general de la pena de prisión de tres años que se da en los Arts. 579 y 588 bis, ambos LECrim. La fuente descrita de este enfoque es STJUE del 8 de abril de 2014, sobre la base de la cual nos referimos después de 46 a 48, 52 y 53.

2.2.20. Casos de documentos que contengan declaraciones informáticas

Debido a la dinámica de la prueba, la evidencia digital, que está en la memoria del soporte electrónico, nace con el procedimiento de la prueba técnica, es decir la cadena de custodia sin la cual no se podría recolectar ni analizar probatoriamente los metadatos registrados. En el nuevo CPP se encuentran las condiciones en la que está reglada todo el trabajo del perito informático sobre la evidencia digital, podría ser actuado siguiendo el procedimiento de la

prueba pericial durante la fase de investigación, y en la etapa del juzgamiento utilizando al medio de prueba personal mediante el examen y contra examen al respectivo perito. El problema está en la práctica o desahogo probatorio en el juicio oral, las reglas del juicio en ese extremo deben ser más precisas por el bien de la reforma procesal penal y de un claro, pleno y total ejercicio de la contradicción.

A mayor argumento, haciendo uso y cotejo del método comparativo con el sistema español, se aprecia que en su Ley de Enjuiciamiento Civil ya no incluye a la prueba electrónica en la prueba documental, sino que la configura diferente y de manera independiente “por medios e instrumentos” (previstos en el art. 299.2 y 382 a 384 LEC), es decir, lo ha excluido de la prueba documental y hoy la legisla autónomamente, lo que puede ser una orientación para el ordenamiento procesal peruano.

Ese mismo razonamiento servirá en materia penal para acreditar un hecho ilícito o una acción humana atribuida lícita o ilícitamente. Por ejemplo, sería un medio de prueba si a través de una cámara de video vigilancia de la empresa de servicios postales se observa a un determinado depositante de un envío postal que al ser sometido a los controles de aduana y policial resulta que contenía adherido a las especies clorhidrato de cocaína.

Estaremos ante un objeto de prueba, por ejemplo, si Juan Pérez se comunica dos días antes por correo electrónico con el depositante del envío postal con droga para proponerle dar como propina \$ 100 (cien dólares americanos) a fin de que lleve a depositar el envío postal con droga al servicio postal. Y sería objeto y medio de prueba, por ejemplo, cuando el empresario declarante de impuestos al servicio de administración tributaria inserta datos de comprobantes de pago falsos a efecto de obtener a su favor montos deducibles por impuesto general a las ventas, con el fin de lograr que la base imponible tributaria sea menor.

SUB CAPITULO II: EL DELITO DE CHILD GROOMING

2.3. El delito de child grooming

2.3.1. Bien jurídico protegido

El acto de proponer actos a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios técnicos viola tanto la disfunción sexual como la libertad sexual de los menores. La configuración específica del delito muestra el efecto ilícito que resulta del uso de medios informáticos, lo que significa que se trata de una devaluación de la conducta que ha tomado el legislador para manejar acciones como "delito informático" sin. Es de interés detectar un defecto en un interés legal distinto a una orden informática o cibernética. (Peña, 2015, p. 157)

En cuanto a la regulación de la niñez con el propósito de producir pornografía infantil, el legislador tiene la intención de proteger penalmente una serie de bienes legales propiedad de menores, ambos con procesos de socialización y capacitación adecuados, y su privacidad, ámbito del individuo que debe ser comprometido por terceros. (Orts, 2001, p. 129) (Peña, 2008, p. 480)

En el campo de los delitos sexuales, Díez Ripollés (1985) afirma:

Que el concepto de libertad sexual tiene dos aspectos: uno positivo y otro negativo. El primer aspecto consiste en la libre disposición de las propias capacidades y potencialidades sexuales, tanto en su comportamiento particular como en su comportamiento social. Mientras que, en su segundo aspecto, la libertad sexual se contempla en un sentido defensivo y remite al derecho de toda persona a no verse involucrada sin su consentimiento en un contexto sexual. (p. 23)

Sobre la libertad sexual, Peña (2017) señala lo siguiente:

Parte de la autonomía misma del ser humano, de dirigir dicha esfera conforme al discernimiento como plasmación de la voluntad que se

exterioriza a partir de actos concretos y que involucra a otro ser humano, pues, en definitiva, los actos que el sujeto haga con su propio cuerpo no es incumbencia para el derecho penal, a menos que este sea obligado a realizarlo mediando coacción o amenaza. (p. 29)

El “derecho a la autodeterminación sexual”, Según la constitución, tiene derecho a su personalidad y solo puede decidir sobre eso. Asimismo, Peña Cabrera Freyre enseña que, “en esencia, los delitos sexuales reprimen aquellas conductas que atentan contra dicha autodeterminación humana, el ámbito de lo injusto surge precisamente cuando aparece un acto decidido a contrariar la configuración sexual humana”. (p. 29)

Con relación al elemento “engaño”, Cualquier fraude no debe ser castigado, pero solo es correcto obtener el consentimiento de la víctima.

El Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia declive en el Exp. N.º 00008-2012-PI/TC, publicada el 7 de enero del 2013 en su página web, define la libertad sexual de la siguiente manera:

La libertad sexual puede entenderse como la capacidad de las personas para definirse a sí mismas en el ámbito de la sexualidad. Su contenido constitucional es una dimensión negativa acompañada de la necesidad de no interferir en el libre desarrollo de la actividad sexual del estado o de cualquier individuo, así como la dirección encaminada hacia la dimensión positiva de la libertad para decidir realizar el acto. Sexual, es decir, decidir con quién, cuándo y cuándo se puede realizar un acto sexual. (Tribunal Constitucional, 2012)

La resolución anterior, que declara las relaciones sexuales homosexuales entre adolescentes menores de 14 años y adultos menores de 18 años, así como el reconocimiento de las relaciones sexuales consensuales entre adolescentes mayores de 14 años, disfruta de su libertad sexual mientras se la da a los menores. En cambio, no existe ningún derecho, es deber del estado proteger su daño sexual u oscuridad.

Además, el Tribunal Constitucional peruano, respecto a la finalidad de la indemnidad sexual, señala lo siguiente:

Se quiere reflejar el interés en que determinadas personas, consideradas especialmente vulnerables por sus condiciones personales o situacionales, queden exentas de cualquier daño que pueda derivar de una experiencia sexual; lo que aconseja mantenerlas, de manera total o parcial, al margen del ejercicio de la sexualidad. A la hora de identificarse los perjuicios susceptibles a causarse en relación a los menores, se destacan las alteraciones que la confrontación sexual puede originar en el adecuado y normal desarrollo de su personalidad o, más específicamente, en su proceso de formación sexual, y las perturbaciones de su equilibrio psíquico derivadas de la incomprensión del comportamiento. (Tribunal Constitucional, 2012)

De lo anterior se desprende que lo que se pretende proteger en el caso de los menores es el desarrollo futuro de la libertad sexual, sin injerencias nocivas. Y es el grado en que los ejercicios de sexualidad son limitados lo que puede afectar el desarrollo de su personalidad y producir cambios significativos que afectan su vida o su futuro equilibrio mental. (Fernández, 2017, p. 4)

Por tanto, a medida que descende la edad de la víctima, los efectos perjudiciales sobre el bien legalmente protegido son de mayor intensidad, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la pena y su personalización. De ninguna manera se puede argumentar que los menores de 14 años estén protegidos de su libertad o autodeterminación sexual, ya que carecen de ese poder por definición. Por tanto, para estos casos se asume que la propiedad jurídica protegida estará determinada por los conceptos de reparación o anomalía sexual. (Salinas, 2013, p. 687)

2.3.2. Pornografía infantil

En respuesta a los supuestos compromisos del Perú, con la firma de un protocolo alternativo a la Convención de Naciones Unidas sobre la Protección

de la Niñez, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, se pretendió subsanar los vacíos de su primera tipificación, pretendiendo ser más efectivos en su persecución, al expandirse su tráfico e intercambio a través del Internet, por lo cual, en el año 2004, con la Ley N.º 28251, se añadió como medio comisivo, el uso del Internet, cubrir la importación o exportación, posesión, promoción, producción, distribución, exhibición, suministro de pieles, comercialización o publicación de material pornográfico por sus intermediarios.

Art. 183-A.- Poseer, promover, producir, distribuir, exhibir cualquiera de las herramientas, incluido Internet, para realizar presentaciones en vivo de carácter indecente, o por cualquier medio, incluido Internet, de objetos, libros, escritos, visuales o audio o Internet. Mercados o publicaciones, importaciones o exportaciones. Quien haga uso de la edad de catorce y menos de catorce será sancionado con multa no menor de cuatro y no mayor de seis años y doscientos trescientos cincuenta días.

Cuando un niño sea menor de catorce años, la pena será menor de seis años y no menor de ocho años y ciento cincuenta a trescientos sesenta días. cinco

Si la víctima se encuentra en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo final del artículo 173, o si el representante actúa como miembro de una organización que pretenda ver pornografía infantil, la pena de prisión no será menor de es de ocho años y no más de doce años.

De ser así, el agente será elegible de conformidad con el artículo 36, párrafos 1, 2, 4 y 5.

Bajo este marco normativo no se produjeron importantes avances en su prevención y represión, pues las víctimas usualmente no lo denunciaban por temor a ser estigmatizados. Ante ello, en el 2013, la Ley N.º 30096(Ley de Delitos Informáticos) lo modificó a través de su cuarta disposición complementaria modificatoria; generando esta vez problemas interpretativos,

pues no permite saber con la claridad necesaria qué bien jurídico protege, lo que lleva a confundir las etapas de suiter criminis, donde intervienen una diversidad de sujetos (productores de pornografía, intermediarios, distribuidores y, finalmente, los consumidores o poseedores), existiendo varias tesis que buscan identificar su bien jurídico.

2.3.3. Afectación del bien jurídico y la generación de riesgos

El debate sobre los derechos de la pornografía está muy extendido. Por otro lado, algunos afirman que la propiedad legal está protegida por la libertad sexual o la comodidad sexual, mientras que otros ven la privacidad y la imagen personal como una entidad legal (De la Rosa, 2013). Mientras tanto, como señaló De la Rosa Cortina, el estudio dejó claro que el arte. 189 del CP preveía diversas sanciones para la protección de diversos derechos legales.

Sucintamente en el caso materia de asunto estaríamos frente a conductas afines con el apartado 1.a. del art. 189 del CP que señala lo siguiente:

Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: a) El que capture o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.

Relacionado con este tema, esta teoría sugiere que en conductas relacionadas con el uso de menores para la extensión de la pornografía, existirán buenas libertades sexuales legalmente protegidas si el contribuyente es mayor de 16 años y no ofrece su consentimiento. Por su parte, será un defecto sexual, una imagen de un menor pisoteado y un orgullo infantil en general si el contribuyente es menor de 16 años o si es mayor de esa edad,

voluntariamente se encontrará con el producto. Artículos pornográficos (Loc, 2016).

Ahora bien, ¿por qué tiene sentido que tenga uso, cuando estamos en el caso de menores en edad de consentimiento sexual? Respecto a qué se concibe por *utilización* en se refiere que es la conducta que establece a los menores para que ejecuten y sean parte en conductas pornográficas “tanto individualmente (masturbándose, por ejemplo, o exhibiendo sus órganos sexuales) o en compañía de otras personas, sean mayores o menores de edad” (Guinarte2014, p. 163). Ahora, esta decisión incluye todos los casos de menores de 18 años, independientemente de la existencia de consentimiento.

Lo anterior se relaciona con lo expuesto en el primer y segundo número, en cuanto al desconocimiento de los menores de edad con la edad de consentimiento sexual en las prácticas que se pueden encontrar en la relación sexual primaria. Como se muestra, la edad de consentimiento sexual para producir dicho material pornográfico está excluida por edad. El legislador penal en España confirma su libertad sexual, pero permite todos los efectos. Está claro que el libre consentimiento para colaborar en una película pornográfica es una expresión clara de esta libertad. Sin embargo, esta noción completamente liberal del consentimiento en materia sexual a partir de los 16 años entra en conflicto con el derecho a proteger explícitamente al menor, es decir, el respeto, la intimidad y la propia imagen, y la ley orgánica en materia civil. / 1996 o protegido por la Ley 34/2002 (Díaz, 2016).

Este concepto se basa en última instancia en el hecho de que cualquier cooperación de un menor de 18 años, independientemente de su edad para utilizar su consentimiento sexual, garantiza su consentimiento para la ejecución de material pornográfico, incluido el equipo. En particular, en nuestro ejemplo encontraremos los medios mutuos o recíprocos de Juan y María.

Castigar a un menor por sexo primario suele basarse en la producción de riesgos. En este sentido, el propósito del derecho penal no es solo proteger la

conducta de los derechos legales que los violan o ponen en peligro, sino también "advertir y procesar los riesgos específicos y necesarios". En este paso, se enfatiza que en la sociedad contemporánea existe una baja sensibilidad a los riesgos, por lo que se necesita una intervención estatal más efectiva en situaciones de "amenazas que atentan contra los derechos legales" (Silva, p. 22).

Específicamente podemos manifestar los siguientes *riesgos* (Agustina, 2010):

a) Riesgos asociados a la naturaleza delictiva de su conducta. De los cuales, la necesidad de combatir la cultura de la pornografía infantil se identifica como expresión de la crisis de valores.

b) Riesgos relacionados con el uso del material por parte de terceros. Luchar para que el producto sexual primario ingrese al mercado pedófilo, ya que generará la producción de pornografía infantil a través de medios inusuales (Agustina, 2016). Así, como señalan algunos autores, el 25% de las imágenes de pornografía infantil comienzan con el coito entre menores, citando la correlación entre el sexteo con un gran incremento en el contenido de pornografía infantil. (Agustina, 2016).

c) Peligros asociados con las últimas etapas de la caza. Se indicó anteriormente que la capacidad de comportamiento, la actividad de ciberacoso se puede formar como base para la subordinación y la criminalización pública de la segregación. De hecho, los jóvenes sufren por ser vulnerables (Agustina, 2016).

2.3.4. Consentimiento del menor

Al abordar el tópico del bien jurídico protegido, nuestra Corte Suprema a través del R. N. N.º 2624-2012 Lima sostiene que el acto sexual consentido con menor de 16 años de edad no impide condenar por el delito de pornografía infantil. Además, considera irrelevante que desde los 14 años de edad tenga “libertad sexual”, porque poseería otros bienes jurídicos de los que no se puede claudicar, como su dignidad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad e imagen. No siendo exacto afirmar que desde los 14 años pueden consentir libremente las relaciones sexuales, y que la edad del consentimiento sexual quedó fijada en 14 años, sino que, en estricto, a partir de esa edad su libertad no es completa, lo que otorgaría operatividad a su consentimiento sexual.

Conforme a lo antes señalado, la franja entre antes de los 14 años es total y absolutamente protegida contra inmisiones sexuales. Mientras que la franja entre 14 a menos de 18 años es protegida contra inmisiones sexuales engañosas o comportamientos corruptores, contrarios al pudor y provocadores, como lo es la pornografía infantil.

2.3.5. Libertad e indemnidad sexual

Sostiene que el art. 183-A no solamente protege a menores de 14 años, sino también a los que oscilan entre los 14 y 18 años de edad; planteando una valoración y penalización diferenciada según los sujetos pasivos.

Así, para menores de 14 años nuestra doctrina mayoritaria (Castillo, 2004, p. 430) postula el bien jurídico “indemnidad sexual”, o intocabilidad, porque no solo castiga actos contra el pudor (tocamientos indebidos o libidinosos) sobre ellos, sino también actos que se realizan sobre desvalidos (Carmona, 1998, p. 230).

La indemnidad es imposibilidad de disponer de la sexualidad, prohibiendo contactos sexuales con quien, por su desarrollo biológico o psíquico, no está en condiciones de comprender la naturaleza, significado y repercusiones de la conducta sexual. No significa que carezca de capacidad de comprender y

quererlo, o no tenga alguna libertad, sino que hasta una edad en nuestra legislación los 14 años no está en condiciones somáticas y psíquicas para valorar y hacerse responsable de contactos sexuales, lo que no vulneraría su condición de persona o dignidad, sino que respeta la naturaleza de las cosas y la diferencia entre un ser humano y otro por su edad y factores dependientes de esta.

2.3.6. Desconociendo los límites: la necesidad de actuar con medida

Comencemos con un ejemplo (Ejemplo 1): una pareja de adolescentes, Juan de 16 años y María de 17 años decidieron hacer un video de ambos teniendo sexo con sus teléfonos celulares. La imagen de Juan se muestra claramente en el video, pero no es de María. Juan luego se lo transmite a María. Los temas anteriores se abordan en un contexto privado, no hay propagación más allá de los participantes, ambos no tienen otra finalidad que el registro del acto sexual en sí mismos y se registran con el consentimiento de ambos.

En el primer ejemplo, nos enfrentamos a comportamientos sexuales primarios que inicialmente no tenían importancia en la relación actual. Además, nos enfrentamos a conductas que se han comenzado a producir en nuestra juventud que llegarán a una clara normalización. En una ciudad del oeste de Cataluña, una encuesta a 489 adolescentes de entre 14 y 18 años no fue en vano “las conductas relacionadas con el *sexting* resultan ser bastante comunes entre la población comprendida en la franja de edad analizada sin que se haya constatado que se produzcan con carácter general efectos adversos en los participantes”.

Además de esta discusión, antes de entrar en este tema, conviene hacer una breve referencia al secuestro primario y secundario. No debe pasarse por alto que el sexteo primario por parte de los jóvenes es un comportamiento problemático. Imagínese si un menor pudiera sufrir daños si estas imágenes se mantuvieran en circulación durante años (Gillespie, 2013, p. 642).

Sin embargo, cómo responder a este comportamiento problemático en el caso de un menor en edad de consentimiento sexual, genera situaciones separadas a favor o en contra de su criminalización. Dado nuestro primer ejemplo de sexo primario (Ejemplo 1), surgen muchas preguntas en vista de las protecciones específicas que se ofrecen a los menores. O estamos ejerciendo su derecho a la privacidad relacionado con su libertad sexual por Juan y María.

Se pueden hacer las siguientes suposiciones: ¿Qué pasaría si este video fuera transmitido por María sin el consentimiento de Juan en nuestro ejemplo? (Ejemplo 2). Lo que hemos descrito anteriormente se basará en los llamados actos vergonzosos de pornografía, “difusión no autorizadas de imágenes íntimas de pareja obtenidas o recibidas estando en una relación sentimental cuando esta finaliza” (Villacampa, 2016). Estas conductas se relacionan con dos aspectos que por el momento solo menciono por la complejidad que se advierte.

En teoría, se valoran las percepciones de la privacidad de la agresión sexual secundaria y la integridad moral de las partes que intervienen casualmente, los niños sexualmente activos, ya que no involucran prácticas neutrales al género, “mientras que las niñas sexualmente activas son denigradas, avergonzadas y despreciadas como ‘putas” (Gill, 2012, p. 12). Segundo, se constituyen como expresiones del propio entorno que se ha esgrimido por los adultos. Hay conceptos nuevos utilizados por la sociología como la *pornificación cultural* que es “una sexualización de la cultura por medio de un imaginario que bebe directamente de la iconografía pornográfica”.

Además de la discusión sociológica de la compatibilidad de la cultura de los adultos borrachos por parte de nuestra juventud, debemos comenzar por el hecho de que nos encontramos frente a un grupo diferente sensible como los adultos, desconocedores de los peligros de transmitir imágenes de contenido sexual. Por supuesto, en el caso del Ejemplo 2, existe un impacto grave en la privacidad del sujeto que se niega a decir proliferación y se retirará en casos de sexo secundario.

Por ejemplo: María transmite un video realizado con Juan sin su consentimiento, nos encontramos en una pérdida de confianza derivada de la provisión de privacidad compartida, sin el consentimiento de ninguno de los participantes; Por ello, indicamos que la privacidad se ha visto seriamente comprometida y no se configurará como una consecuencia ineludible de una grabación de imágenes sexualmente sugerentes.

2.3.7. Los límites en el manejo de su intimidad

El contenido de pornografía infantil en el video, realizado por Juan y María, se refiere a una restricción legal relacionada con brindar privacidad a los menores. En una situación en la que, según Agustini Senleh, el concepto general de intimidad en materia sexual se "debilita", los avances tecnológicos han llevado a la "pérdida de la intimidad". Todo esto ha afectado a los menores (Agustina, 2016).

En nuestro ejemplo, se puede tener en cuenta que si este video es enviado a María por Juan, tiene una privación de privacidad o intimidad compartida, lo anterior es un ruido significativo. Teóricamente, porque estamos ante el ejercicio del derecho a la intimidad, que es un contexto nuevo cuando se trata de las TIC, y otro, porque este comportamiento es cometido por menores. Así, se señala que ante la velocidad y proximidad de la posible propagación en el aspecto digital (Giasosola, 2014, p. 120), esta condición no es total, por lo que existe una pérdida de control durante la distribución. En este sentido, si no existen restricciones, aumenta significativamente las oportunidades para la transmisión, transferencia y difusión de información a nivel mundial. (Rueda, 2016, p. 29).

Por otro lado, hay más vulnerabilidad porque el menor, al transferir su imagen a través de las TIC, precisamente en Internet, no es consciente de las consecuencias de su decisión. Por lo tanto, la validez de su consentimiento para la destrucción de su privacidad está en duda.

Interpretación simultánea de las disposiciones del Código Civil, Ley 1/1982 de protección de los derechos de los menores, intimidad, autoimagen y Ley 1/1996, que aborda el ejercicio de derechos muy personales de los menores, incluido el uso de de la intimidad de los menores. Se puede hacer, siempre que sean lo suficientemente maduros y no infrinjan sus intereses. Esto sugiere, como afirma ust Gustina Senlehe (2015), limitar el lugar del secreto juvenil para garantizar el ejercicio de la patria potestad.

Se observa que la creación de este tipo de imágenes en nuestro ejemplo afecta los intereses de los menores, a pesar de la existencia del consentimiento. Ello porque se considera que en los menores, si bien es parte de su desenvolvimiento libre de su personalidad, se realiza sin ser conscientes de las consecuencias que afectarían su desarrollo al difundirse este tipo de material. Ello debido a que los menores tienen limitaciones para comprender la consecuencia de sus decisiones, lo que genera que se incorporen este tipo de contenidos en el internet sin adoptar las previsiones correspondientes, ni midiendo las consecuencias de sus decisiones (Rueda, 2016).

De esta manera, no se reconoce como una actuación común del menor de proporcionar a un extraño o tercero imágenes propias que con contenido pornográfico en Internet, lo anterior se basa en los riesgos de su propagación. Rueda Martín (Lock, 201), en un trabajo publicado en 2013, dijo que, a pesar de las mayores debilidades del menor, se debe aplicar más protección, limitando el consentimiento a la privacidad personal del menor en relación con las TIC.

Es cierto que la autora lo publicó que en España el consentimiento se puede tomar desde los 13 años, ella proyectó incrementar la edad a los 14 años (valorando previamente su capacidad natural de juicio) para consentir respecto a su intimidad en ese contexto.

Teóricamente, las distintas edades han señalado el otorgamiento de derechos a los menores y, en segundo lugar, al reconocer la capacidad de los menores de una determinada edad para dar su consentimiento en relación a la

confidencialidad, para lo cual deben cumplir ciertos requisitos (ese consentimiento de ellos a conocer y dar de forma gratuita, con antelación). Y el sujeto tiene una habilidad natural para juzgar).

2.3.8. Delito informático en una sociedad de riesgo

En la opción de prioridad por formas, uno de los rasgos característicos del derecho penal de riesgo es el cambio significativo en las técnicas de clasificación y reglas implícitas.

La sociedad moderna actual con el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología de la comunicación y la informática, junto a sus beneficios, trajo consigo una serie de peligros que, en el campo del derecho penal, se materializan en la ciber delincuencia a cuyas garras se exponen los usuarios al acceder a las redes sociales online, para el desarrollo de sus actividades cotidianas, delitos que por lo demás, no tienen fronteras, no exigen intermediación entre el agente y su víctima, permiten actuar en el anonimato y entre sus víctimas no distinguen estrato social, edades, credo religioso o color de piel (Gil, 2012).

En otras palabras, las innovaciones tecnológicas a través de las tecnologías de la información y las redes de comunicación global, así como su expansión en las últimas décadas, han dado lugar a ejemplos de la nueva sociología conocida como sociedad de la información y / o del conocimiento. Una nueva revolución industrial basada en información que puede ser procesada, almacenada, recibida y transmitida de forma ilimitada, sin tiempo ni espacio.

Nuevos sistemas sociales basados en servicios, cuyos principios axiales dejarán de ser capitales y trabajarán para centrarse en el conocimiento teórico. Así, queda claro que el poder es cada vez menos propiedad de los elementos físicos, la tierra, los recursos naturales, los automóviles y ahora se basa en factores no físicos, conocimiento científico, alta tecnología, información, comunicación, publicidad, sector financiero. Es la Economía, de esta manera, desmaterializada, ya no transfiere billetes ni lingotes, envía

mensajes digitales que actúan como moneda. Confundido con información financiera. (Chonchol, 2003, págs. 124-146)

En derecho penal, Silva Sánchez, en su trabajo en el panel Expansión del Derecho, por su parte, enfatiza que los delitos que involucran medios informáticos e Internet, el llamado ciberdelito, es un excelente ejemplo de la evolución del delito. En una sociedad del riesgo, lo que probablemente calificaría a un referente en sociología del ciberdelito como una sociedad global del riesgo o una computadora con una sociedad del riesgo.

2.3.9. Modalidad típica

Los niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios técnicos son sancionados simplemente por el contacto (entablar una conversación con alguien) con un menor con el fin de obtener material pornográfico o por cometer un delito. Relaciones sexuales con un tercero que impliquen reparación (violación, indecencia o acto contra otro) o violación de la libertad sexual con o sin un tercero, independientemente de si el material pornográfico fue buscado, obtenido o ejecutado Actividad sexual.

Hay dos casos en este crimen. El primero implica contactar a un menor de catorce años para solicitar u obtener material pornográfico, o tener relaciones sexuales con él o ella o con un tercero. El segundo implica el contacto con un menor de entre catorce y dieciocho años, mediante trampas, búsquedas, obtención de material pornográfico o teniendo relaciones sexuales con o con una tercera persona. (Villavicencio, 2014, p. 294)

El concepto “pornografía” señalado en el tipo penal se vincula particularmente con “la degradación de la persona como objeto, sumado a la humillación sexual que generalmente acompaña a este tipo de representaciones, las que además ensalzan la ausencia de humanidad y son idóneas para corromper a las personas menores de edad”. De esta forma se puede comprender toda la producción, distribución, distribución, importación, exportación, suministro de lana, su venta o posesión. (Aboso, 2011, p. 334)

Por tanto, la pornografía infantil se entiende como una representación visual de un menor que adopta un comportamiento sexual explícito, así como una representación visual de una persona que, aunque es menor, parece tener pornografía técnica o imágenes que representan a un menor que adopta tal comportamiento. Pseudopornografía o pornografía simulada, incluida la llamada formación, que, de hecho, poco tiene que ver con actos sexuales en violación de los intereses del menor, y sí, más, quizás. (Fernández, 2007, p. 62)

Se pueden mostrar las siguientes características en relación a los delitos propuestos para niños, niñas y adolescentes con fines sexuales a través de medios técnicos:

- a) Quiere ser sancionado, a nivel de preparación criminal, contacto de menores solo a través de Internet u otros medios similares.
- b) Para solicitar u obtener material pornográfico secundario o para cometer un acto de intención sexual con o con un tercero, el agente debe actuar de manera intencional o no intencional como un elemento de intuición secreta. (Gaceta Jurídica, 2016, p. 144-145)
- c) Para que se cometa el delito, el menor no debe esperar a recibir material pornográfico (especialmente imágenes o videos), o el agente no debe venir a tener relaciones sexuales con él (tiene acceso físico o contacto inadecuado). (Nuñez, 2015, p. 46)

Una de las críticas que se le hicieron en el pasado a este delincuente ilegal fue que solo aprobaba propuestas realizadas a través de medios informáticos; Esto significaba que si el agente no usaba este significado, pero, por ejemplo, tenía una conversación física directa, el acto no constituía delito. Con la introducción de la Ley no. 30171, los niños, niñas y adolescentes fueron superados mediante la tipificación del delito de proposición e incorporándolo al Código Penal a través del art. 183-B con homologación punitiva propuesta por medios técnicos; Por lo tanto, existen dos leyes penales en la actualidad que regulan conductas delictivas similares. (Elías, 2014, p. 18)

En relación con el elemento de "engaño" previsto en el segundo párrafo del art. 5 de la Ley de delitos informáticos núm. 3000096, luego de la Corte Constitucional del Perú en el número final. El derecho a la libertad sexual va en contra de la espontaneidad sexual que protege a los menores de 14 años. No se debe sancionar ningún fraude, pero conviene obtener el consentimiento de la víctima. De esta forma, la desinformación sobre edad, situación económica, orientación sexual y apariencia física, o promesas de no ser cumplidas por el agente, será criminalmente irrelevante. Por otro lado, si el delincuente falsifica la identidad del cónyuge de la víctima para obtener una entrada ilegal, estará sujeto a medidas disciplinarias. (Elías, 2014, p. 18)

Para culminar, Villavicencio (2014) afirma:

Los artículos mencionados en el párrafo anterior tienen muchos errores que pueden vulnerar el principio de legitimidad, ya que no tienen palabras claras. Por lo tanto, las personas que se acercan solo a menores sin la intención de recibir pornografía y otro material similar pueden ser permitidas, ya que el término contacto no está restringido; Por tanto, a su juicio, solo será sancionado el acto de establecer contacto o comunicación con un menor. (p. 295)

2.3.10. Sujeto activo y pasivo

Cualquier persona puede cometer un comportamiento clasificado como delito. Esto se entiende cuando se introduce la palabra "uno" en una resolución legal, que se refiere a un sujeto activo ambiguo (delito de dominación).

A la hora de abordar el problema del ciberdelito, debemos tener en cuenta que se trata de configurar un determinado período organizativo en el que el usuario de la red debe trabajar con el debido cuidado para su correcto funcionamiento

sin interferir. Organizar el espacio de otros usuarios, respondiendo a la mala configuración del espacio de su organización.

El contribuyente de un delito es un menor cuya libertad o pérdida sexual se ve afectada. Importadores Es importante señalar que el uso de mensajes, conversaciones y redes sociales se está volviendo cada vez más común entre niños y adolescentes, lo que puede generar una expectativa de propuestas sexuales a través de internet.

2.3.11. Objeto material del delito

Los términos penales requieren que el "contacto" se realice a través de Internet u otros medios similares, es decir, a través de servicios informáticos que permiten contactos directos entre usuarios de una computadora o servicios de Internet; Por ejemplo, el uso del correo electrónico, diversas redes sociales y otros sistemas de comunicación online, especialmente salas de chat y mensajes directos vía WhatsApp o messenger, otros similares. (Gaceta Jurídica, 2016, p.145)

Ya sea que el contacto se realice a través de un vuelo costa afuera o un servicio de vuelo costa afuera como llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de texto, cartas, telegramas, etc., el uso del tipo criminal está regulado en el Art. 183-B del Código de Subcentivos.

De hecho, el arte. El 183-B de CP también prohíbe el hecho de tener contacto con un menor, pero sin mencionar los medios para utilizarlo o qué tipo de contacto es, para que pueda comprender fácilmente el contacto realizado por los servicios de vuelo fuera de línea y el contacto. En persona o físicamente entre el agente y la víctima. Por tanto, este artículo también ha sido modificado por el art. Hechos no. 30838 1, configuración de tipo criminal de la siguiente manera:

Artículo 183-B.- Propositiones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales

Quien se acerque a un menor de catorce años o le solicite o solicite material pornográfico, o sugiera un acto sexual con él o con un tercero, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de nueve. La pena será conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 años y la recusación.

Cuando la víctima tenga menos de catorce a once años, y en caso de engaño, la multa no será menor de tres ni mayor de seis años y será inhabilitada de conformidad con los artículos 1, 2, 4 y 9 del apartado.

En ese sentido, el art. 183-B compartiría con el art. 5 de la Ley N.º 30171 las siguientes características:

- a) Para solicitar u obtener material pornográfico secundario o para cometer un acto de intención sexual con o con un tercero, el agente debe actuar de manera intencional o no intencional como un elemento de intuición secreta.
- b) No es necesario esperar a que se cometa el delito, a que se obtenga al menos material pornográfico (en particular, imágenes o videos), ni a que el agente tenga relaciones sexuales con un menor (tiene acceso físico, contacto inadecuado, etc.).

Como podemos ver, en ambos tipos de delitos, el agente tiene prohibido contactar a un menor para solicitar u obtener material pornográfico de él, y no es necesario obtener dicho material de manera efectiva. Como resultado de lo anterior, se puede observar lo siguiente:

- a) Si se trata de un menor que proporciona material pornográfico a un agente sin que éste lo solicite o sin haber cometido ninguna conducta para obtenerlo, no se especifican los delitos especificados.
- b) Se regula cuando hay un agente (edad legal) que envía o entrega material pornográfico a un menor. En este caso, se puede cometer otro tipo de delito artístico, como el art. CP 183.1 (que penaliza a quienes exhiben o distribuyen imágenes pornográficas a menores).

- c) Sin embargo, enviar o enviar material pornográfico de un sujeto activo a un menor puede ser castigado como abuso infantil cuando se hace intencionalmente cuando un útero también envía o proporciona material pornográfico, en alguna forma de intercambio.

La propagación rápida y generalizada de contenido dañino que se puede realizar a través de la cibernética es lamentable; Esto, además del anonimato que permite la red, produce un incremento fatal en este tipo de comportamientos.

De hecho, la capacidad del niño se refiere a la peculiaridad de cometer un delito en un contexto informático, como se indica en sus diversos elementos característicos. Es Internet en este entorno donde el sujeto activo no suele ser detectado o identificado por autoridades capaces de utilizar seudónimos, contraseñas o nombres falsos y queda excluido de este. Por tanto, la ejecución del operativo puede tener un efecto positivo en la investigación y sanción de dicha conducta, siempre y cuando se lleve a cabo de forma arbitraria según se le asigna. (De la Mata & Hernández, 2011, p. 402)

2.3.12. Tipicidad subjetiva

La violación de la propuesta de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios técnicos es maliciosa. La palabra propuesta para arte es "para". Ley 5 de Delitos Cibernéticos Ley no. 3000096 es un elemento subjetivo que define la finalidad del sujeto activo, convirtiendo la estadística criminal en una especie de instinto trascendental (delitos de intención). (Villavicencio, 2006, p. 375)

De hecho, este interior ilegal requiere de un propósito específico que no corresponde al exterior pretendido, que en este caso es obtener material pornográfico y / o realizar cualquier acto de relación sexual con un menor; Como resultado, la víctima de este delito es capturada cuando llega el resultado típico y el agente no tiene que adquirir su instinto trascendental específico. Por estas características, este comportamiento se clasifica como

un resultado definitivo, porque en este el agente sigue el resultado que está por delante del tipo y luego se generará. (Villavicencio, 2006, p. 375)

En relación al material pornográfico, el sujeto debe ser consciente de este tipo y desear obtenerlo, retenerlo o distribuirlo, independientemente de que lo haga con fines de lucro o no.

El delito de proponer a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios técnicos se comete con el mero hecho de obtener material pornográfico o contactar a un menor con el propósito o propósito de tener relaciones sexuales con él, el tipo delictivo no requiere estas conductas que realmente sucede.

2.3.13. Grados de desarrollo del delito

Para obtener material pornográfico o incurrir en cualquier acto de acoso sexual se comete el delito con el único dueño del menor, esta conducta es punible porque afecta la compensación del menor o la libertad sexual y la conveniencia de su uso es cálculo de contacto.

En esta figura criminal, la legislatura avanzará las barreras del castigo simplemente reconociendo el hecho de tener contacto con un menor si logra su propósito, proporciona material pornográfico o participa en un acto de interpretación sexual con un menor. Esto quiere decir que el abuso de menores es un delito de peligro intangible porque no requiere el peligro de la intimidad, comportamiento punitivo que, de hecho, es solo un acto preliminar para otros delitos, como la violación o la vergüenza. (Art. 173 o Art. CP's 176-A), o Pornografía infantil (Art. CP 34's 183-A) (Elias, 2014, p. 17)

Toda persona que tenga acceso físico a través del pasaje vaginal, anal o bucal o a un menor de catorce años que realice cualquier otro acto similar a la inserción de cualquier parte del cuerpo o parte del cuerpo a través de uno de los dos primeros pasajes, será condenado a cadena perpetua.

Artículo 176-A.- Relaciones sexuales o libido contra un menor

Artículo 1701, sin intención de control de entrada física, que represente a un menor de catorce años o, por encima de un agente o tercero, que toque indebidamente sus partes íntimas, cometiendo cualquier acto de relación sexual con el cuerpo. o su libido. En parte, será condenado a pena privativa de libertad no menor de nueve ni mayor de quince años.

Artículo 183-A.- Pornografía infantil

Cualquiera que, por cualquier medio, posea artículos, libros, escritos, imágenes, videos o dios ios o realice una exhibición en vivo de carácter pornográfico, en la que se utilice, cualquier propietario, beshti, producto, producto, producto, exposición, mercado de lana, Mercados o publicados, Importación o exportación de personas menores de catorce y diecinueve años, no menos de seis y no más de diez años y será sancionada con multa de ciento veinte a trescientos cincuenta y cinco días.

La privación de libertad no será menor de diez ni mayor de doce años y será sancionada con multa de cincuenta a trescientos cincuenta días:

1. La persona que tenga menos de 14 años.
2. La pornografía se difunde mediante técnicas de información o comunicación.

Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones establecidas en el último párrafo del artículo 173 o el agente actúa como miembro de una organización dedicada a la pornografía infantil, la pena privativa de libertad no será menor de doce ni mayor de quince años. De ser así, el agente será descalificado de acuerdo con los artículos 1, 2 y 4 del artículo.

En efecto, las propuestas que se hacen a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales a través de medios técnicos se utilizan con el mero hecho de recibir material pornográfico o contactar a un menor con el propósito o

propósito de tener relaciones sexuales con él, el tipo criminal no lo requiere. (Gaceta Jurídica, 2016, p. 144)

2.3.14. Consecuencias jurídicas

El menor de catorce años será castigado con el delito de buscar u obtener material pornográfico por él o de proponer cualquier sugerencia de significado sexual a un sujeto activo o a un tercero, o proponer a través de Internet o medios de otros similares. No menos de cuatro y no más de ocho años y descalificación por números 1, 2, 4 y 9 del art. 36 del CP.

La descalificación se genera como se indica en la oración:

1. Despido de un trabajo, cargo o comisión por parte de un condenado, incluso si proviene de una elección popular;

2. Incapacidad o impedimento para obtener una comisión de orden público, cargo, empleo o naturaleza;

[...]

4. Incapacidad para ejercer por su propia cuenta o a través de cualquier negocio, comercio, arte o industria de terceros, que debe especificarse en la oración;

[...]

9. Para el acto de amnistía por terrorismo previsto en el párrafo 2 del artículo 316 del Código Penal, la incapacidad determinada de las personas condenadas con el consentimiento o ejecución por el acto de terrorismo, decreto ley núm. 25475 Las violaciones a la libertad sexual se enumeran en el título iv del libro segundo del Código Penal o por delitos de tráfico ilícito de drogas en la educación básica o superior, pública o privada, docencia en instituciones o ingreso o reingreso al servicio. Administrativo. En el Ministerio

de Educación o en sus instituciones públicas descentralizadas o, en general, en cualquier institución dedicada a la educación, formación, formación, resocialización o rehabilitación. Esta medida se ha convertido en obligatoria en la sentencia como sentencia mayor [...].

Cuando la víctima tenga entre catorce y once años y medio de la estafa, la multa no deberá ser menor de tres ni mayor de seis años y se hará la descalificación por números 1, 2, 4 y 9 del art. 36 del CP.

El child grooming Está impreso en art.5 Ley n°. 30096 Cybercrime y se considera un delito común, ya que puede ser dirigido por cualquier adulto a través de Internet u otras herramientas similares.

Respecto a estas sentencias, Lis (2014) cree que serían desproporcionadas a otros delitos penales en los que se protege a los menores. Así, el delito de propuesta con fines sexuales, que ha sido analizado, es un riesgo inmaterial, pues en principio, no afecta específicamente el interés jurídico protegido, prevé una pena máxima de ocho años, cuando el delito ponga en peligro a un menor o Su omisión conlleva una multa de más de cuatro años, lo cual es ilícito por un riesgo tangible, ya que se requiere una grave amenaza al derecho legal; De igual forma, el delito de violación fraudulenta es punible con pena privativa de la libertad de más de nueve años, resultando en delito, ya que se regula cuando dicho agente establece una relación sexual con un menor mediante fraude. (p. 19-18)

2.3.15. Principios

2.3.15.1. Principio del interés superior del niño

TIC simbólicas a través de internet. Crea un vehículo básico para uso de oficiales subalternos. Por ejemplo: libertad de expresión, derecho a la educación, libertad de asociación o participación plena en la vida social, cultural y política. Esto es lo que prevé La Rue en un informe sobre la

promoción y protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en relación con los niños ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de agosto de 2014. (La Rue, 2011, p. 17), agregando lo siguiente:

También es necesario para el desarrollo de una sociedad abierta y democrática, que requiere el deber de los niños, así como de todos los ciudadanos. Sin embargo, los riesgos ocultos asociados con el uso de Internet por parte de los niños también juegan un papel importante en las discusiones sobre su regulación, incluidas las políticas de promoción que buscan enfocarse específicamente en los riesgos que plantea Internet e ignorar su potencial. para el empoderamiento. Niños Lo más preocupante es que algunos estados prefieren tomar medidas irracionales e ineficaces (ya sea que quieran proteger a los niños o como excusa para castigar), como sistemas extensos y sensibles de bloqueo y filtrado que promueven la comunicación para todos. (Gaceta Jurídica, 2016, p. 140)

Special Harmony demuestra cómo, en nombre de la protección infantil, se están implementando políticas que no aprovechan los aspectos positivos de Internet. En concreto y dentro de una imitación que nos recuerda la taxonomía de Livingstone Stone y Hayden. (Villavicencio, 2006, p. 180) En cuanto a las oportunidades que ofrece la red para los menores de edad, las siguientes son: a) educación en el caso de niños que no pueden ser trasladados a la escuela, b) participación en discusiones públicas) comunicación e intercambio de información como medio de estímulo Brinda características e Interacción. Por tanto, la participación de los menores a través de la red fomenta su creatividad, “permite que las opciones y opiniones se vean afectadas por preferencias afines, proporciona el debate y ofrece una plataforma para la autoexpresión que no está disponible fuera de línea” (*La Rue, 2011. p. 18*).

Sin embargo, estos aspectos positivos que podemos considerar como oportunidades se ven desplazados por riesgos como el reclutamiento de niños con fines sexuales. De esta forma, la protección de la infancia parece ser una bandera, bajo la cual se traspasan libertades como la de expresión. Sin embargo, señalan casos relacionados (especialmente graves), pero lo cierto

es que su tortura mental ha sido arrastrada a una idea esencial, es decir, la protección de la infancia y el ejercicio de derechos no deben ser considerados como objetivos específicos. Elocuentemente expresa lo siguiente:

El temor popular de que Internet en sí mismo muestre peligros para todos los niños es falso y también socava la realidad de que en algunas circunstancias Internet puede ser perjudicial e incluso beneficioso. Comprender las vulnerabilidades de los niños a los riesgos en línea desde una perspectiva social y cultural más amplia puede proporcionar una idea más precisa de los tipos de estos problemas y cómo deben describirse. La sensibilidad de los niños al uso de Internet, sus comportamientos y riesgos varían en diferentes edades y dependen de cada niño. En lugar de utilizar medidas de censura o bloqueo total que afecten negativamente a niños y adultos, las salvaguardas deben reconocer el desarrollo de los maestros de niños. (La Rue, 2011, p. 14)

El discurso de La Rue en 2014, en este sentido, está en línea con lo que denunció Ramiro Vázquez en 2013, que mencionamos anteriormente. Al compartir este discurso, creemos que las políticas estatales para abordar la relación entre los menores y las TIC se han centrado en los riesgos, las oportunidades de transporte. Una de las herramientas mencionadas anteriormente en la clara negación del reconocimiento del acceso a Internet a través del cual los menores ejercen derechos afines y como nueva regulación de su socialización.

No podemos ir en contra de lo anterior, no se trata de reducir los riesgos que existen para los menores en relación a las TIC, se trata de constatar que los menores son una cuestión de derechos y por tanto los actores ejercen y sobresalen en formular las políticas marcadas para el protagonista al respecto. En este sentido, el informe Harmony Clarity lo define, señalando que para empoderar a los niños para que utilicen Internet, deben participar en la creación de “estrategias para la defensa y la promoción de Internet para atender sus necesidades y hacer uso de sus diversos puntos fuertes de carácter intelectual y creativo, en especial dado que los niños y los jóvenes

tienden a estar más familiarizados con las tecnologías actuales" (La Rue, 2011, p. 35)

Sin embargo, este empoderamiento incluirá la respuesta a las amenazas existentes. En este sentido, Bandito Cesares señala que en estas redes virtuales se asimilan gráficamente "camino, caminos, carreteras, carreteras de todo el mundo", bajo su perfil protector de sensibilidad, instruyendo su uso, con adecuadas señales de prevención. (Bendito, 2015, p. 118).

Para concienciar a un menor de la naturaleza problemática de las conductas que involucran relaciones sexuales primarias, es necesario analizar cómo convertir a un menor en burócrata, para permitir que tal conducta demuestre una violación de sus derechos fundamentales. con el propósito de protegerlos. En cuanto a los delitos sexuales, cuando se trata de menores, existe un acuerdo para sancionar determinadas conductas que atenten contra su libertad o disfunción sexual (Villavicencio, 2006, p. 90). Por ejemplo, abuso sexual infantil, que incluye violencia, intimidación y acoso sexual. No se encontró ningún ataque en el que esto se haya utilizado como delito. En relación con este último, la finalidad de la adopción de actos, en los que el consentimiento natural es otorgado por el menor en principio, es la protección de sí mismo en esta materia.

Cuando Stuart Mill defendió en vano la libertad del individuo, repitiendo que nunca podría ser detenido por su bienestar, ¿marcó a los menores de ese grupo? En este sentido, señaló que el pleno reconocimiento de la libertad no se aplica a las personas que no han alcanzado la madurez, pues aún están en edad de buscar la atención de los demás y necesitan ser protegidas, no solo frente a los demás. , Pero también contra uno mismo (Villavicencio, 2006) propone la llamada libertad sexual, la cual es conocida solo por menores de ciertas edades, pero solo en relación a ciertas áreas.

Ahora el problema proviene de que, en un esfuerzo por proteger a los menores, se han establecido límites a los derechos fundamentales y el

incumplimiento de los límites mencionados conduce al delito de pornografía infantil. En esta medida, la seguridad es control y peor aún, control criminal.

Partimos del hecho de que el derecho general a la libertad como punto de partida para la vida en sociedad o la libertad general de libertad pueden ser extremadamente restringidos por el legislador solo si existen razones constitucionales que lo definan (Bernal 2010, p. 101). Esto sugiere que existe "una interdependencia" en la libertad general de acción con la participación del tipo delictivo y que, debe estar debidamente justificada. En este sentido, ¿puede imponer restricciones al derecho de los menores a la libertad de expresión en relación a su vida privada, permitiendo que la pornografía infantil sea la principal conducta sexual de los menores de esta edad donde pueden expresarse? su consentimiento sexual? ¿Qué debería aumentar el delito de pornografía infantil en esta situación? (Loc, 2016, p. 35).

2.3.16. Límites de la libertad de expresión en esfera privada de los menores dentro del ámbito sexual

Pastor Muñoz (2005) señala como una de las características del derecho penal actual la propensión hacia una "absolutización del fin de la eficacia del *ius puniendi* en la lucha contra el crimen". Lo anterior, de acuerdo la autora, tiene como resultado la "relativización del respeto a la esfera privada del ciudadano". En este sentido, podemos enfatizar que los mediadores en las libertades juveniles, con el pretexto de protegerlos, reducen su sector privado y se involucran en el uso preventivo o casi policial del derecho penal, respondiendo a potenciales amenazas que puedan causar. (p. 23, 24)

La definición de pornografía infantil se puede aplicar a los comportamientos detectados en la sexualidad primaria por menores en edad de consentimiento sexual en el sector privado "mínimo espacio de privacidad compartida" (Agustina, 2016, p. 140). Ahora esta privacidad está relacionada con el ejercicio de la libre expresión estipulado en el art. 20.1.a de la Constitución española que reconoce y ampara el "derecho a expresar y divulgar de forma libre los pensamientos, ideas y opiniones a través de la palabra, el escrito o

cualquier otro medio de reproducción”. Así, en el contexto de su libertad y expresión sexual, al impedir que un menor sexualmente aceptable pueda reproducir un video pornográfico en el sector privado, no solo lo priva de la sexualidad, sino también de la sexualidad. su derecho. Por la libertad de expresión; De esta manera “existe una diferencia entre regulación legal y presupuesto y ley afectada” (Lopera, p. 279).

Existen dos posturas respecto a las conductas del sexting primario. Salvadori (2016) describe que, por un lado, los que consideran que las conductas de *sexting primario* se constituyen como un “riesgo inminente que atenta contra el normal desarrollo psicológico y sexual de los adolescentes y que guarda relación con la normativa penal sobre pornografía infantil”; y por otro lado, aquellos que consideran que estas prácticas son lícitas “tratándose de una natural y legítima manifestación de la libertad sexual de los menores o de comportamientos no imputables penalmente a ellos por razón de su inmadurez psicológica” (p. 311)

Se puede decir que la imposición de una prohibición de imágenes de material pornográfico para menores en la edad de consentimiento sexual suprimirá la primera libertad de expresión de los menores protegida por la ley. Por lo anterior, se presenta el campo de la libertad juvenil, ya que se ve obstaculizado el uso de esta libertad de expresión en relación a su libertad sexual, pues si lo hace este menor correría el riesgo de permitirle difundir pornografía infantil, violando las bases allí. Derechos declarados.

Por otro lado, en los casos de sexo primario cometidos por menores en edad de consentimiento sexual, el argumento en contra de la adopción de pornografía infantil se basará en el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y las restricciones a todas las formas de discriminación, sexo y edad. definido por el art. 8, 10 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Salvadori, 2016, p. 643).

Esta posición se sustenta en un argumento que ha sido discutido por Hirsch dentro de los principios denominados *mediating principles*

(Bernal, 2015, p. 7) estudiados en el derecho anglosajón, bajo los siguientes términos:

Razones para la no criminalización de las conductas que colocan en riesgo o lesionan a personas y que podrían atribuirse sin obstáculos de modo que se efectúan con las exigencias del principio de culpabilidad como el dolo, la imprudencia o la culpabilidad (Hirsch, 2012, p. 57).

El derecho a la privacidad se debate dentro de estos principios, lo que indica que puede considerarse como un elemento mediador. La autora comienza estudiando las razones por las que, en Alemania, sin embargo, las relaciones sexuales con una persona menor de 16 años, que tienen lugar en una situación que se beneficia de la falta de capacidad para autodeterminarse sexualmente, lo convierten en un delito; El permiso está excluido en los casos en que el autor sea menor de 21 años, con la excepción de que sea un sujeto pasivo muy joven. Se expresa de la siguiente manera:

En una sociedad libre, la vida íntima de una persona debe estar sujeta a su determinación y estar lo más libre posible de mediadores ejercidos bajo la presión de los funcionarios estatales. Eso debería aplicarse no solo a los adultos sino también a los adolescentes: sus vidas íntimas deberían mantenerse libres de la interferencia del Estado. (Silva, 2012, p. 173).

En este contexto, para Hirsch (2012), es relevante “reconocer a los jóvenes un nivel significativo de autodeterminación en su esfera personal e íntima. Para aseverar esta autonomía la vida íntima de los adolescentes debería mantenerse en su mayor parte libre de intrusiones del derecho penal” (p. 173).

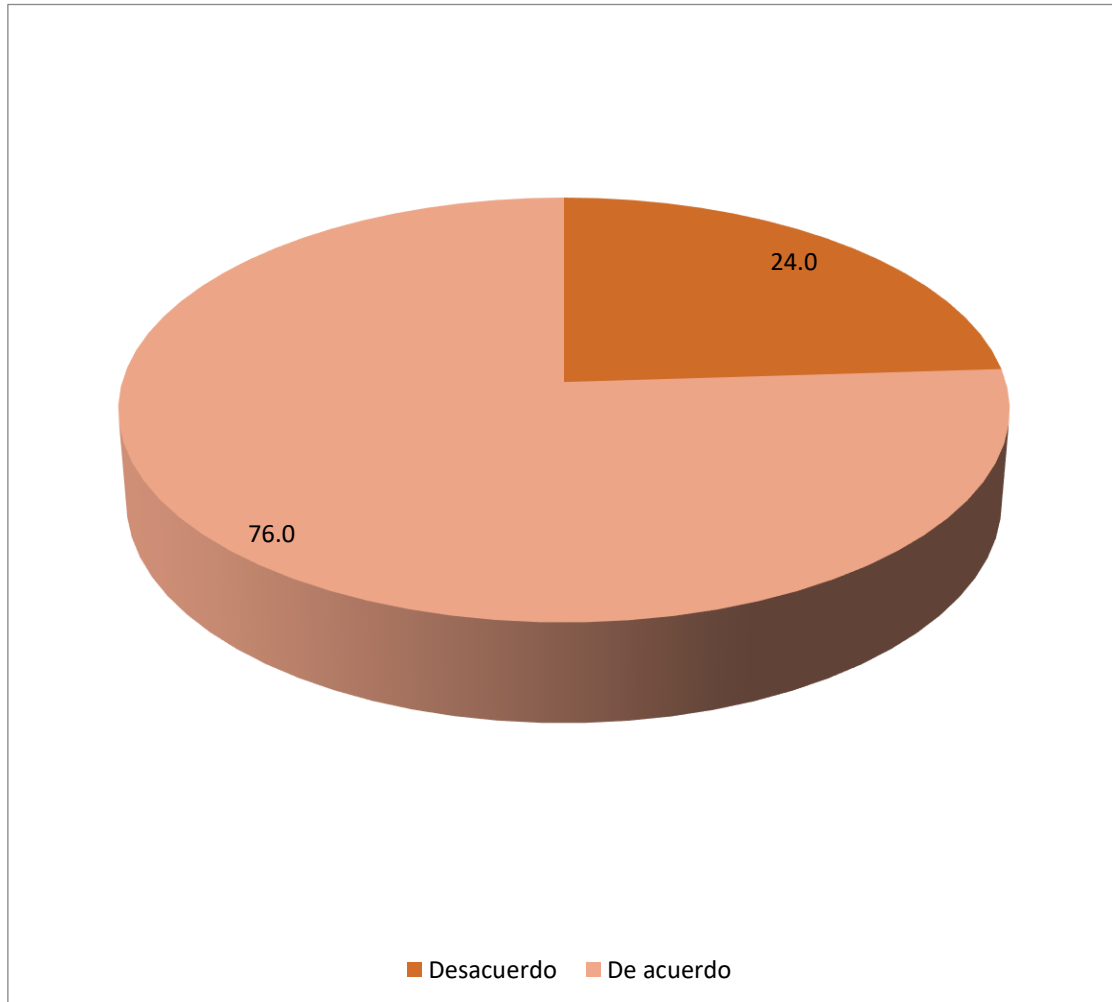
Críticamente, el autor nos muestra un argumento que se está debatiendo en el sector privado contra la criminalización del sexo por parte de menores. El Estado, con el pretexto de proteger a los menores con la edad de consentimiento sexual, no puede intervenir en todo el sector privado que forma parte de la autonomía juvenil y tiene una tendencia irrazonable a reconocer la libertad sexual, pero no su libre expresión. en un contexto privado. El problema surge del hecho de que los principales comportamientos

sexuales pueden ser procesados por delitos de pornografía infantil, asumiendo que, independientemente del consentimiento del menor, la Sección 1 del Arte es una herramienta de configuración juvenil. CP 189 que analizaremos más adelante.

CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS

3.1. Análisis y discusión de los resultados o de los instrumentos utilizados.

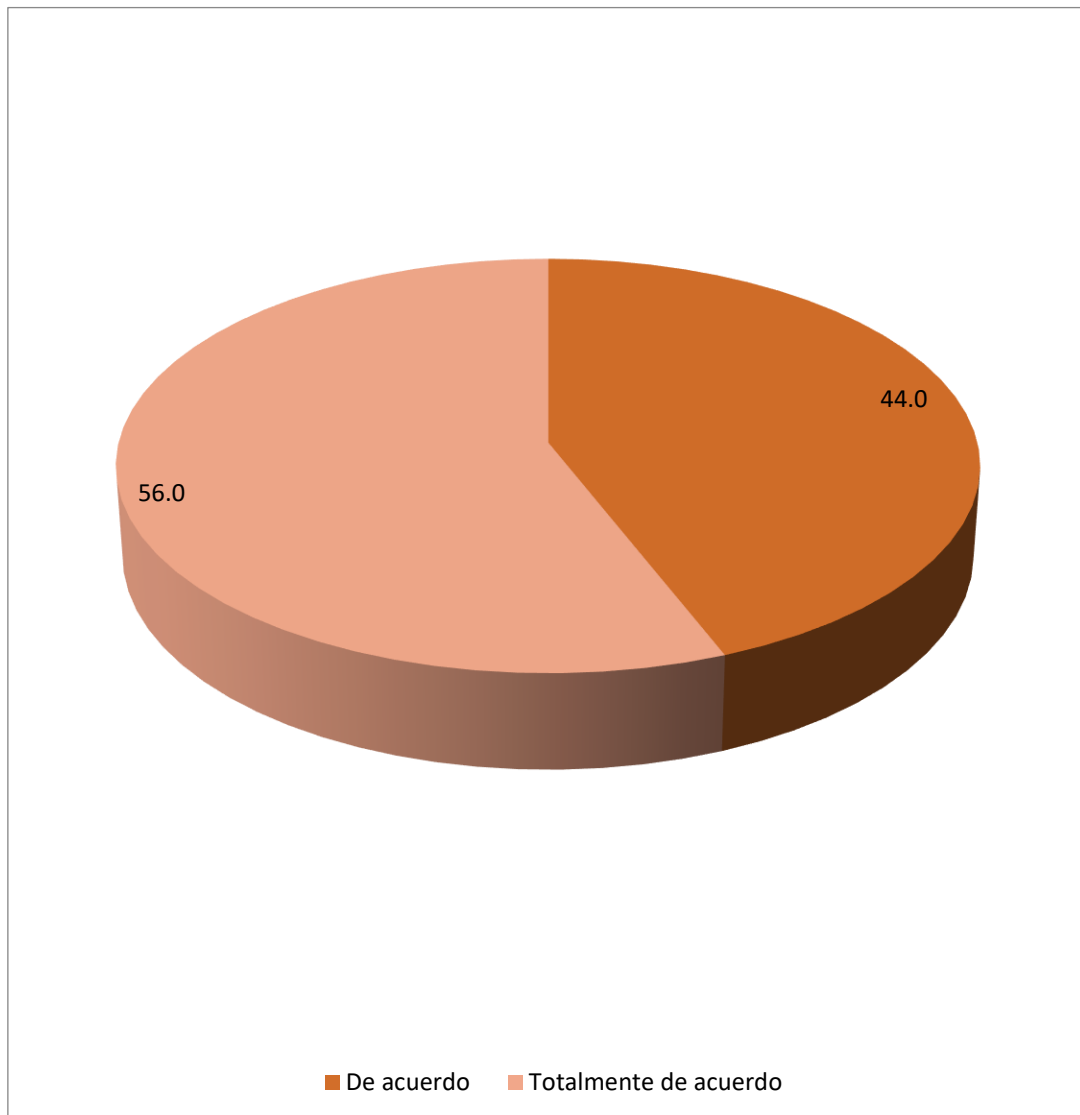
Figura 1. Prueba electrónica.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 76% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que se deba tipificar la prueba electrónica como mecanismo ante los delitos del child grooming, mientras por otra parte el 24% se encuentra en desacuerdo .

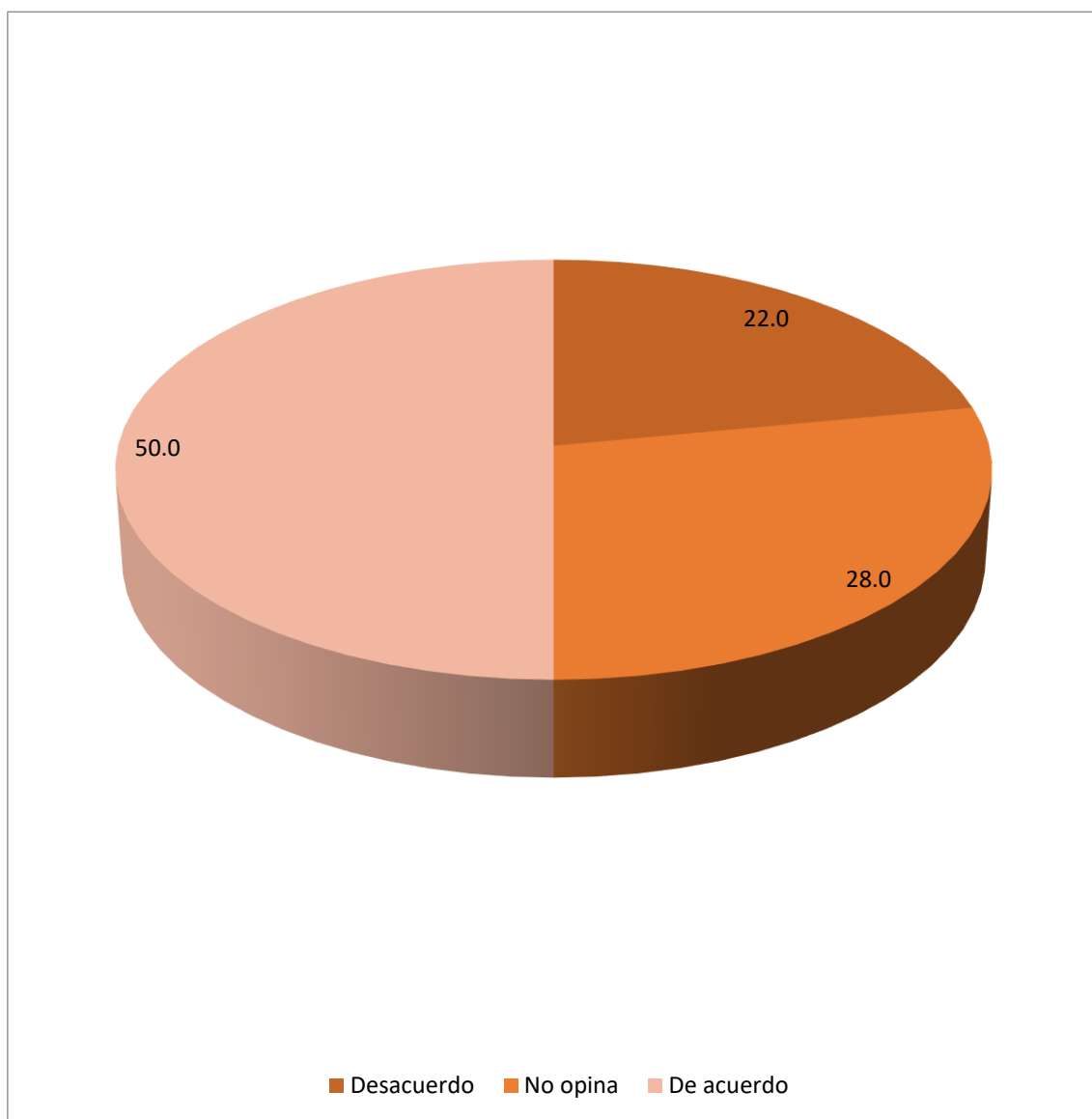
Figura 2. Mecanismo autónomo.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 56% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba identificar los mecanismos para poder tipificar la prueba electrónica como mecanismo autónomo de la prueba documental, mientras que el 44% de la población no está de acuerdo.

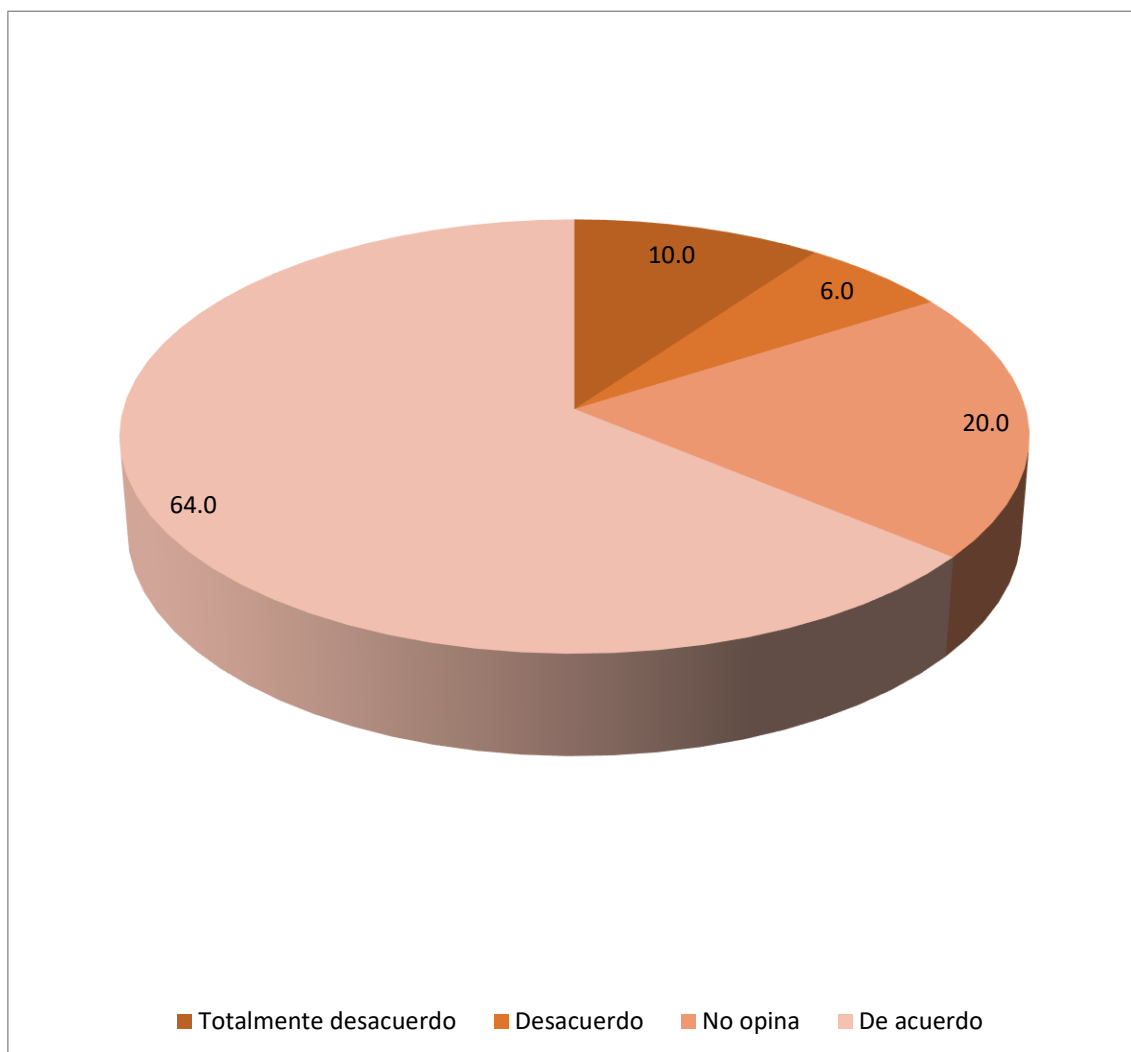
Figura 3. Child grooming.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 50% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que se deba realizar un análisis del delito child grooming, el 28% prefiere no dar su opinión, mientras que el 22% de la población encuestada se encuentra en desacuerdo .

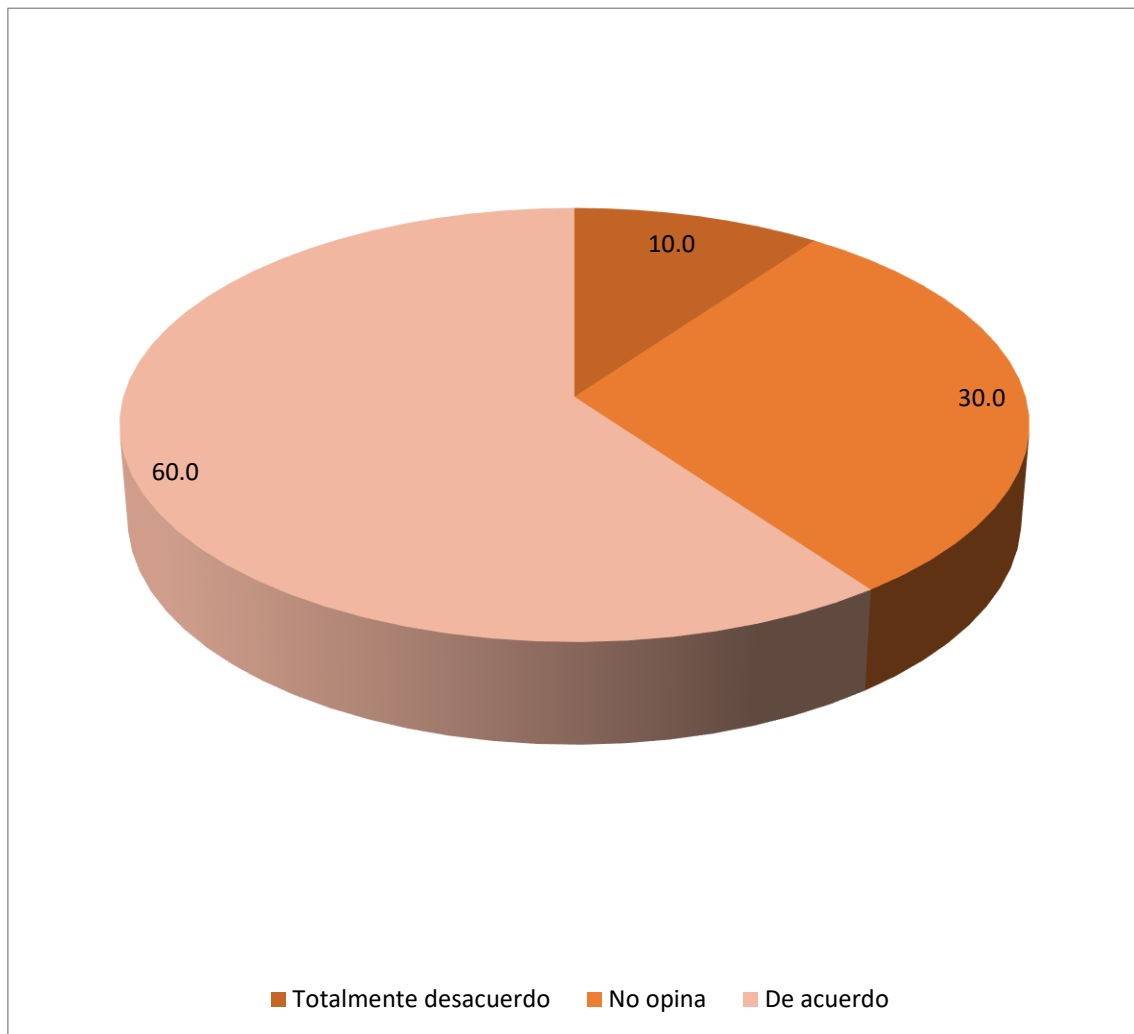
Figura 4. Acoso sexual.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 64% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que se deba fundamentar acerca de los delitos de acoso sexual a menores de edad, el 20% prefiere no dar su opinión, mientras que el 6% de la población se encuentra en desacuerdo y el 10% están totalmente en desacuerdo .

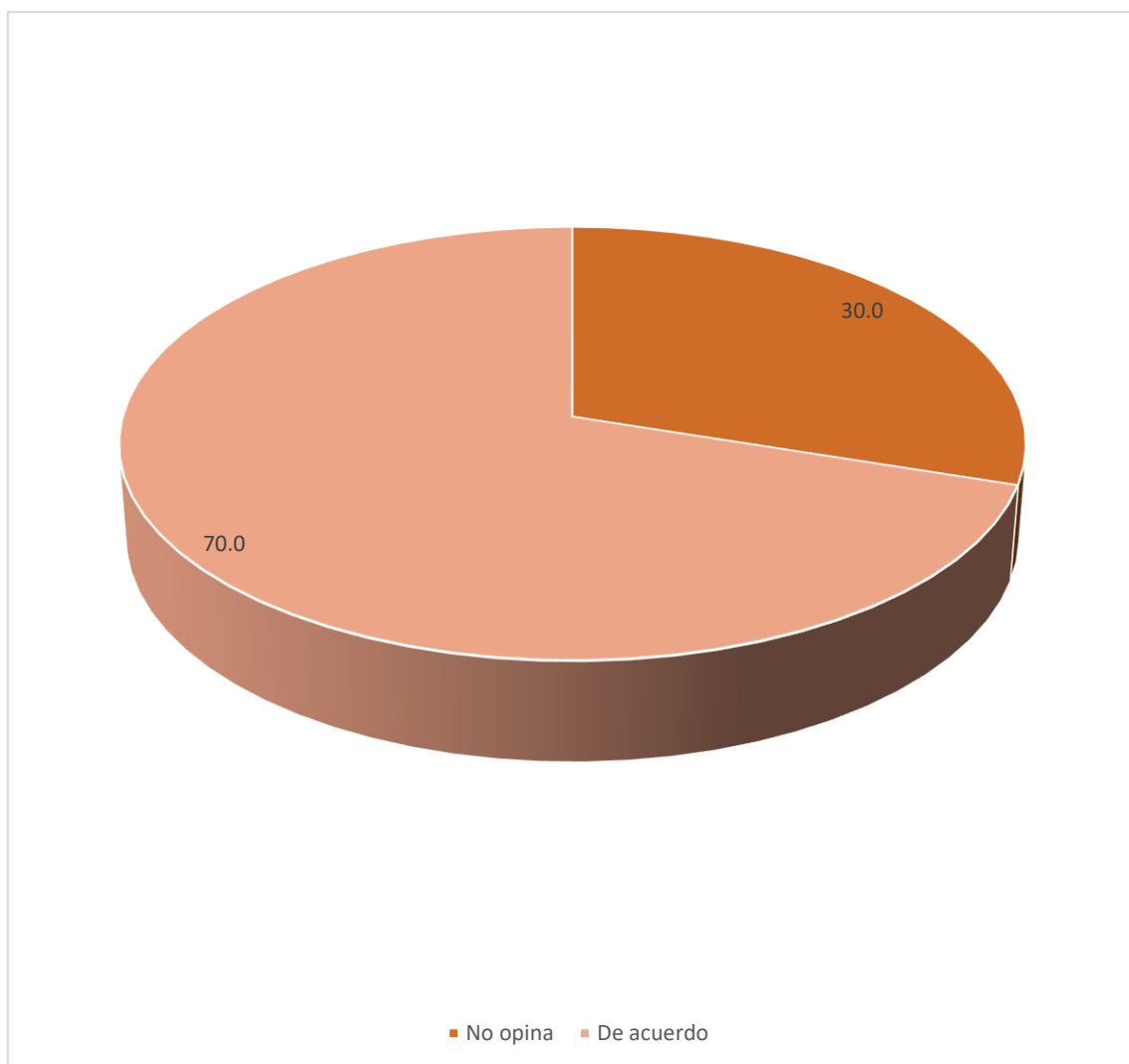
Figura 5. Delitos de acoso sexual.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 60% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que la actual regulación sobre los delitos de acoso sexual no son las más idóneas, lo cual el otro 30% prefiere no dar su opinión, mientras que el 10% de la población se encuentran totalmente en desacuerdo .

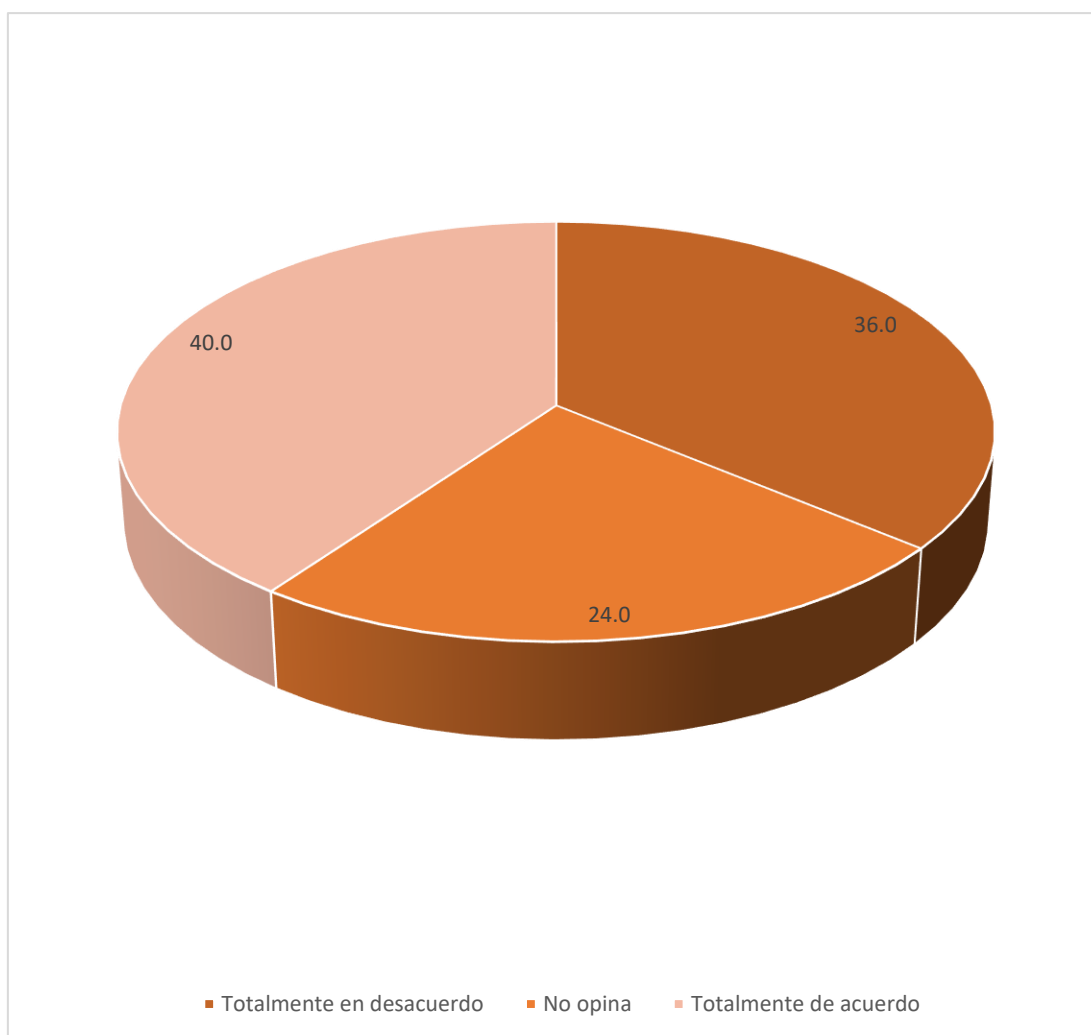
Figura 6. Procedimiento probatorio.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 70% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que la prueba electrónica deba tener un procedimiento probatorio con plena autonomía procesal, mientras que por otra parte el 30% prefieren no emitir su opinión sobre el tema en mención .

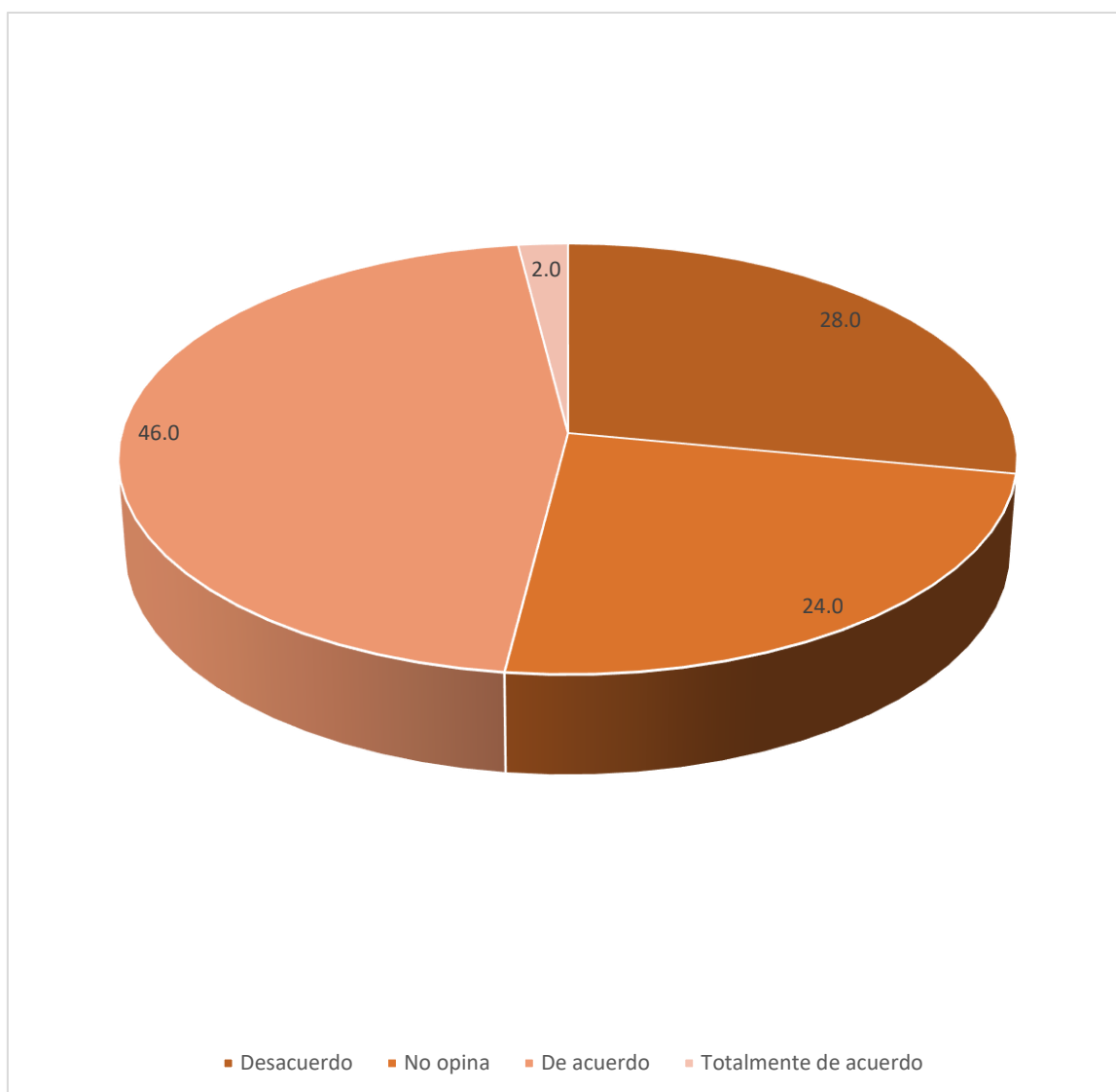
Figura 7. Prueba electrónica.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 40% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que los jueces y fiscales no conocen apropiadamente le procedimiento de la prueba electrónica, el 24% prefieren no emitir su comentario, mientras que el 36% de la población se encuentra totalmente en desacuerdo .

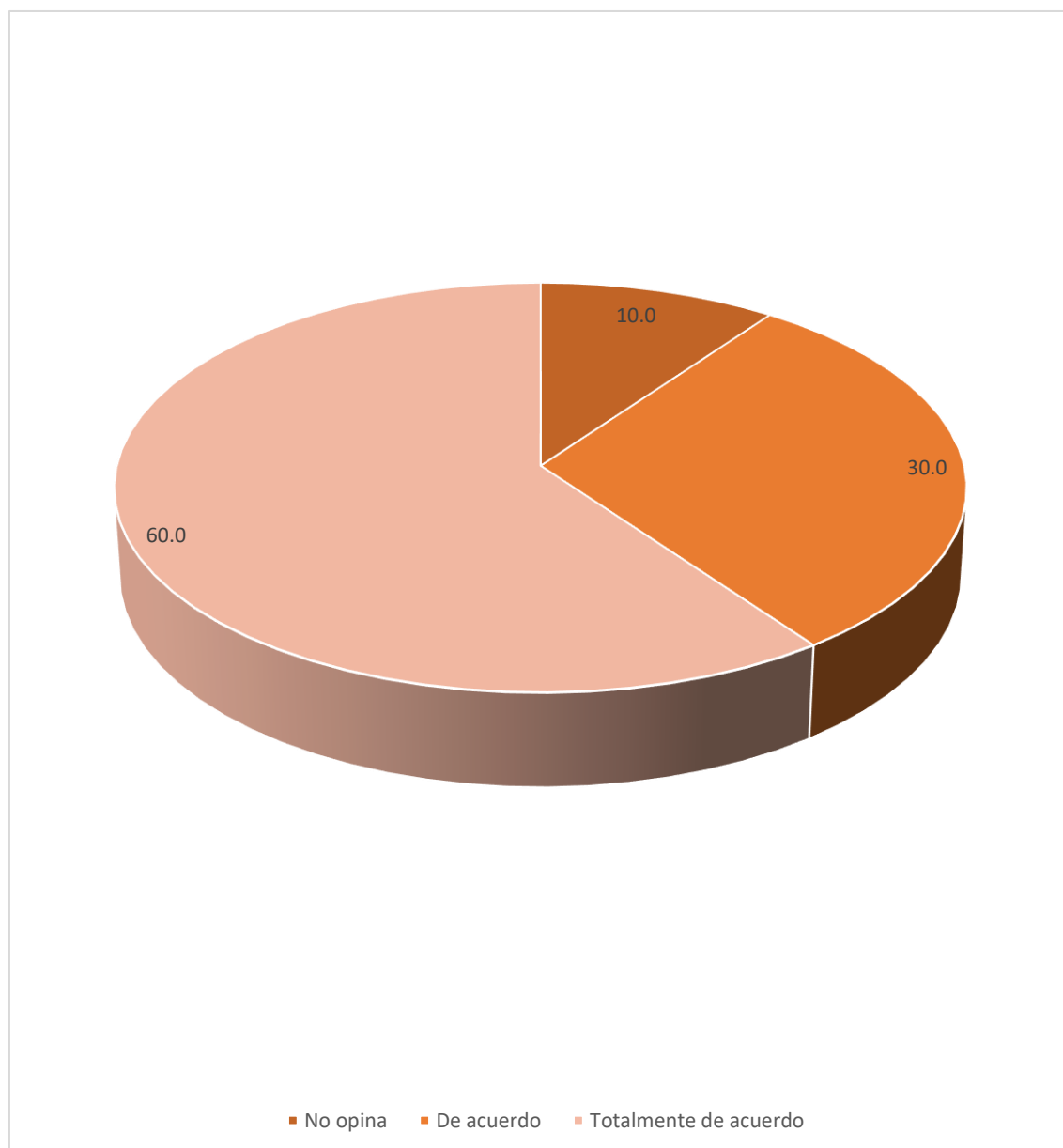
Figura 8. Afirmación relevante para el proceso.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 46% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que la prueba electrónica sirve como convicción en torno a una afirmación relevante para el proceso, el 2.0% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 24% de la población prefieren no dar su opinión y 28% están en desacuerdo.

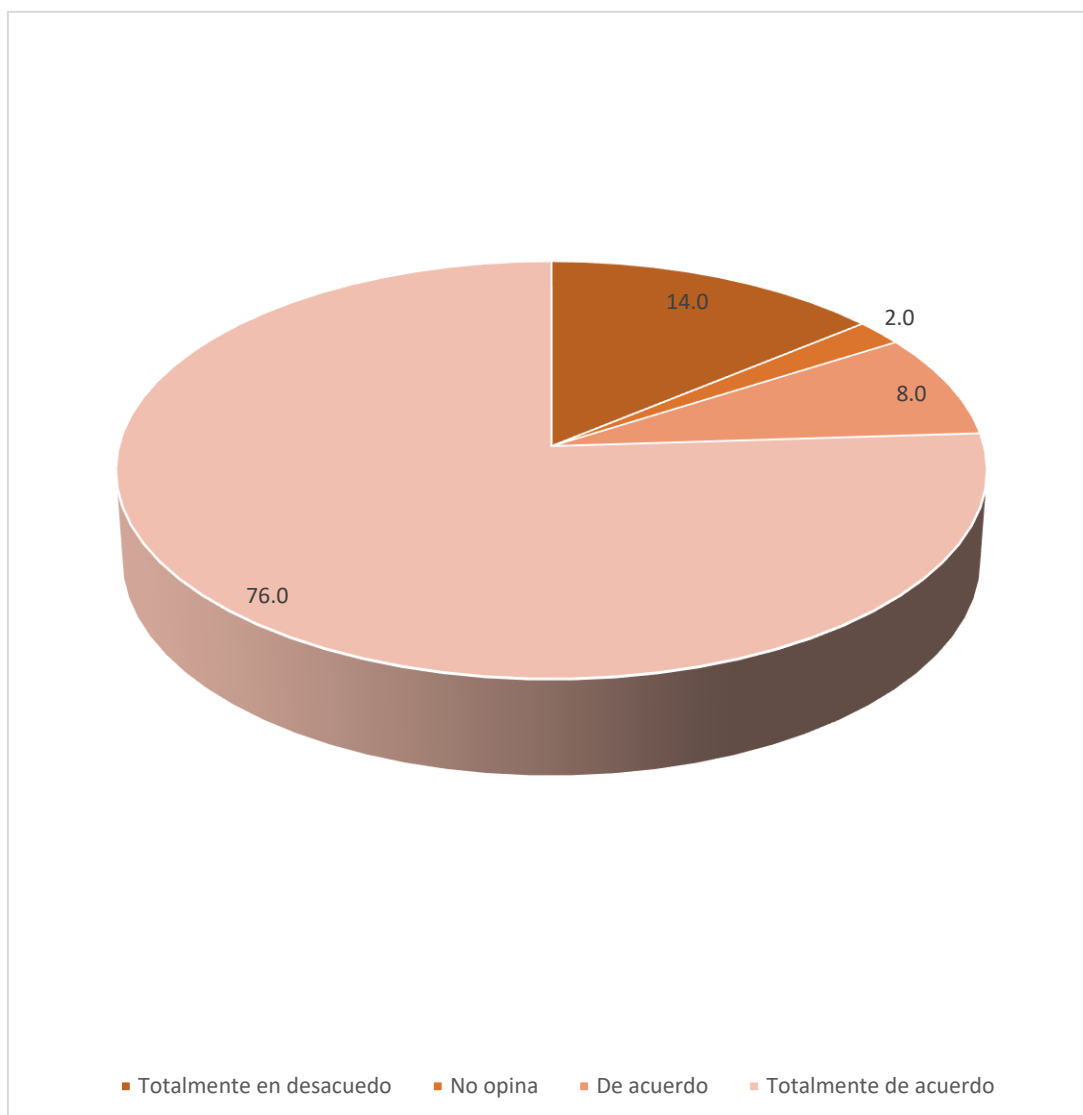
Figura 9. Proceso probatorio.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 60% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que la prueba electrónica pueda agilizar el proceso probatorio, el 30% se encuentran de acuerdo, mientras que el 10% de la población encuestada prefieren no emitir su opinión sobre el tema relacionado.

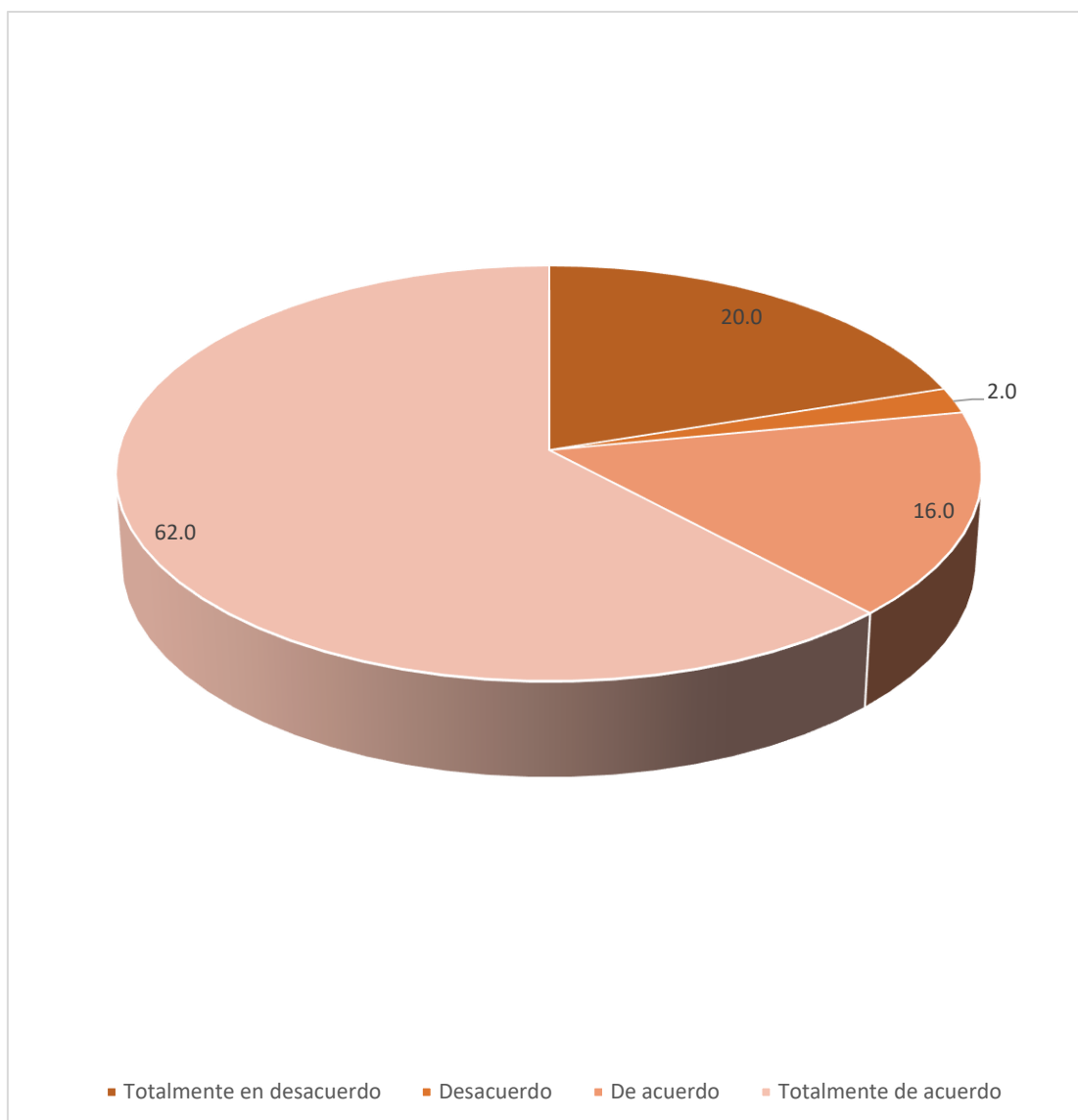
Figura 10. Derechos fundamentales.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 76% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que la prueba electrónica ayudara a proteger los derechos fundamentales de los menores de edad, el 8.0% se encuentra de acuerdo, mientras que el 2.0% de la población prefieren no dar su opinión y 14% están totalmente en desacuerdo.

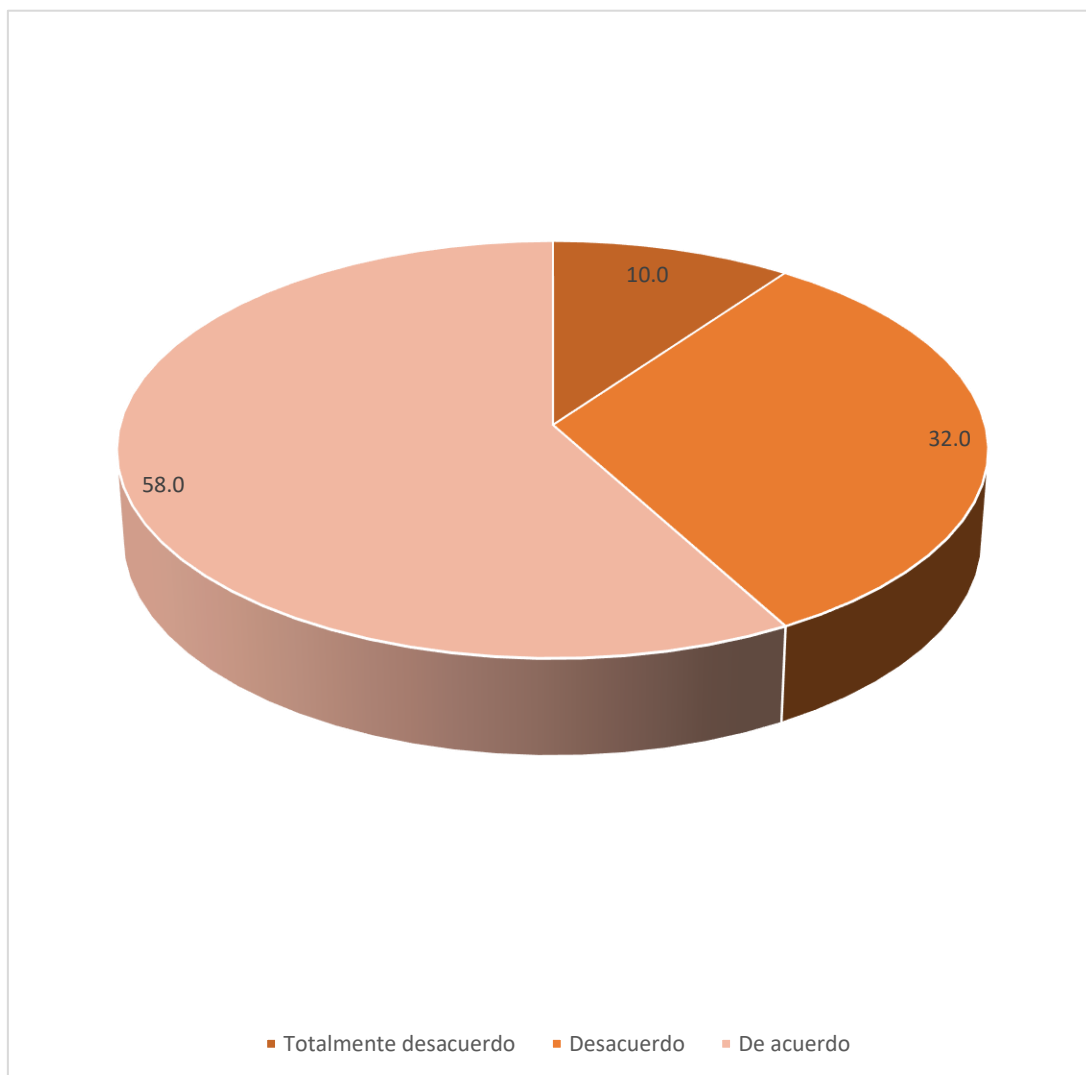
Figura 11. Valor probatorio.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 62% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que la prueba electrónica ayude a mejorar el valor probatorio del testimonio, el 16% está de acuerdo, el 2.0% se encuentra en desacuerdo, mientras que el 20% de la población se encuentran totalmente en desacuerdo.

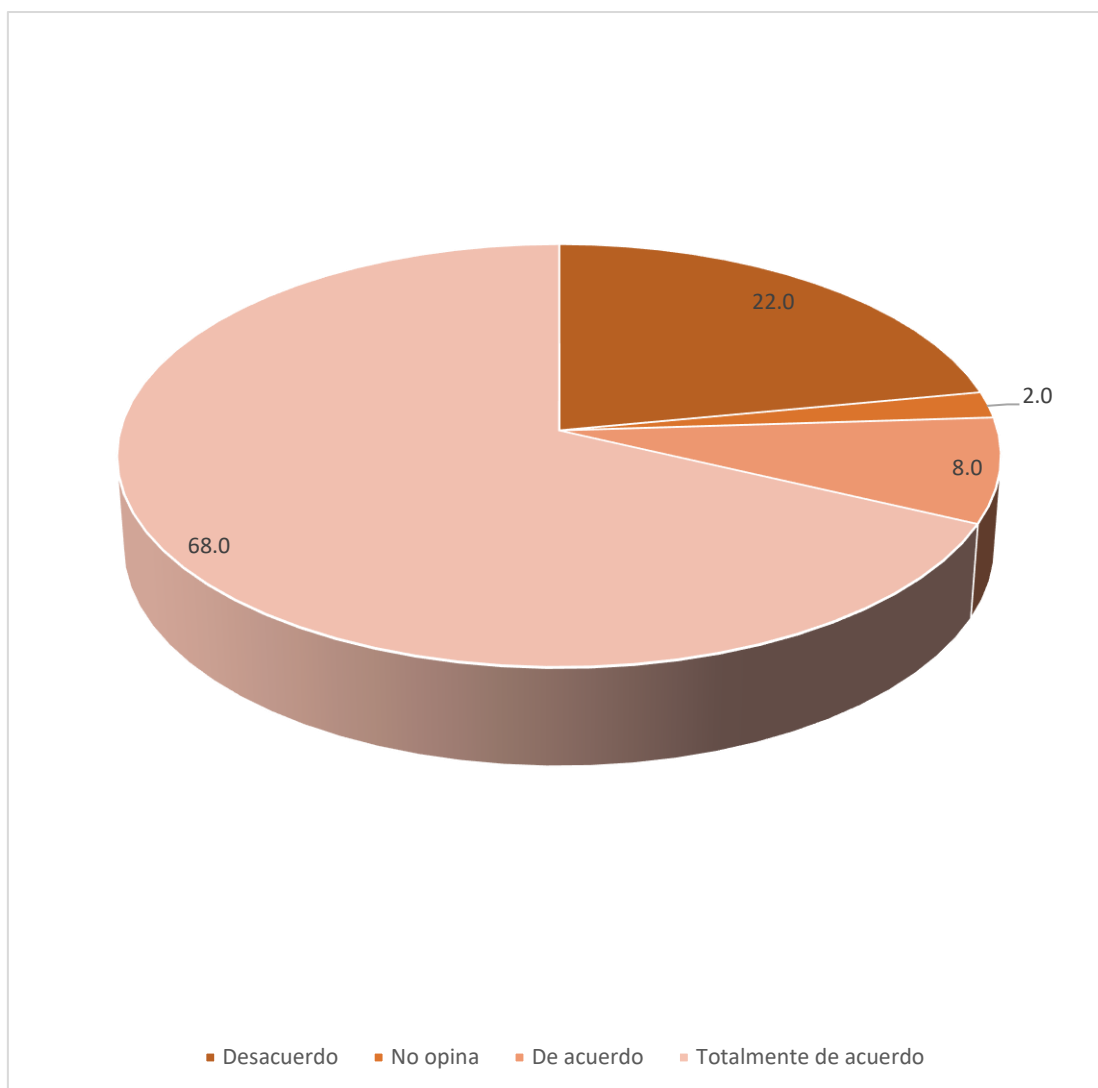
Figura 12. Confiabilidad en el proceso.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 58% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que la prueba electrónica genera confiabilidad en el proceso, lo cual el otro 32% se encuentra en desacuerdo, mientras que el 10% de la población se encuentran totalmente en desacuerdo.

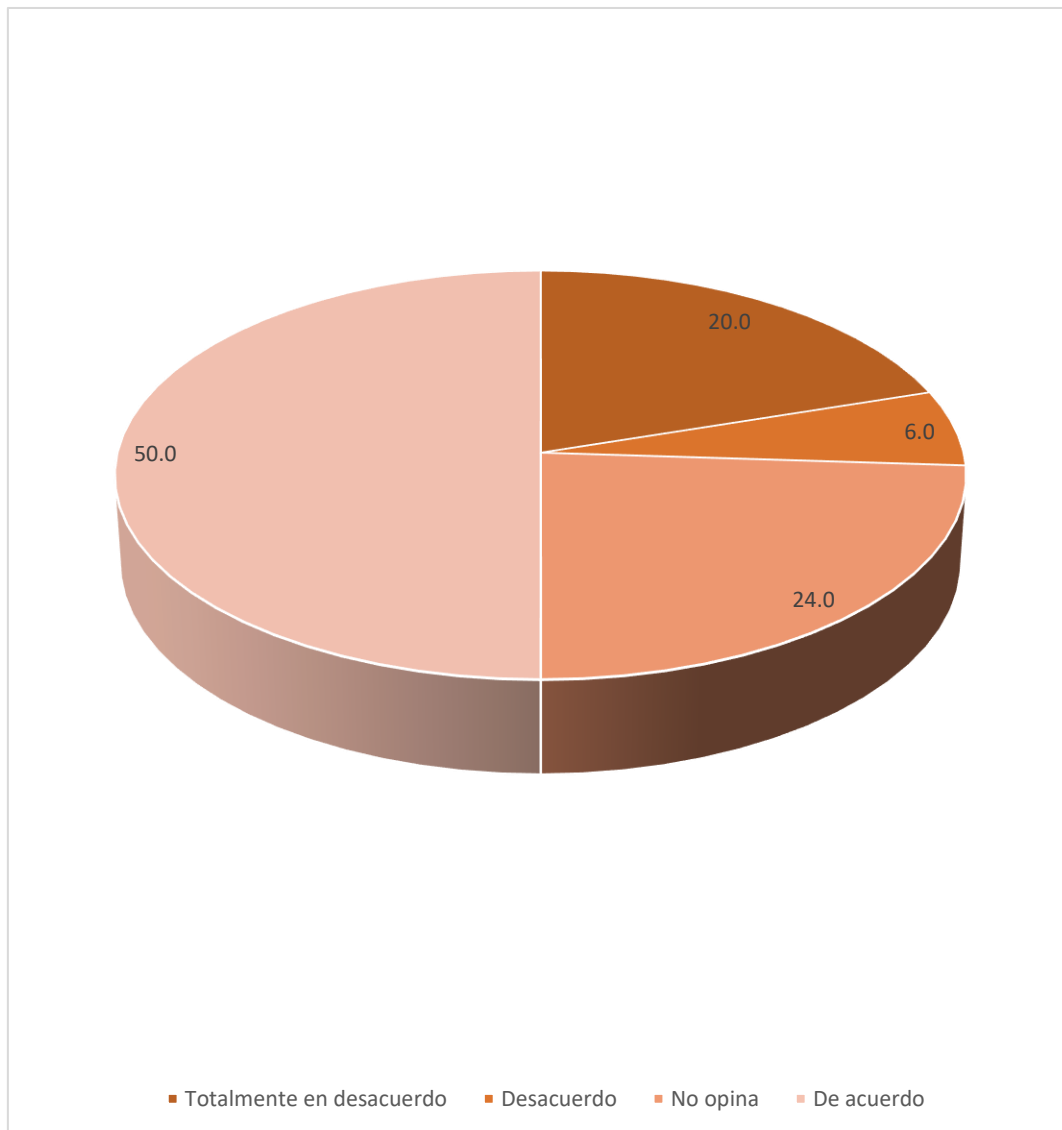
Figura 13. Políticas de preservación digital.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 68% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba incorporar políticas de preservación digital dirigidas a la conservación de la confidencialidad, el 8.0% se encuentra de acuerdo, mientras que el 2.0% de la población prefieren no dar su opinión y 22 % están en desacuerdo.

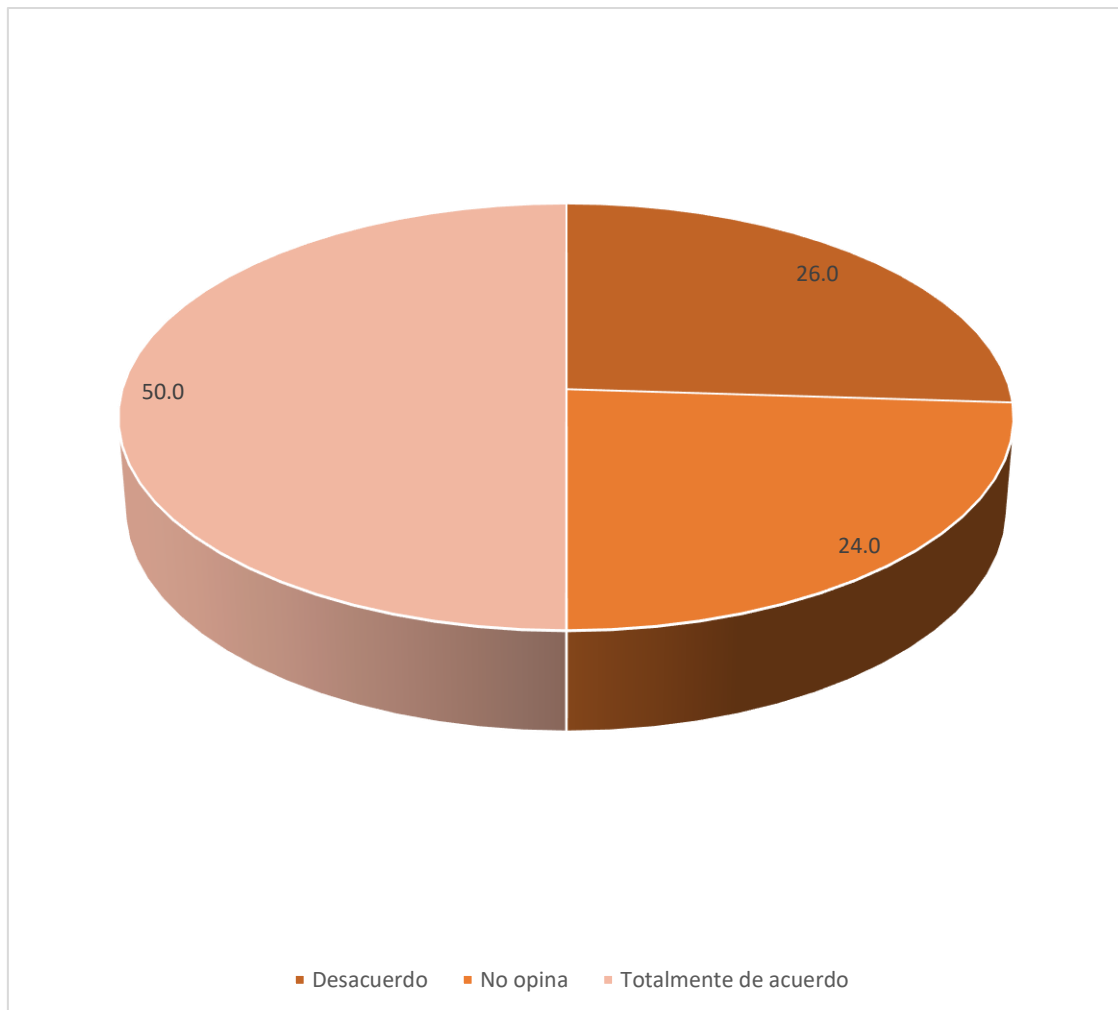
Figura 14. Validez de los documentos.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 50% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que se deba investigar la validez de los documentos presentados, el 24% prefieren no emitir su opinión, mientras que el 6.0% de la población está en desacuerdo y el 20% están totalmente en desacuerdo.

Figura 15. Child grooming.



Fuente: Encuesta aplicada a abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales

Nota: El 50% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que por medio de la prueba electrónica se podrá disminuir el delito del child grooming, el 24% prefieren no brindar su opinión, mientras que el 26% de la población encuestada se mostró en desacuerdo.

CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

De acuerdo a la aplicación del instrumento, se tiene que en la Tabla 01 establece que el 76% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que se deba tipificar la prueba electrónica como mecanismo ante los delitos del child grooming, mientras por otra parte el 24% se encuentra en desacuerdo. La evidencia electrónica requiere conocimiento sobre los diversos mecanismos mediante los cuales se produce la evidencia electrónica, y comprende claramente cómo funcionan las máquinas para garantizar que las partes no modifiquen la información recopilada en dicha evidencia. Esto cambia la verdad para obtener un juicio que se adapte a sus intereses. Datos que al ser comparados con lo encontrado por el autor Vargas (2017), en su investigación: *Vulnerabilidades en la incorporación y admisibilidad de la prueba electrónica en el proceso penal costarricense*, para obtener el título profesional de Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, afirmamos que podemos afirmar que la prueba electrónica es una herramienta jurídica que puede cambiar con facilidad, tanto sea de cuerpo y de fondo, es decir, puede ser alterada su autenticidad e integridad, lo cual con respecto a estos avances tecnológicos se puede detallar que es necesario un análisis profundo y generar mecanismos de seguridad, para que de esta manera las personas inescrupulosas no puedan alterar las pruebas fundamentales para un caso.

Por otra parte, en la tabla 03 establece que el 50% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que se deba realizar un análisis del delito child grooming, el 28% prefiere no dar su opinión, mientras que el 22% de la población encuestada se encuentra en desacuerdo. El proceso de preservación de evidencia electrónica debe basarse en el proceso judicial. El tribunal debe utilizar recursos tecnológicos y humanos seguros para mantener pruebas electrónicas. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Olmos (2009), en su investigación: *Valor probatorio de los documentos electrónicos*, para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad de México, afirma sobre los avances tecnológicos hoy en día es una realidad ya que los jueces y legisladores están siendo sobrepasado por esta herramienta jurídica, lo cual podemos identificar

que en la actualidad estas pruebas son meramente fundamentales en la mayoría de los casos, pero tanto es el avance tecnológico que con respecto al derecho se actualiza en pequeñas escalas, por esta razón los jueces se deben preparar de manera exhaustiva con respecto a la valoración de documentos electrónicos de hoy en día.

De acuerdo a la aplicación del instrumento, se tiene que en la Tabla 02 establece que el 56% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba identificar los mecanismos para poder tipificar la prueba electrónica como mecanismo autónomo de la prueba documental, mientras que el 44% de la población no está de acuerdo. La admisión de evidencia electrónica debe cumplir con los requisitos de cualquier forma de evidencia: valor, beneficio e importancia. En otras palabras, la prueba legal es que se obtiene sin violar derechos y prerrogativas básicas. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Pérez (2014), en su investigación titulada: *La prueba electrónica: Consideraciones*, para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad de Lima, establece que el problema que hoy en día encontramos es explicar o de qué manera se pueda aplicar este mecanismo jurídico sin que exista una impugnación de por medio, ya que esta herramienta jurídica tiene como objetivo probar de manera precisa por las distintas formas que son consideradas pruebas modernas como audiovisuales, instrumentos informáticos, por lo tanto, es fundamental que se acceda en el proceso penal o civil.

Por otra parte, en la tabla 04 establece que el 64% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que se deba fundamentar acerca de los delitos de acoso sexual a menores de edad, el 20% prefiere no dar su opinión, mientras que el 6% de la población se encuentra en desacuerdo y el 10% están totalmente en desacuerdo. Debido a la conveniencia de manejar evidencia electrónica, la dificultad de ver o escuchar material no verbal y la dificultad de distinguir entre texto y copia; Se deben establecer reglas sobre la intervención de un técnico informático y la tarea de

verificación de derechos. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Duarte (2012), en su investigación titulada: *Valoración probatoria de los documentos audiovisuales*, para obtener el título profesional de Maestría en Derecho con Mención en Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, determina que en algunos sectores del estado peruano se puede concluir que aun presentan una resistencia de aceptación del valor de la prueba, ya que no se encuentra actualizados o el estado no ha implementado medidas eficaces a favor de los jueces que es necesario que con el transcurrir de los días o los avances tecnológicos sus conocimientos deben actualizarse, ya que a nivel internacional este mecanismo jurídico es una de las claves principales para determinar y solucionar la mayoría de casos.

De acuerdo a la aplicación del instrumento, se tiene que en la Tabla establece que el 60% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que la actual regulación sobre los delitos de acoso sexual no son las más idóneas, lo cual el otro 30% prefiere no dar su opinión, mientras que el 10% de la población se encuentran totalmente en desacuerdo. Cualquier caso de agresión sexual puede ocurrir porque el abusador tiene influencia sobre el abusador de su compromiso de satisfacer las necesidades de los ricos. Esta característica puede ser muy diversa, aunque muy a menudo tiene una imagen muy cercana que el ridiculizador amenaza con publicar si sus solicitudes sexuales no son satisfechas. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Izquierdo (2017), en su investigación titulada: *Mecanismos de seguridad para contrarrestar ataques informáticos en servidores web y base de datos*, para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad Cesar Vallejos, nos indica que mediante lo analizado por el autor nos indica que hoy en día la realidad de los avances tecnológicos ha abarcado sustancialmente a nivel nacional e internacional, lo cual recomienda que debe existir un análisis correcto sobre las pruebas realizadas y presentadas, ya que se puede concluir que tanto es el avance que existen dos partes que lo utilizan para su favor el primero los aplicadores del derecho y por lo contrario la parte de los infractores.

Por otra parte, en la tabla 07 establece que el 40% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que los jueces y fiscales no conocen apropiadamente el procedimiento de la prueba electrónica, el 24% prefieren no emitir su comentario, mientras que el 36% de la población se encuentra totalmente en desacuerdo. El grooming es otra forma en que el abuso sexual muestra la creación de redes en los niños, pero no la única. Se puede hablar de educación sexual cuando hay una agresión sexual donde hubo una estrategia de intimidad, con el fin de convertir a un niño que confió en él sexualmente para que pueda conseguirlo. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Los autores Bazan y Balcazar (2011), en su investigación: *La prueba pericial en el Proceso Penal Peruano*, para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad Señor de Sipán, se toma en cuenta que en toda prueba presentada en un proceso tiene un rol primordial ya que de esta forma se determinará supuestos con el único objetivo de buscar la solución, encontrar un culpable o inocente, lo cual este proceso cumplirá una determinada tarea con respecto al fallo, por lo tanto, es necesario el ofrecimiento de la actuación y valoración del proceso penal.

De acuerdo a la aplicación del instrumento, se tiene que en la Tabla 08 establece que el 46% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron de acuerdo que la prueba electrónica sirve como convicción en torno a una afirmación relevante para el proceso, el 2.0% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 24% de la población prefieren no dar su opinión y 28% están en desacuerdo. El uso inadecuado de dispositivos como teléfonos celulares, tabletas o cualquier otro dispositivo de red social expone a los adultos, especialmente a los vulnerables, a estar en riesgo. seguro y valioso. Y por ello, conviene recordar que actualmente no hay un aumento significativo de la delincuencia y el robo a través de dispositivos móviles, sino también un aumento de la violencia digital en la que adultos y niños son víctimas. En el minero, es un hecho llamado "autoexpresión". Datos que al ser comparados con lo encontrado por Amoros y Amoros (2015), en su investigación titulada, "Incidencias sobre el delito de

grooming en adolescentes: caso región Lambayeque”, tesis para optar el título profesional de abogado de la Universidad Señor de Sipan, según el autor antes mencionado quien considera que los adolescentes del departamento de Lambayeque resultan ser afectados en sus derechos tras el incumplimiento de la ley N 30096 en su artículo 5, en el cual establece que estos adolescentes tras el desconocimiento de lo que es un planeamiento teórico relacionado, a delitos informáticos sobre la identidad y la libertad sexual, pues resulta una clara vulnerabilidad a sus derechos inherentes que estos gozan, así mismo al existir un incumplimiento en el cuerpo normativo nacional e internacional sobre los delitos informáticos sobre identidad y libertad sexual se estaría generando un vacío para los juristas.

Por otra parte, en la tabla 09 establece que el 60% de abogados especialistas en Derecho penal, jueces y fiscales, se mostraron totalmente de acuerdo que la prueba electrónica pueda agilizar el proceso probatorio, el 30% se encuentran de acuerdo, mientras que el 10% de la población encuestada prefieren no emitir su opinión sobre el tema relacionado. No es cuestión de que los jueces sean técnicos o expertos en informática, sino más bien comprender plenamente cómo influye en la vida diaria, cómo funciona y cuáles son las características clave. lo que al mismo tiempo permitirá un adecuado plan de manejo. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Morales (2016), en su investigación titulada, “La inseguridad al utilizar los servicios de redes sociales y la problemática judicial para regular los delitos informáticos en el Perú-2015”, tesis para optar el título profesional de abogado de la Universidad Señor de Sipan, para el autor antes mencionado, quien hace referencia a un sin fin de normas creadas para poder salvaguardar una diversidad de bienes jurídicos y su ineficaz aplicación en casos determinados sobre el sistema informático, pues resulta ser que se genera un vacío en estas normativas, las cuales entran en un dilema entre los juristas quienes deben aplicar una de estas normativas, teniendo en consideración que no afecte a la persona, sin embargo en el cuerpo normativo nacional encontramos un claro ejemplo como es el delito de hurto regulado en el código penal.

CONCLUSIONES

1. La prueba electrónica en la investigación se ha propuesto como un mecanismo electrónico o un medio digital, en donde llega a formar parte del entorno de un proceso de convicción relevante, para que tenga una autonomía probatoria en los delitos de Child Grooming, los cuales sirvan para diferentes reproducción o medios que puedan impugnar.
2. Se tipifica la prueba electrónica en base a los delitos de Child Grooming, en donde se llegan a verificar la clandestina de naturaleza informática y el uso de técnicas y herramientas complejas y modernas (malware) para ejecutar las modalidades de fraude informático.
3. El delito de Child Grooming llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con un menor de edad la cual afecta la indemnidad o libertad sexual del menor y el medio utilizado para facilitar el contacto es la informática.
4. Los delitos de acoso sexual a menores de edad proponen llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con el sujeto activo o con un tercero, a través de internet u otro medio análogo, llegando a vulnerar su libertad sexual y su desarrollo psicológico

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda ejercer una mejor protección al menor de edad en casos de violencia tecnológica, así mismo brindar pruebas idóneas para poder determinar la contracción de los hechos.
2. Se recomienda establecer doctrinalmente a la prueba electrónica como aquella información la cual se obtiene a partir de un dispositivo electrónico o un medio digital, y así poder ejercer una mejor justicia y protección del menor.
3. Se recomienda una adecuada tipificación por el legislador como nueva clase de prueba, la cual deben realizar y observar los pesquisas e investigadores de la policía y los fiscales desde la fase de búsqueda hasta la investigación preparatoria

BIBLIOGRAFIA

- Abel, X. (2011). *La prueba electrónica*, Barcelona: JB Librería Bosch.
- Aboso, (2011). “*La nueva regulación de los llamados ‘delitos informáticos’ en el Código Penal argentino: un estudio comparado*”, en José Urquiza Sánchez; Manuel Abanto Vásquez y Nelson Salazar Sánchez (coords.), *Dogmática penal de derecho penal económico y política criminal. Homenaje a Klaus Tiedemann*, vol. i, Lima: Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres, 2011.
- Agustina, J. (2010), “¿Menores infractores o víctimas de pornografía infantil? Respuestas e hipótesis criminológicas ante el sexting”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 12, Granada.
- Agustina, J. (2016), “¿Debe perseguirse penalmente la pornografía producida por y entre menores?”, en *La pornografía. Sus efectos sociales y criminógenos. Una aproximación multidisciplinar*, Edisofer,
- Agustinoy, A. (2016). *Aspectos legales de las redes sociales*, Barcelona: Bosch.
- Arenas, J. y Valdes, C. (2008). *La prueba testimonial y técnica*, Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura.
- Armenta, T. (2011). *La prueba ilícita. Un estudio comparado*, Madrid: Marcial Pons.
- Armenta, T. (2014). *Estudios de justicia penal*, Madrid: Marcial Pons.
- Armenta, T. (2017). *Lecciones de derecho procesal penal*, Madrid: Marcial Pons.
- Arrabal, P. (2007). *El WhatsApp como fuente de prueba*, Valencia: Tirant lo Blanch.
- Asencio, J. (2007.). *Justicia penal y nuevas formas de delincuencia*, Valencia: Tirant lo Blanch.
- Asencio, J. (2016). *Derecho procesal penal. Estudios fundamentales*, Lima: INPECCP y CENALES.
- Bachmaier, L. (2017). *Registro remoto de equipos informáticos y principio de proporcionalidad en la Ley Orgánica 13/2015*, Boletín del Ministerio de Justicia.
- Bazan, M. y Balcazar, M. (2011). *La prueba pericial en el Proceso Penal Peruano*. Recuperado de: [http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/2120/Baz%
c3%a1n%20-%20Balcazar.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/2120/Baz%c3%a1n%20-%20Balcazar.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Benavente, H. (2012). *Estrategias para el desahogo de la prueba en el juicio oral*, Ciudad de México: Flores Editor y Distribuidor.

- Bendito, M, (2015), *La autorregulación: una alternativa para la protección de los menores digitales*, Madrid: UNED, Recuperado de <<https://bit.ly/2NEJ4we>>.
- Bernal, C, (2015). "Proporcionalidad, derechos fundamentales y ley penal", en Lascuraín Sánchez, Juan y Maximiliano Rusconi (dirs.), *El principio de proporcionalidad penal*, Buenos Aires: Ad Hoc,
- Bueno, F. (2016). "*La validez de los 'screenshots' o 'pantallazos' como prueba electrónica a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo*", Barcelona: Atelier.
- Bueno, F. (2017). *Los nuevos retos del derecho ante la era digital*, Granada: Comares.
- Cabezudo, N. (2016). *Ciberdelincuencia e investigación criminal. Las nuevas medidas de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal*, Boletín del Ministerio de Justicia.
- Carmona S. (1998). "Concepción, Los delitos de abusos deshonestos"; Buenos Aires: Astrea.
- Castillejo, R. (2010). *La prueba en el proceso penal: el documento electrónico*, Revista de Derecho Penal.
- Castillo A. (2004). "Delitos contra la libertad e indemnidad sexual", Lima: Grijley.
- Davara, L. (2015). *Implicaciones socio-jurídicas de las redes sociales*, Madrid: Thomson Reuters Aranzadi.
- De la Rosa, J, (2013) "Bien jurídico protegido y delitos contra la libertad e indemnidad sexual", en *Ponencia de la Fiscalía General del Estado*, Recuperado de <<https://bit.ly/2AufuYx>>.
- De Urbano, E. (2011). *La regulación legal de la prueba electrónica: una necesidad pendiente*, La Ley Penal.
- De Urbano, E. (2012). *La prueba ilícita penal*, Madrid: Aranzadi.
- Delgado, J. (2013). *La prueba electrónica en el proceso penal*, Diario La Ley.
- Delgado, J. (2016). *Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones*, Madrid: La Ley Actualidad.
- Díaz, L. (2012). "*El nuevo delito de contacto TIC pre ordenado a la actividad sexual con menores en España*", en *Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional*, n.º 38, Bogotá.

- Díaz, L. (2012). *“El nuevo delito de contacto TIC pre ordenado a la actividad sexual con menores en España”*, en Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional, N°38, Bogotá: 2012.
- Diez, J. (1985). *“La protección de la libertad sexual”*, Barcelona: Bosch.
- Diez, J. (2001). *“El objeto de protección del nuevo derecho penal sexual”*, en Derecho penal y discriminación de la mujer. Anuario de derecho penal 1999-2000, Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2001.
- Duarte, L. (2012). *Valoración probatoria de los documentos audiovisuales*. Recuperado de: <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38647.pdf>
- Duarte, L. (2012). *Valoración probatoria de los documentos audiovisuales*. Recuperado de: <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38647.pdf>
- Elías, R. (2014). *“Luces y sombras en la lucha contra la delincuencia informática del Perú”*, Lima: Hiper Derecho.
- Encinar, M. y Villegas M. (2017). *Validez de medios de prueba tecnológicos*, Diario La Ley.
- Fernández, J. (2007) “Cibercrimen. Los delitos cometidos a través de internet. Estafas, distribución de pornografía infantil, atentados contra la propiedad intelectual, daños informáticos, delitos contra la intimidad”, Oviedo: Constitutio Criminalis Carolina.
- Flores, J. (2019). Ciberacoso sexual de menores, grooming y sextorsión”, Revista Dialogando. Recuperado desde: <https://dialogando.com.pe/ciberacoso-sexual-de-menores-grooming-y-sextorsion/>
- Gaceta Jurídica. (2016). *“Diferencias entre las modalidades de grooming child tipificadas en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos y en el artículo 183-B del CP”*, en Gaceta Penal & Procesal Penal, n.º 88, Lima.
- García, D. (2018). *Aportación de mensajes de WhatsApp a los procesos judiciales. Tratamiento procesal*, Granada: Comares.

- Garrido, F. (2013). *La prueba electrónica en los procesos civiles y penales*, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.
- Gil, A. (2012). “El fenómeno de las redes sociales y los cambios en la vigencia de los derechos fundamentales”, en Revista de derecho UNED, España.
- Gillespie, A, (2013) “Adolescents, Sexting and Human Rights”, en *Human Rights Law Review*, vol. 13, n. ° 4,
- Gomez, E. (2011). *Los documentos electrónicos y su valor probatorio: en procesos de carácter judicial*. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5978962.pdf>
- González, N. (2006). *Garantías constitucionales en la persecución penal del ‘entorno digital*, Madrid: Cuellar García.
- Gudín, M. (2017). *La protección de datos en el tratamiento procesal de los dispositivos de almacenamiento masivo de información*, Madrid: La Ley Penal.
- Guinarte, G & Fernando S, (2014) “Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores”, en *Delitos sexuales contra menores: abordaje psicológico, jurídico y policial*, Valencia: Tirant lo Blanch,
- Guisasola, C, (2014) “Menores, intimidad y riesgos de la sociedad tecnológica el caso particular del sexting”, en Fayos Gardó, Antonio y Pilar Conde Colmenero, (coords.), *Los derechos a la intimidad y la privacidad en el siglo xxi*, Madrid: Dykinson,
- Hirsc, J. (2012). “El principio de proporcionalidad”. Lima: Gaceta.
- Izquierdo, B. (2017), *Mecanismos de seguridad para contrarrestar ataques informáticos en servidores web y base de datos*. Recuperado de: http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4062/TESIS_IzquierdoCabrera_TafurCallirgos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- La Rue, F, (2011) “Informe del Relator Especial sobre la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión”, en *Asamblea General de las Naciones Unidas*, 19 de mayo del. Recuperado de <<https://bit.ly/2uHSK20>>.
- Loc, A. (2016). “Avance de la Tecnología”. Lima: El precio de la actualidad.

- Lopera, G. (2010) "Posibilidades y límites del principio de proporcionalidad como instrumento de control del legislador penal", en Fernández Bautista, Silvia (coord.); Santiago Mir Puig y Joan J. Queralt Jiménez (dirs.), *Constitución y principios del derecho penal: algunas bases constitucionales*, Valencia: Tirant lo Blanch,
- Magro, V. (2006). *La prueba pericial informática. La utilización de los medios de prueba informáticos en el proceso penal*, Madrid: La Ley Penal.
- Marchena, M. y González, N (2015). *La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015*, Madrid: Castillo de Luna.
- Martínez, E. (2013). *Valor probatorio de un correo electrónico*, Diario La Ley.
- Mut, B. (2014). *Los documentos electrónicos en el ámbito del proceso*. Recuperado de:
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/Aige_Mut.dir/Aige_Mut_MariaBelen.pdf
- Nieva, J. (2017). *Derecho procesal III. Proceso penal*, Madrid: Marcial Pons.
- Nisimblat, N. (2014). *Derecho probatorio*, Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Núñez, F. (2015). "*La problemática de los delitos sexuales en el derecho penal. Una visión integral desde el derecho penal, procesal penal y de ejecución penal*", Lima: Grijley.
- Olmos (2009). *Valor probatorio de los documentos electrónicos*. Recuperado de:
<http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/valorprobatoriodelosmedioselectronicos.pdf>
- Ortiz, J. (2016). *Desafíos legales de las diligencias de investigación tecnológica, El proceso penal: cuestiones fundamentales*, Tirant lo Blanch.
- Orts, E. y Roig. (2001). "*Delitos informáticos y delitos comunes cometidos a través de la informática*", Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Panizo, V. (2011). "*El ciber-acoso con intención sexual y el child-grooming*", en Cuadernos de Criminología. Revista de Criminología y Ciencias Forenses, n.º 15, Valladolid.

- Panizo, V. (2011). *“El ciber-acoso con intención sexual y el child-grooming”*, en Quadernos de Criminología. Revista de Criminología y Ciencias Forenses, n.º 15, Valladolid. Recuperado de <<https://bit.ly/2dSpLQL>>.
- Paredes, J. (2013). *De los delitos cometidos con el uso de sistemas informáticos en el distrito judicial de Lima, en el período 2009-2010*. Recuperado de: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/10314/Paredes_pj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Pastor, M, (2005) *Los delitos de posesión y los delitos de status: una aproximación político-criminal y dogmática*, Barcelona: Atelier,
- Peña, A. (2008). *“Derecho penal. Parte especial”*, t.i, Lima: Idemsa.
- Peña, A. (2017). *“Parte especial de los delitos sexuales”*, t.ii, Arequipa: Cromeo.
- Peña, Al. (2015). *“Los delitos informáticos: el uso de instrumentos digitales en las redes informáticas y en el ciberespacio”*, en Gaceta Penal & Procesal Penal, n.º 76, Lima.
- Pereira, S. (2013). *La exhibición de documentos y soportes informáticos en el proceso civil*, Pamplona: Thomson Reuters-Aranzadi.
- Pérez, J. (2014). *La prueba electrónica: Consideraciones*. Recuperado de: <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/39084/1/PruebaElectronica2014.pdf>
- Pinto, F. (2017). *La prueba en la era digital*, Madrid: La Ley.
- Portal, J. (2013). *La regulación de la prueba electrónica en el proceso penal*, Revista de Derecho y Proceso Penal.
- Reyes (2013), *La valoración del documento electrónico en Colombia*. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6713655.pdf>.
- Rivera, R. (2011). *La prueba: un análisis racional y práctico*, Madrid: Marcial Pons.
- Rodríguez, J. (2013). *Intervención judicial en los datos de tráfico de telecomunicaciones electrónicas*, Barcelona: Bosch.
- Rodríguez, J. (2014). *Sobre la incidencia de la declaración de invalidez de la Directiva 2006/24/CE en la Ley española sobre conservación de datos relativos a las comunicaciones*, Diario La Ley.
- Rodríguez, J. (2015). *Sobre el valor probatorio de conversaciones mantenidas a través de programas de mensajería instantánea*, Diario La Ley.

- Rubio, J. (2016). *Conservación de la cadena de custodia de una evidencia informática*, en Diario La Ley.
- Rubio, J. (2016). *El correo electrónico como prueba en procedimientos judiciales*, Diario La Ley.
- Sáez, M. (2015). *La prueba obtenida a través de mensajes en redes sociales a raíz de la STS 19 de mayo de 2015*, Diario La Ley.
- Salinas, R. (2013). *“Derecho penal. Parte especial”*, 5.aed., Lima: Grijley.
- Salvadori, I, (2016) “La controvertida relevancia penal del sexting en el derecho italiano y comparado”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 19, Recuperado de <<https://bit.ly/2Lf9pnP>>.
- San Martín, C. (2015). *Derecho procesal penal. Lecciones*, Lima: INPECCP y CE-NALES.
- Silva, J, (2001) *La expansión del derecho penal. Aspectos de política criminal en las sociedades postindustriales*, Madrid: Civitas,
- Tribunal Constitucional, Exp. N.º 00008-2012-PI/TC, Lima: 12 de septiembre del 2012. Véase, al respecto, el f. j. n.º 21.
- Vargas, D. (2017). *Vulnerabilidades en la incorporación y admisibilidad de la prueba electrónica en el proceso penal costarricense*. Recuperado de: <http://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/04/Daniela-Vargas-Acu%C3%B1a-Tesis-Completa.pdf>
- Velasco, E. (2011). *Novedades técnicas de investigación penal vinculadas a las nuevas tecnologías*, Revista de Jurisprudencia.
- Vervaele, J. (2012). *Medidas de investigación de carácter proactivo y uso de información de inteligencia en el proceso penal*, Madrid: La Ley
- Villacampa, C, (2017) “Predadores sexuales on line y menores: grooming y sexting en adolescentes”, en *Revista Electrónica en Ciencias Criminológicas*, n.º 2, , Recuperado de <<https://bit.ly/2LtkUHx>>.
- Villavicencio, F. (2006). *“Derecho pena”l. Parte general*, Lima: Grijley.
- Villavicencio, F. (2014). *“Delitos informáticos”*, en Revista Ius Et Veritas, n.º 49, Lima.
- Villegas, M y Encina, M. (2017). *Validez de medios de prueba tecnológicos*, Diario La Ley.

ANEXOS

ENCUESTA

TIPIFICACIÓN DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA COMO MECANISMO AUTÓNOMO EN LOS DELITOS DE *CHILD GROOMING*. CHICLAYO 2018

Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá obtener la información que posteriormente será analizada e incorporada a la investigación con el título descrito líneas arriba. NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde:

1	2	3	4	5
TOTALMENTE EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	NO OPINA	DE ACUERDO	TOTALMENTE DE ACUERDO

ITEM	TD	D	NO	A	TA
1. ¿Considera usted se deba tipificar la prueba electrónica como mecanismo ante los delitos del child grooming?					
2. ¿Considera usted se deba identificar los mecanismos para poder tipificar la prueba electrónica como mecanismo autónomo de la prueba documental?					
3. ¿Cree usted se deba realizar un análisis del delito child grooming?					
4. ¿Considera usted se deba fundamentar acerca de los delitos de acoso sexual a menores de edad?					
5. ¿Cree usted que la actual regulación sobre los delitos de acoso sexual no son las más idóneas?					
6. ¿Considera usted que la prueba electrónica deba tener un procedimiento probatorio con plena autonomía procesal?					
7. ¿Cree usted que los jueces y fiscales no conocen apropiadamente le procedimiento de la prueba electrónica?					
8. ¿Considera usted que la prueba electrónica sirve como convicción en torno a una afirmación relevante para el proceso?					
9. ¿Cree usted que la prueba electrónica pueda agilizar el proceso probatorio?					
10. ¿Considera usted que la prueba electrónica ayudara a proteger los derechos fundamentales de los menores de edad?					
11. ¿Cree usted que la prueba electrónica ayude a mejorar el valor probatorio del testimonio?					
12. ¿Considera usted que la prueba electrónica genera confiabilidad en el proceso?					
13. ¿Cree usted se deba incorporar políticas de preservación digital dirigidas a la conservación de la confidencialidad?					
14. ¿Considera usted se deba investigar la validez de los documentos presentados?					
15. ¿Cree usted que por medio de la prueba electrónica se podrá disminuir el delito del child grooming?					